

Caudillos, Estado de Derecho y constituciones en Bolivia*

*Salvador Romero Pittari***

Resumen

El estudio intenta contribuir a esclarecer las razones que contribuyeron a debilitar en el país el régimen de derecho que se estableció desde el origen de la República, aunque pronto fue substituido por modalidades de gobierno de tipo caudillista y personalizado con matices propios en diferentes periodos de la historia nacional. Se señalan algunos factores socioculturales que favorecieron la aparición del fenómeno y sus mutaciones a través del tiempo. El lapso considerado va, en forma sucinta, desde los inicios de la República hasta nuestros días. Se examina asimismo el papel de la propia constitucionalidad en la ruptura de la legalidad.

Abstract

The study aims to clarify the reasons that contributed to the weakening of the country's state of rights that was established since the beginning of the republic, although it was soon substituted by charismatic leader's type governments and personalized with its own character in different periods of national history. Some socio-cultural factors that favored the appearance of the phenomenon and their mutations through time are indicated. The

* Este ensayo, escrito en el marco de actividades del Instituto para la Democracia de la Universidad Católica San Pablo, fue inicialmente publicado en una primera versión en la Revista "Opiniones y Análisis", N° 96, La Paz, Noviembre 2008.

** Doctor en Sociología, E.P.H.E., París, Director del Instituto para la Democracia, U.C.B. Autor de varios libros y ensayos.

considered lapse goes, in brief form, from the beginning of the republic to the present time. Also the role of the own constitutionality in the rupture of the legality is examined

1. Algunos elementos teóricos

Este artículo busca examinar las relaciones entre la democracia, el Estado de derecho y la sociedad boliviana, su cultura y los actores sociales que en ella se mueven. Conviene señalar al inicio que el Estado y el derecho mantienen entre ellos una estrecha relación, al punto que algunos teóricos del tema han afirmado la estricta identidad entre uno y otro, tal fue el caso del jurista de origen checo Hans Kelsen

El planteamiento que reduce el Estado al orden jurídico vigente y éste a aquel, ambos concebidos como ideales, independientes de cualquier base material, tiene una doble cara que la equiparación del uno con el otro esconde y termina por dejar en la sombra las especificidades de cada una de las esferas. Si bien nadie negará que el Estado es un sistema de derecho positivo, un ordenamiento coercitivo y normativo, no todos aceptarán que el Estado sea solo eso y que se ponga entre paréntesis el papel de la historia, la cultura y la sociedad en el surgimiento y afincamiento del fenómeno jurídico. Si no, ¿cómo explicar que el derecho en concreto adopte tal o cual forma o contenido y no otro? ¿Y qué hacer con la arbitrariedad, tan común en nuestro medio, cuya obediencia se asegura con la fuerza del Estado? Son los factores históricos, las realidades sociales que explican la particular configuración de los sistemas jurídicos de cada país y sus anomalías.

Por otro lado, el derecho, la norma, Kelsen los presentó puros, como ideas normativas, susceptibles de recurrir a la fuerza para su cumplimiento, formando un ordenamiento piramidal invertido, lógicamente encadenado, sin lagunas, donde todo precepto encuentra su justificación en uno superior hasta llegar a la norma de normas, la Constitución, que sin apoyarse en nada cierra el conjunto. Ahí la rigidez del planteamiento parece atenuarse, ya que la pirámide jurídica cuyo ápice es la Constitución, de la que pende la legalidad de la totalidad del orden normativo, de la jerarquía escalonada de disposiciones y competencias que trazan las fronteras del Estado y de lo que no lo es, quedó abierta, no sustentada en precepto jurídico alguno (Kelsen, 1941 y 1948). Lo que podría interpretarse en sentido de que, si la Ley de Leyes no depende de otra norma y tampoco es creación de la nada sólo puede resultar de la dinámica social, de las luchas y oposiciones, de los acuerdos entre distintos actores

sociales reales que se enfrentan intentado imponer los valores y orientaciones para la sociedad que cada uno de ellos postula¹.

La Constitución reflejaría así los valores que resultan de las oposiciones, transacciones y pactos entre las fuerzas sociales, los actores que, en ciertos momentos, imponen unos en lugar de otros, frente a los cuales quizá los vencidos de ayer podrán más tarde cambiarlos, haciendo prevalecer sus ideales, sus intereses. De esta manera los arreglos entre grupos sociales contrapuestos, de donde surge la constitucionalidad, están sujetos a mutaciones, provenientes del hecho de que los triunfos valorativos, no importa su duración, nunca son finales, últimos. Las nuevas luchas y los nuevos arreglos acechan en el tiempo su oportunidad. Lo que no quiere decir que las sociedades sean volcanismo, ebullición permanente, ninguna podría vivir en ese estado, que, cuando se apodera de ellas, favorece el surgimiento de dictaduras que buscan el orden antes que las transformaciones. Las crisis portadoras de cambios significativos responden a variaciones en la sensibilidad de las poblaciones que toman tiempo para manifestarse. Ahora mismo, las sociedades contemporáneas buscan zanjar sus diferencias de valores, orientaciones y normas a través de mecanismos no violentos que reposan en modalidades de concertación, de diálogos. En tal perspectiva, resulta difícil aceptar la pureza de la juridicidad y la reducción del Estado a ella.

La teoría de Kelsen podría, pues, admitir, en una interpretación amplia, no sólo que el Estado y el sistema jurídico no son completamente equiparables sino también que su realización en un determinado espacio y tiempo no es puramente un ideal, procede de los anhelos, de las aspiraciones, de los intereses de los grupos sociales, regionales o étnicos. La Constitución no es un producto estático, final inmodificable, sigue a los procesos de transformación, de cambio, acelerados o pausados, profundos o superficiales, violentos o consensuados, de los componentes de la sociedad.

Por su parte, el Estado no es tampoco una suerte de rey Midas, como señala un tratadista, que lo que toca lo vuelve milagrosamente derecho, precepto legal, se trata más bien de un conjunto institucional normativo que traduce la sociedad real, con sus quiebres, su cultura, sus saberes y tecnologías, las relaciones con otros Estados y con su medio.

1 Kelsen señala que la norma básica no es propiamente positiva sino hipotética (Kelsen, 1948: 329 y ss).

Dicho esto, no puede desconocerse que el Estado es el creador exclusivo del derecho positivo, es decir, de las normas coercibles cuyo incumplimiento o desacato puede ser objeto de sanción formal, mas no separado de su fundamento social, del pueblo o del Soberano, como hoy se complacen los comunicadores en llamarlo. Sería empero caer en posiciones metafísicas convertirlo en una suerte de ente real, dotado de una voluntad propia, única como lo hicieron los autoritarismos socialistas o fascistas. El Estado histórico, real, está conformado por una multiplicidad de voluntades, aquí más organizadas, allá menos, a menudo opuestas, contradictorias, portadoras de intereses distintos, pero capaces de alcanzar convergencias abiertas u ocultas, formales e informales.

En los sistemas democráticos existen instituciones y mecanismos legales a fin de que el encuentro de los diversos actores de la sociedad, puedan ser públicos y transparentes. Además, las democracias modernas buscan no vulnerar los sentimientos de las minorías. El siglo pasado y el actual ofrecen numerosos ejemplos de concepciones legales que sirvieron y sirven para dominar, rebajar o eliminar al Otro, al diferente, a los grupos minoritarios.

De los horrores e injusticias que ahí se cometieron surgió una nueva sensibilidad de hombres y sociedades que, sin negar el carácter coercitivo de la norma, que no es equivalente a una exclusiva relación de violencia policiaca o militar, sino el resorte último de la legalidad, busca reconocer al Otro y sus valores, concertar entre mayorías y minorías, desarrollar los espacios de discusión, de debate que restrinjan los límites del poder de las mayorías, de los que se ocupó Habermas (1997)

Este autor encontró en el diálogo libre las bases del consenso para que las discusiones, que en la vida cotidiana mantienen actores que se consideran iguales, arriben a un entendimiento. La norma legal, en un Estado de derecho democrático, es, para él, aquella que conlleva una promesa de emancipación, fundada en la pretensión de encarnar el derecho natural que todos los hombres deberían aceptar. Ese derecho positivo se concibe como una suerte de medio institucional que penetra las discusiones de actores sociales, puestos en una posición de igualdad, promoviendo, la racionalidad de los argumentos en las controversias, la publicidad, así como la solidaridad y el reconocimiento mutuo de los participantes. Debates cuyos resultados, en ocasiones, pueden incorporarse en la esfera normativa estatal.

Se trata para Habermas de promover en las sociedades modernas, que han sufrido guerras, violencia, genocidios como consecuencia del intento de absolutizar una cultura, una nación única sobre las demás, un 'patriotismo constitucional' (Habermas, 1991), llamado a crear un tipo distinto de ciudadanía que, sin negar el peso de las herencias del pasado, de las tradiciones, de las pertenencias étnicas o regionales, establece una instancia de conciliación superior, fundada en la adhesión a principios jurídicos y democráticos, como el de que todos nacen libres e iguales en derecho, lo que permite la realización de diálogos basados en la argumentación y la comunicación libre. Sin idealizar la propuesta, aparece aquí un intento de responder al fraccionamiento valorativo, ético, de las sociedades modernas, reconociendo al Estado como el ámbito de la ley común y pidiendo al ciudadano su adhesión por encima de sus particularismos

Un interés semejante ha llevado a D. Schanapper, filósofa francesa, a reflexionar sobre el concepto de Comunidad de Ciudadanos cuyo objetivo es integrar a todos los componentes de una sociedad en un orden político, que por encima de los particularismos étnicos, regionales, culturales, lingüísticos o religiosos, propios de la sociedad civil, funda un vínculo social democrático conformado por ciudadanos iguales en derechos jurídicos y políticos, más allá de sus diferencias de origen. Este orden, frágil pero prometedor, únicamente puede funcionar en la medida en que consigue resolver mediante las leyes y el debate los conflictos entre grupos sociales con intereses opuestos (Schanapper, 2000 y 2003).

En el reconocimiento del otro, en las discusiones paritarias se fundaría la legitimidad del actual orden democrático plural. La lección de la experiencia histórica recogida de los totalitarismos excluyentes del siglo pasado en Europa, Asia y África es que en un Estado legal, la Constitución debe forjar instituciones jurídicas que permitan la convivencia de actores cuyos valores y fines no se pueden reducir a los del Otro. Donde esto falla, sostiene H. J. Laski, un politólogo inglés, la estructura constitucional se fragiliza y los movimientos hacia la dictadura son rápidos y hallan la vía expedita (Laski, 1936: 102).

Si la Constitución expresa los valores de grupos sociales en conflicto por la historicidad de la sociedad, es decir, por controlar las orientaciones de ésta hacia la justicia, como forma de reparto del excedente social, hacia las modalidades de preservar o de transformar el orden, de producirlo o reproducirlo, para emplear una expresión de A. Touraine, no cabe duda que la construcción de la opinión pública es fundamental

para la conformación de un régimen constitucional. Asimismo, la forja de las opiniones requiere ahora para desarrollarse de la independencia, transparencia y objetividad de los medios de comunicación social.

Los estados de opinión, no meramente reflexivos sino críticos de la situación, cristalizan en acciones de las agrupaciones sociales, para cambiar una situación considerada no justa. Sin embargo, las mismas opiniones se rebelan hoy ante la pretensión de imponer el interés de segmentos sociales sin conciliar con los de los otros, negando la solidaridad entre los componentes del todo social, actitud que desemboca en la urgencia de impulsar la búsqueda de entendimientos, de diálogos, sin los cuales se corre el riesgo de deslegitimar la Constitución, acrecentado los derechos de unos a costa de los de los demás. La opinión pública local y de afuera no tolera la inequidad manifiesta, capaz de conducir a luchas abiertas por el cambio de normas que no garantizan el derecho y las demandas de las minorías.

El diálogo ha alcanzado en la sociedad boliviana reciente, al igual que en otras, un papel casi mágico que en los hechos le ha permitido pasarse de las condiciones mínimas para alcanzar los objetivos, por lo menos en cuanto a la racionalidad de los argumentos, a la simetría de los actores, a la publicidad, aspectos sobre los cuales J. Habermas insiste. Aunque hay que reconocer que finalmente en los acuerdos últimos sobre la modificación de la Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente, el diálogo ha obtenido resultados positivos, prueba evidente que los bolivianos, a despecho de nuestras divergencias y oposiciones, tenemos la voluntad de continuar viviendo juntos, que por debajo de las discrepancias existe un denominador constituido por un radical sentimiento de conformar una nacionalidad dentro de una legalidad común, que una historia compartida de más de 500 años ha creado diferencias, injusticias, pero también vínculos de solidaridad, de cooperación, de afectividad e instituciones que ha permitido abrir el debate, llevar a referéndum un texto constitucional negociado, aun si todas las partes no se reconocen en él. Cualquiera sea el resultado de la consulta, que el país espera se realice en forma transparente, la democracia plural ha pasado una de sus pruebas más difíciles y costosas en términos sociales y de convivencia, mostrando que solo el Estado de Derecho, donde se respeta, así sea imperfectamente, el derecho de los disidentes, de las minorías de oposición, se pueden construir arreglos para la convivencia presente, así como para echar las bases de un futuro compartido.

Los bolivianos no hemos sido afectos a valorar el Estado de derecho, al contrario, por diversas razones que en este artículo intentaremos establecer, los partidos, los agentes sociales, la opinión, lo consideró en los orígenes de la República como supeditado a las personalidades, a la fuerza de los hombres del destino y luego, en el siglo XX, ganado al mito de la Revolución que se añadió a las inclinaciones políticas precedentes, se concibió la democracia y sus normas como algo transitorio, que se debía soportar pasajeramente hasta que la utopía de la revolución se materialice. Tales ideas fueron compartidas por muchos partidos, asociaciones sindicales y pensadores del siglo pasado. Su atractivo permanece hasta hoy. El nuevo milenio, a su vez, trae otros retos para el Estado de derecho y el sistema representativo, favorecidos por el reconocimiento de la multiculturalidad y etnicidad del país. La historia de tales desafíos no es, empero, nueva.

La normatividad, su contenido y sus aplicaciones se tomaron como algo que se puede poner de lado cuando las ambiciones de un poder autoritario, de un caudillo, lo requerían, o, más cerca de nuestros días, cuando las necesidades de un proceso revolucionario así lo exigen.

Antes de examinar las concepciones y prácticas que contribuyeron a debilitar el Estado de derecho en el país conviene clarificar el alcance de esos términos en el texto. Se trata, antes que de una definición precisa, de señalar los criterios mínimos que se deben observar para considerarlo como vigente en una sociedad:

1. El poder del gobernante debe ser legal, vale decir que nace de una elección universal por voto mayoritario, efectuada por los ciudadanos que emiten el sufragio de manera directa, igualitaria y secreta, libres de coacciones físicas o morales y de acuerdo a las leyes electorales.
2. El gobierno se legitima reconociendo y respetando la Constitución y el ordenamiento jurídico, la independencia de los poderes del Estado, en cuyo marco sujeta sus decisiones y su actuar.
3. Todas las corrientes de opinión y de intereses que existen en la sociedad deben poder organizarse para participar en igualdad de condiciones en las elecciones (Román Armendáriz, 1993: 82; Habermas,

El Estado de derecho es uno de los tipos de Estado tipificado por el origen del poder, por la forma de ejercerlo y por quienes participan en su conformación, que se

contraponen a los Estados totalitarios, autoritarios o revolucionarios. En este último caso el poder nace de la revolución y no de la Constitución. La llamada Revolución Nacional de 1952, en Bolivia, fue criticada por algunos politólogos por haber basado su legitimidad y su legalidad en el régimen anterior, en lugar de hacerlo en el acto revolucionario, hecho que terminó, según esos puntos de vista, por impedir su realización completa (Malloy, 1989), aunque en los hechos sus políticas nacieron del acto revolucionario.

En consecuencia, las características señaladas aluden, antes que al aspecto sustantivo de los derechos y de las libertades, a la forma de establecer el gobierno y a sus límites. Por eso el Estado de derecho significa al mismo tiempo la prevalencia de la Constitución y del sistema democrático, si bien la proposición inversa no es cierta necesariamente, pero será difícil concebir en la actualidad una democracia que en la práctica no sea igualmente constitucional y de derecho (Boelli, 1976: 388 y ss).

2. La Constitución y los caudillismos personalizados del siglo XIX

La República heredó las formas de legitimidad del poder propias de la monarquía española. Durante los 15 años de la Guerra de la Independencia se forjó en el territorio de la Audiencia de Charcas una cierta conciencia nacional, sobre todo entre las élites de las principales ciudades, sin embargo el problema de la legitimidad del poder no fue resuelto. La autoridad del Rey era concreta y recibía adhesiones fuertemente personalizadas de sus súbditos, ponía en juego lazos emotivos entre estos últimos y la persona del Rey, representante de una dinastía legítima, de acuerdo al modelo jerarquizado y paternalista bien conocido y cercano de la familia y la Iglesia.

La entronización de un nuevo monarca daba lugar a enormes festejos en los virreinos, donde se paseaba en las poblaciones la real efigie para reconocimiento de todos sus sujetos. En las festividades las lágrimas de emoción se mezclaban con las risas de alegría, de entusiasmo. Como describe G. R. Moreno en "La pompa del retrato" el día señalado para el acto, "un solo impulso de fidelidad a la dinastía y de amor a la metrópoli movía unánimemente a peninsulares y a nativos" (Buenos Aires) (Moreno, 1940: 10), aunque ya se conocían las novedades del terrible suceso de la invasión napoleónica a España. Chuquisaca no fue menos en el orden de los sentimientos de lealtad y de devoción al monarca (Moreno, 1940: 11).

Otra ilustración de la afirmación se halla en el uso durante la sublevación de 1780 por parte de Tupak Katari del título de virrey y de virreina para su acompañante. Una estratagema, sin duda, pero que no deja de sorprender, ya que el líder de la rebelión indígena se presenta ante sus seguidores como representante del rey y no de los reinos o imperios precolombinos, lo que prueba la profundidad de la penetración de la legitimidad de la Corona española. Ésta no perdía su prestigio por las frecuentes violaciones de la norma en los territorios del Imperio en América imputado a la perfidia o incapacidad de los malos comisionados locales. Aquí no se puede pasar por alto el papel que tuvo la Iglesia en la aceptación de esa forma de autoridad. Ciertamente, en ese tiempo el poder regio ya estaba puesto en entredicho por las ideologías de la Ilustración, por el liberalismo, al cual adherían muchos de los conductores del proceso de la independencia, por la Revolución francesa y la Independencia norteamericana.

Los libertadores Bolívar y Sucre fueron objeto de un culto republicano que no se dio a ningún otro personaje de la independencia. El país y su capital tomaron el nombre de los de aquéllos. Fueron considerados al instar de Napoleón como fundadores de dinastías, no como herederos de dinastía. A su partida, los sucesores no lograron obtener el mismo trato y buscaron una legitimidad más abstracta en las leyes, en la Constitución, pero no fue suficiente. En gran parte, la vieja tradición popular de fundar el poder en nexos personalizados, en las cualidades del hombre, del conductor, que valían más que los principios abstractos legales proclamados por la Constitución, permaneció. Quizá por ello éste no se sentía obligado a cumplirlos, sin olvidar que la propia legalidad nacida con el inicio republicano le daba espacio para movidas dejadas a su arbitrio.

Mientras la lealtad que unía a los súbditos de América con la Corona española encajaba en un modelo de legitimidad tradicional, los vínculos que se forjan en la República entre el gobernante y sus seguidores, que le permiten hacerse del poder y mantenerlo, corresponden al liderazgo carismático, en términos de M. Weber. El caudillo debía mostrar cualidades excepcionales, sobre todo en la fase de adquisición del mando, *in statu nascendi* del poder, aunque tenían que continuar manifestándose durante su ejercicio (Weber, 1964: 197 y ss.).

Fenómenos internos a las sociedades hispanoamericanas acogieron durante la formación de la República este tipo de conducción caudillista, tales como el bajo nivel

educativo del grueso de la población, las rigideces de la estratificación estamental, la pequeña talla de las ciudades, en las cuales las interacciones cara a cara predominaban, cobijando el establecimiento de sólidos nexos personales en provecho del caudillo, las rivalidades de campanario que obstaculizaba la formación de una clase social dominante unificada, también jugaba en beneficio de las personalidades de excepción

Sin embargo, una vez logrado el poder, acompañado de los símbolos que lo expresan, como la Casa de Gobierno, los pronunciamientos populares de respaldo, el apoyo del ejército o al menos de sus unidades más importantes, sin el cual poco se podía hacer, se buscaba la legalidad formal, tal como la designación del título de presidente por la Asamblea Nacional o la aprobación de un texto constitucional, cortado a la medida del detentador del gobierno. Las cualidades carismáticas solas no bastaban. Éstas se engalanaban además con la legalidad formal, sin perderse. Esto probablemente se debía al hecho de que el carisma en sí mismo adolece de una inestabilidad intrínseca, que los beneficiados con él intentaban estabilizar por medios constitucionales (Weber, 1964-199)

El equipo administrativo se reclutaba entre los seguidores fieles, antes que entre los hombres con méritos propios. El personalismo de los gobernantes ponía en juego complejas interacciones entre distintas formas de legitimidad, que iban del carisma a la legalidad. El peso de éstas adquiría sello propio con cada presidente.

Así, en los atributos del líder, que conseguía cimentar lealtades, relaciones de apoyo de persona a persona, radicarón ciertos elementos de la respuesta social a la destrucción y el desorden de 15 años de guerras por la independencia. Había urgencias internas, vacíos de poder, rivalidades provincianas y externas, problemas con los países vecinos, que aguijonearon el caudillismo impulsado por aspiraciones nobles o por bajas pasiones. A la par se estableció el marco legal, que además de una respuesta a la volatilidad del carisma, era un ejemplo de la modernización del Estado, que anheló la independencia, pero allí aparecieron también disposiciones que complotaron para apuntalar el ejercicio abusivo del poder, el régimen presidencialista casi sin restricciones.

Pero, ¿cuáles eran las cualidades que se esperaba tuviese un eventual candidato a ejercer el mando? La respuesta no es simple. Probablemente se admiraba la valentía, el coraje, la inteligencia, se reconocía la hombra, las habilidades de comando, la palabra suelta. Algunos de los militares de la emancipación ya eran aclamados por esas virtudes.

heroicas, otros tenían que manifestarlas, ganarlas en la acción. De ahí salía el prestigio del jefe, que expresaba al mismo tiempo el sentimiento de orgullo de sus seguidores, pero no era suficiente. Requería asimismo contar con la fuerza, con el ejército, para alcanzar el cargo y mantenerlo. Ese conjunto de rasgos y atributos, presentados de manera impresionista más que sistemática, hacían parte de una cultura local con poco desarrollo educativo, científico, tecnológico, con débil densidad poblacional y con una carga fuerte de interacciones basadas en el conocimiento personal de la gente. Por su parte, los rasgos presumidos de los conductores se hacían evidentes cuando se los ratificaba en los actos, reforzando las expectativas de la cultura de origen.

Tales pretensiones en torno a la figura del gobernante tuvieron gran influencia, no exclusividad, para generar y para consolidar el caudillismo, que no sin razones trató en todos los casos de hallar una justificación en la legalidad y, en algún grado, la encontró en las constituciones, aunque en la práctica buscó primero apoyarse en las lealtades personalizadas, en una extensa red de relaciones familiares, de padrino y compadrazgo (Soriano de García Pelayo, 1996), de amistades y paisanos. Si bien el caudillismo político no es ni ha sido un fenómeno exclusivo de Bolivia, ni siquiera de América Latina², tampoco lo fue el régimen presidencialista fuerte que se impuso en todas las constituciones del país hasta hoy día, que igualmente fue común en el continente.

Sería equivocado creer que los textos constitucionales sirvieron únicamente como un mero adorno prescindible, a despecho de su reducida aplicación, que no fue solo republicana, como atestigua la frase conocida de los encomenderos del período virreinal: "Se acata pero no se cumple". No carecieron de efectos sociales. Sin duda, poco podía la normativa legal sola para deshacer la conducción voluntarista, autoritaria, del gobernante, sostenida por la población. "Los estados de excepción o de sitio" y algunas otras prerrogativas contenidos en la norma básica, que componían la institución del presidencialismo, constituyeron un útil instrumento para operar según las conveniencias de los caudillos, para burlar la legalidad con la legalidad.

Sin embargo, la Constitución, las normas, produjeron consecuencias en otros órdenes institucionales, conquistaron poco a poco espacios de la vida práctica del ciudadano, ganando terreno inicialmente en aquellos ámbitos que eran los más distantes del interés inmediato de los gobernantes. Los códigos legales se tornaron en los usos para el

2 Para ver la continua influencia de esta institución en el país, Lavaud. (1988: 89-113)

desenvolvimiento de los negocios ordinarios. Los tribunales de justicia, herederos de la Audiencia de Charcas, se alzaron en todos los departamentos y provincias del país. Más aun, con el tiempo lograron poner coto o atenuar el desempeño del poder personalizado e inclusive, cuando la juridicidad tuvo mayor respaldo de la opinión, derrotarlo, como sucedió con los intentos de prórrogas presidenciales en la década de los años 20, donde la Constitución se invocó contra la arbitrariedad

La dirección política personalizada, caudillista, tomó el ejercicio del poder como si fuese de su dominio privativo, favorecido por las debilidades institucionales, por el poco arraigo de las normas (Soriano de García Pelayo, 1996: 9), por la estrechez del medio social y cultural. Pero uno detrás de otro, los presidentes del siglo XIX elaboraron constituciones que no les impidieron gobernar siguiendo su antojo y sus caprichos, a golpes de estados de sitio. Allí, como se dijo, se encontraba el manantial que llevaba agua al molino de aquéllos. Aunque, al lado de estas disposiciones, existía asimismo el reconocimiento de garantías y derechos ciudadanos, como la igualdad legal, la seguridad individual, la inviolabilidad domiciliaria, la abolición de los privilegios de nacimiento, la libertad de pensamiento y expresión, los tribunales de justicia con una vocación de independencia respecto a los gobiernos, frecuentemente inobservados³, pero que pesaban, ya se dijo, en la organización de la trama social y hacia los cuales miraba la opinión pública para hacer los juicios sobre el desempeño de las autoridades

De esta manera, la usanza de elaborar constituciones con cada régimen era un proceso de doble filo: por un lado se inclinaba hacia el interés del detentador del mando, por otro, formaba progresivamente en la ciudadanía la conciencia de las prerrogativas que podían ampararla y establecía nuevos tipos de relaciones sociales que, no por débiles, eran inexistentes. Ahí estaban y siguen ahí

Sin descuidar que resulta difícil reducir la práctica constitucional exclusivamente a intereses instrumentales, hubo algo más. Los gobernantes de turno buscaban mostrarse con esos textos como iniciadores o reencauzadores de un proceso que se había extraviado en manos de su antecesor, generalmente derrocado violentamente a través de revoluciones, cuartelazos o pronunciamientos que en oportunidades añadían un contenido popular, de participación del pueblo en el levantamiento

3 Estos derechos y garantías ya se incorporaron en la Constitución Bolivariana de 1826 y fueron ampliados y perfeccionados en los siguientes textos constitucionales (Irigoyen, 1952)

Cada nuevo mandatario sostenía que volvía a los valores originales de la República, si bien resulta difícil saber a qué principios u orientaciones se referían. Probablemente aludía a los ideales que prometió la independencia: libertad, ciudadanía igualitaria, progreso. De allí la necesidad de establecer un nuevo texto constitucional, para recuperarlos y darles vigencia. Y a veces se intentó cumplir, no todo era farsa.

A la caída del mariscal Santa Cruz, después de la Confederación Perú-Boliviana, el general Velasco se hizo del poder. Llamó a su régimen "La Restauración". Otro levantamiento militar entregó el gobierno al general Ballivián, vencedor de Ingavi; el movimiento tomó el nombre de "Regeneración" y procedió a aprobar una nueva constitución de carácter autocrático. Los intentos de golpes de estado y la agitación popular agotaron a Ballivián, quien nombró un sucesor provisional que fue rápidamente derrocado. Velasco reasumió la presidencia pero volvió a ser expulsado, esta vez por el general Belzu, quien encabezó un movimiento militar que llevó su nombre y procedió a votar otra Constitución; su régimen tomó un cariz populista.

Un observador francés⁴, refiriéndose a Santa Cruz, pero sus apreciaciones valen para los demás, informaba a su cancillería: "El gobierno republicano representativo en Bolivia es una palabra hueca.. la realidad es un absolutismo puro y mal cifrado bajo libreas de libertad...Yo no podría decir que sea un crimen...Lo creo hasta útil para el país y acaso indispensable, porque por enojoso y abusivo que sea el gobierno absoluto... es el sólo sistema a que pueden aspirar por largo tiempo los estados sudamericanos, el solo que puede salvarlos de una ruina inminente y regenerarlos, porque cuando un pueblo ha tenido la desgracia de caer en la anarquía o en la completa desmoralización no puede salir de ese estado sino echándose en los brazos de uno solo. Ejerce, sobre todo, funestos efectos sobre la moral pública". Si bien la legalidad tuvo igualmente su papel en el drama.

La sucesión de presidentes y constituciones hasta el fin de la Guerra del Pacífico fue de estilo parecido, con alguna excepción, tales los casos de Tomás Frías y Adolfo Ballivián, breves interludios en un mar de revueltas, de estados de sitio, que ponían la norma al margen y entregaban casi sin retención las decisiones al gobernante del momento

4 M. Bouchet Martigny, Carta citada por Arqueadas (1923: 114 y ss).

La Constitución proclama principios y derechos nobles, instituciones meditadas, frecuentemente vistos como innecesarios por el personaje de turno en el poder, salvo los capítulos que le daban facultades extraordinarias, juzgadas bien merecidas por aquel que había alcanzado el mando por su coraje, perseverancia, por sus habilidades en el manejo de la tropa y por el favor de sus camaradas, pronto a cambiar por otro

El personalismo del caudillo, que provenía en parte de las tradiciones heredadas de España, halló un modelo en Napoleón y sus mariscales, que esos hombres en busca de fama y poder se apresuraron en hacer suyo e imitar Santa Cruz, dicen sus biógrafos, molestaba a la aristocracia limeña por los aires napoleónicos que se daba en el trato con la gente (Crespo, 1944). En el país existió un culto popular por el Emperador, manifiesto en grabados, estatuillas de estuco e incluso de bronce o mármol hasta no mucho vendidas en las ferias como la de Alasitas.

La tiranía de Melgarejo, que duró seis años en los cuales se cometieron los mayores atropellos, abusos y crímenes contra las personas y sus bienes de los que la sociedad tenía memoria, también tuvo su Constitución, aunque ella no levantó bandera alguna ni defendió principios de justificación, salvo la ambición del hombre. El régimen no fue una excepción, aunque probablemente por su duración y porque condujo al extremo las tendencias ya antes manifiestas, fue el que el país sintió más. Su aparición dio más tarde lugar a un debate intelectual. Por un lado hubo quienes, como A. Gutiérrez, consideraron a Melgarejo no como un hecho extraordinario ni único sino con predecesores que lo anunciaron y continuadores que lo imitaron, la expresión de un fenómeno social, estructural provocado en no poca medida por el apego y sometimiento de la población al caudillo fuerte, osado, temerario, brutal, que encarnaba el destino. El melgarejismo, sostuvo Gutiérrez, es una enfermedad social: "La primera de sus condiciones es la sumisión, silenciosa, absoluta, sin veleidades de resistencia (del ciudadano). Debe ofrecer ese homenaje a un poder despótico, arbitrario, voluntarioso, fuera de toda restricción legal" (Gutiérrez, 1975: 274)⁵. Quizá porque el autócrata, como señaló H. Kelsen, era el único investido de derechos políticos, que conceden al titular el monopolio en la forja de la voluntad estatal. Ni siquiera es indispensable la conveniencia privada, el melgarejismo puede ser desinteresado, desprendido. Lo fundamental es que apoye al interés del que manda, a su voluntad. Hubo melgarejismo antes de Melgarejo, lo hay después de él

5 Esta obra probablemente constituyó uno de los primeros trabajos sistemáticos sobre el caudillismo personalizado escrito en el país y también en el extranjero (1916, 1ra. ed.)

(Gutiérrez, 1975). Por otra, hubo quienes lo consideraron un accidente desgraciado de la historia, no parte de la cultura política nacional, tal A. Guzmán, destacando la naturaleza singular del régimen.

Lo cierto es que Melgarejo constituyó el ejemplo más trágico de esa legitimidad del poder que se apoyaba en los lazos y lealtades personalizadas, exigidas por la naturaleza del liderazgo, en una sociedad pequeña, desconfiada de las abstracciones y generalizaciones del derecho, como la igualdad jurídica del ciudadano.

Desde la proclamación de la independencia hasta 1880, fin de la guerra con Chile, se promulgaron once constituciones: Santa Cruz (1831) (1834), Velasco (1839), J. Ballivián (1843), Belzú (1851), Achá (1861), Melgarejo (1868), Morales (1871), Daza (1878). Unas más autoritarias, otras más liberales, pero todas poco observadas. Únicamente el líder del civilismo J. M. Linares se sacó la careta y se proclamó dictador, lo que habían sido en gran medida los presidentes que lo antecedieron. Sin embargo, su abierta ruptura con la legalidad le acarreó desde el primer momento resistencias. La opinión, en particular ilustrada, aspiraba a tener la norma básica de la República, aunque en la práctica fuese aplicada muy imperfectamente y en escasa medida. Nunca desaparecieron los sentimientos ambivalentes respecto a ella, al mismo tiempo de respeto y de desconsideración, a veces en la misma persona. Más aun, a través de su vigencia, ya se señaló, se fueron desarrollando, vulneradas por los desbordes de los mandones de turno, las instituciones republicanas. Es el caso del propio parlamento, que, a pesar de su servilismo hacia los caudillos, no faltó jamás en su seno de un núcleo respetable de oposición, víctima de todos los atropellos y abusos, pero comprometido con la ley.

Los partidos tardaron en aparecer y jamás superaron del todo, especialmente en aquellos años, el apego al mando de los caudillos. Las ideologías cedían frente a las personas alrededor de las cuales se organizaban las posiciones. Ni la izquierda ni la derecha eran entidades fijas, polos claros de referencia. Sin duda, el liberalismo de los libertadores, con sus ataques a la Iglesia, a las añosas tradiciones, pudo ser considerado como de izquierda, y sus adversarios, reclutados entre lo que quedaba del antiguo régimen, como de derecha. Con J. Ballivián apareció, tal vez no voluntariamente, un embrión de un partido aristocratizante, al cual se opuso el populismo cholo de Belzú. Pero el carácter estamental de la sociedad boliviana, apenas tocado por la Independencia, no favorecía la polarización derecha/ izquierda, poco utilizada por aquel tiempo.

El ballivianismo, a la caída de Linares, tomó el nombre de partido Rojo, con un tinte de legalismo y democracia que intentaron imponer durante los breves gobiernos de T. Frias y A. Ballivián Coll, presidente que fue elegido por voto directo, como antes lo fue Córdova. Los enemigos del rojismo continuaron tomando el nombre del líder que seguían.

3. Los partidos doctrinarios y sus conductores

Después de la Guerra del Pacífico aparecieron dos grupos. Por un lado, los conservadores, tipificados como de derecha, aunque en verdad eran distintas agrupaciones partidarias, no siempre en buenas relaciones entre ellas pero que resultaron unidas bajo la misma etiqueta por los retos políticos e ideológicos que les lanzó el liberalismo. Éste encarnó la opción de izquierda en la posguerra del Pacífico. Durante los años de su gobierno el partido liberal se fue fraccionando y resultó empujado hacia la derecha por el surgimiento de posiciones más avanzadas en la izquierda. Los partidos frecuentemente crecían o se forjaban con los transfugios que venían del partido que se desgastaba. A pesar de su mayor contenido doctrinario, los partidos de la época no escaparon del todo a modalidades de caudillismo.

Con el tiempo, la etiqueta de derecha no fue una auto-nominación, se la recibía de los oponentes. El espectro político boliviano llegaba hasta el centro izquierda. Así, la mecánica del juego de partidos condujo hacia la derecha a formaciones que nacieron en la izquierda, pero por la renovación de su ala extrema, que se radicalizaba, aparecían en la otra banda⁶. Así ocurrió con el liberalismo a partir de la segunda década del siglo XX. El mismo camino fue seguido luego por varias otras agrupaciones políticas, como el M.N.R.

La legalidad en general encontró mayor atención en los partidos de derecha. Mas no es difícil señalar casos en contrario, sobre todo cuando esta orientación política tomó la forma de una dictadura, mientras las formaciones radicales o de izquierda marxista, cuando se organizaron, imbuidas de la idea de revolución, se caracterizaron por un desapego o más bien rechazo de la constitucionalidad vigente, tildada de formalista y parcializada.

⁶ Sobre el tema en Francia, ver Winock (2007) y también Sirenelli (2006).

La derecha nacional, que tardó en aparecer y asumirse como tal, perdió sus raíces originales aristocratizantes y católicas, que fueron la del partido rojo y aquellos otros formados en el periodo conservador, para desde la década de los 40 encarnar una posición opuesta, sobre todo al socialismo, al marxismo, al radicalismo guerrillero, y más cerca de nuestros días, inclinada hacia el mercado, a la reducción del Estado, defendiendo la institucionalidad legal y el pluralismo. Partidos como ADN o el MNR y sus conductores ilustran esta evolución. Como en otras sociedades, parte de la izquierda moderada se deslizó hacia la derecha, desplazada por la dinámica de la radicalización del polo extremo, dinámica que se acentuó desde el último tercio del siglo pasado.

La derrota del Pacífico sacudió profundamente al país. La certeza dolorosa de sentirse por primera vez sin atenuantes del lado perdedor, la ocupación del Litoral por los chilenos, produjo en los bolivianos un estado de ánimo frustrado, crítico, deseoso de superar los errores del pasado que dio lugar a una auto-reflexión que se volcó hacia el estudio de la geografía, del territorio, de la historia y de la cultura nacional

De esta manera se puso el dedo acusador sobre la debilidad institucional del Estado, debida a los permanentes cuartelazos, a las autocracias individualizadas que pasaban por encima de toda legalidad, a la falta de concepciones ideológicas de los partidos, al "diletantismo de la tiranía", según la sentencia de A. Gutiérrez, y en fin, a la poca instrucción de la población, a su reducido número. Durkheim hubiese añadido a estas tendencias la densidad moral, entendida como la preferencia por los contactos cercanos, íntimos, entre personas que daban a cada interlocutor un amplio conocimiento práctico del otro, generador de simpatías y antipatías durables, predominante en los pueblos y ciudades del país, de reducida dimensión.

Se convocó a la Asamblea de 1880 que votó una nueva Constitución, vigente por más de 40 años. Allí aparecieron en acción partidos como el liberal, dirigido por el general E. Camacho, opuesto a la paz con Chile y al pragmatismo de quienes buscaban un pronto acuerdo con el vencedor. La Asamblea designó presidente al general Campero, quien, a pesar de ser considerado el iniciador del periodo conservador, era ideológicamente cercano al liberalismo.

La primera elección popular después del conflicto (1884), en la que el gobierno mantuvo una posición neutral, opuso a G. Pacheco, con su partido Demócrata, al

Constitucional de Arce y a los liberales de Camacho. Ganó el primero, por estrecho margen de votos, y fue designado presidente constitucional. En la siguiente elección (1888) volvió a correr E. Camacho por los liberales contra A. Arce, del constitucionalismo, que ya había hecho suyos los planteamientos de M. Baptista, su correligionario, de combatir por la religión, el orden, la moral, la familia y la buenas costumbres, a "la empresa jacobina" en Bolivia, que no era otra que la ideología del liberalismo. Los constitucionales ganaron la justa electoral y Arce se posesionó como presidente. En las nuevas elecciones (1892), Baptista, a pesar de obtener una muy corta ventaja sobre Camacho y no contar con seguridad con el respaldo congresal, fue proclamado presidente e inauguró su periodo con un Estado de sitio para dispersar la oposición de la cámaras legislativas.

En el acto electoral de 1896, S. Fernández Alonso, por el partido constitucional, venció a J. M. Pando, que representó al grupo liberal. Camacho ya no se presentó, probablemente cansado de sus anteriores derrotas y distanciado de los jóvenes de su partido. Alonso fue el último gobernante conservador, cayó vencido por la llamada Revolución Federal, propiciada por el liberalismo, que desde su fundación había proclamado su oposición a las tomas del gobierno por la violencia.

Los conservadores manejaron el país con continuas suspensiones de los derechos constitucionales. El régimen presidencialista de la Constitución, con algunos retoques respecto al pasado, continuó. Tampoco se distinguieron por su limpieza en las elecciones, gobernaron con su gente, excluyendo a la oposición. Sin embargo, ya no se trató totalmente de la arbitrariedad caprichosa, voluntarista y personal de los caudillos de la época precedente. Las luchas políticas se despersonalizaron en alguna medida y había que contar con las elecciones y con el respaldo de la opinión, de los electores, además del propio partido, para alcanzar el Gobierno. Lo que no impidió la aparición de hombres fuertes, enérgicos, caudillos a su manera, no siempre seguidores de la ley, de actos electorales amañados y de gobiernos donde los amigos personales cercaban el despacho presidencial.

El partido liberal fue el más doctrinario de la época, enroló a gran parte de la juventud nacida en el momento del conflicto con Chile. Se trató de un liberalismo más político y libertario que económico y de mercado. B. Saavedra, en un libro escrito cuando ya se había alejado del liberalismo de sus años mozos, recordó los ideales de esa agrupación.

que propugnaban la libertad como legítima expansión de las actividades personales, la búsqueda del progreso, la soberanía del pueblo, el sufragio popular consciente y depurado, la instrucción básica obligatoria y gratuita, la libertad de palabra, prensa y asociación (Saavedra 1921: 75). Empero, una vez llegado al poder se mostraron gradualistas en la implantación de derechos y partidarios de controlarlos desde arriba. Asimismo, no consiguieron escapar al fenómeno del personalismo político, calificado por algún autor como una inmunodeficiencia de las sociedades hispanoamericanas (Soriano de García Pelayo, 1996: 11), particularmente grave en entre nosotros

La revolución liberal, que asentó en La Paz el poder judicial y legislativo, trajo cambios en las relaciones de los departamentos del país, en la estratificación social, en sentido de una apertura en beneficio del sector tipificado como medio, en particular del cholo, que los propios revolucionarios miraron frecuentemente con temor, como una subversión de rangos.

La Asamblea nacional instalada en Oruro después de la victoria liberal (1899) designó presidente a J. M. Pando, al cual sucedieron por voto popular cuatro otros gobiernos liberales: I. Montes (1904), E. Villazón (1909), I. Montes (1913) y J. Gutiérrez Guerra (1917). Faltaba algo más de un año para concluir el mandato de este último (1920) cuando fue derrocado por un golpe civil-militar promovido por los republicanos, partido formado por los disidentes del liberalismo, los restos de los viejos conservadores y algunos jóvenes.

Los gobernantes liberales, en su mayoría, tampoco dejaron de lado los conocidos estados de sitio, los confinamientos y destierros de sus adversarios, y se volvieron igualmente culpables de manipular las elecciones para sacar vencedores a sus candidatos. Las políticas de conceder prebendas a los fieles y alejar a los menos dispuestos a inclinarse ante el mandatario terminaron por fraccionar el partido, los disidentes engrosaron la oposición y hastiados de las prácticas abusivas recurrieron al golpe de Estado.

No todos los presidentes conservadores y liberales cayeron en el caudillismo personalista, en el cual confluían, tal como recordó C. Schmitt, uno de los teóricos de este tipo de gobierno, dos componentes: el gobernante dotado de una personalidad dominante y “la situación de las cosas” (Schmitt, 1968), es decir, las circunstancias

en las cuales se movía, que obligaron a menudo a los gobernantes a continuar con prácticas ilegales y tomas de decisiones *motu proprio*, atropelladoras e inconsultas

En el caso boliviano no hay duda que además de los factores señalados que alimentaron el fenómeno del caudillismo político del siglo XIX y que no terminaron de desaparecer en la siguiente centuria, pese al relativo progreso social, la amenazante situación de las cosas internacionales, las divisiones internas crearon una situación difícil que complotó para el resurgimiento de la conducción caudillista, considerada como la única posible e indispensable a fin de evitar el desastre Arce, entre los conservadores y Montes, entre los liberales, constituyeron una ilustración del modelo. El último concentró el poder no solo de su presidencia, sino también del manejo del partido a su gusto. Controló la prensa y el Ejército.

La substitución del liberalismo, que en sus años de gobierno había llegado a conformar una oligarquía, tal vez más unificada que la de la plata, pero no cerrada, porosa, no rompió el estilo, fuertemente personalizado que fue corriente en la etapa de los conservadores y pasó a la Revolución Federal. Si bien ya no se cambiaba únicamente de caudillo, se cambiaba de partido, de gente beneficiada por las prebendas del poder, lo que implicaba, en opinión de E. Finot, introducir una alternabilidad en el gobierno, sobre todo cuando las elecciones se traficaban para guardar el poder (Finot, 1946: 358)

La alianza política que reemplazó a los liberalismo, coloreada de tintes socialistas, desplazó definitivamente a éstos a la derecha, iniciando un ciclo político distinto, inclinado hacia la izquierda. La Guerra del Chaco dio un empujón al proceso conformando agrupaciones de tono más radical que dominarían la escena de la posguerra. Por las nuevas tomas de posición, las distintas formaciones vinculadas al republicanismo acabaron igualmente a la derecha, al lado de sus antiguos compañeros de ruta: los liberales.

4. De las nuevas orientaciones ideológicas del Chaco a la Revolución Nacional

Los revolucionarios republicanos establecieron una junta de gobierno, compuesta por Bautista Saavedra, José María Escalier y José Manuel Ramírez, que convocó a una convención para la reforma de la Constitución. Saavedra, un político experimentado,

rápidamente mostró su carácter dominante y su habilidad de maniobra haciéndose elegir presidente de la República por la Convención, que no estaba facultada para ello. La oposición rechazó la movida y se retiró, formando el partido Republicano Genuino. Saavedra condujo el país con puño de hierro, exiló a sus adversarios, censuró a la prensa y volvió corriente el excepcional estado de sitio. Transmitió, concluidos cinco años de gobierno, el poder a H. Siles, después de haber hecho anular en el Congreso la elección del anterior candidato oficial a la presidencia, de cuya lealtad dudó. Siles se ligó a Saavedra por un acuerdo denominado "mandato imperativo", pero aquél, una vez asumida la presidencia, se deshizo del saavedrismo. Igualmente condujo el país con mano firme. Creó su propio partido político: el Nacionalista, compuesto sobre todo por jóvenes que luego tuvieron un desempeño importante en la posguerra del Chaco. El intento de prórroga de su gobierno desembocó en un golpe del Ejército, encabezado por el general Blanco Galindo y una junta militar, quienes llamaron al primer referéndum, en el que se aprobó el Habeas Corpus, la autonomía universitaria y organizaron las elecciones nacionales, ganadas por el binomio conformado por Daniel Salamanca, del Partido Republicano Genuino, como presidente, y José Luis Tejada Sorzano, del liberalismo, como vicepresidente.

En este periodo se produjo la Guerra del Chaco, en la cual Bolivia perdió una gran parte del territorio en disputa, pero salvó el área petrolífera. Durante el conflicto Salamanca fue forzado por el Alto Mando militar a renunciar. Ocupó la presidencia Tejada Sorzano, quien firmó el cese de fuego con el Paraguay. Tejada a su vez fue derrocado por un golpe militar dirigido por el coronel David Toro (1936), con el que se inauguró el socialismo de Estado, poco interesado en la normatividad democrática.

Al año, Toro fue reemplazado por el Coronel Busch, héroe del Chaco, quien llamó a una convención nacional que no concluyó y terminó declarándose dictador. El régimen fue de corta duración, pues el presidente Busch se suicidó. Luego de su muerte siguieron gobiernos militares designados por la fuerza de la acción del Ejército o por las elecciones: el general Quintanilla, sucesor de Busch fue impuesto por sus colegas de armas, el general Peñaranda resultó elegido en elecciones nacionales y cayó de la presidencia por un movimiento de jóvenes militares nacionalistas al que se sumó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido de reciente conformación. El coronel G. Villarroel tomó el mando de la nación.

Los resultados de la Guerra del Chaco frustraron a los combatientes, jóvenes de clase medias urbanas, obreros, campesinos. Estos últimos por primera vez, convivieron con sus compatriotas ciudadanos y sufrieron la misma dolorosa experiencia. Juntos encontraron en las ideologías nuevas una manera renovada de mirar a las sociedades, de donde surgieron partidos, movimientos, contra el pasado. Hubo un anhelo generalizado de crear un orden distinto, que supere los errores de antes. Todo ello se tradujo en un clima de efervescencia y agitación política y social que fragilizó la democracia en la posguerra del Chaco y alentó las experiencias nuevas.

Las dictaduras nazi-fascistas y socialistas de Europa se convirtieron en los modelos que mayor influencia alcanzaron en las acciones e ideas de aquella juventud revolucionaria. El gobierno de Villarroel se hizo culpable del fusilamiento de un grupo de importantes políticos de oposición, que la población consideró un asesinato porque no hubo ni sombra de juicios o procesos legales de respaldo. Se trató de crímenes parecidos a los que eran frecuentes en los regímenes totalitarios europeos de entonces. El hecho produjo temor y espanto en el país, originando la revolución de julio de 1946, en la que fueron victimados salvajemente el presidente y varios de sus colaboradores. Vino luego un gobierno de civiles elegido por voto directo: E. Hertzog y M. Urriolagoitia. Este último, que ocupó la presidencia por la renuncia de Hertzog, enfrentó conflictos sindicales, campesinos y una corta guerra civil, presidió asimismo las elecciones nacionales en las cuales, sobre varias candidaturas, se impuso el MNR. Pero el Gobierno se negó a entregar el poder y formó una junta militar que acabó derrotada por una insurrección popular, la Revolución Nacional (9 de abril de 1952), que abrió una etapa distinta de la política en Bolivia, basada en la legitimidad conferida por el acto revolucionario.

Ahi pareció cobrar realidad el mito de la revolución propugnado por los partidos radicales, por los intelectuales, gremios y sindicatos de orientaciones nacionalistas, marxistas, socialistas, anarquistas, que se desarrollaron después del Chaco y para quienes la democracia y el Estado de Derecho no constituía un fin en sí mismo, tolerados, en el mejor de los casos, como un momento transitorio de la historia que se encamina hacia metas determinadas por su propia evolución. Ciertamente, existían matices en las diferentes agrupaciones, así como en las actitudes respecto al personalismo político, que variaban de una a otra formación. Estas en su acción ya habían relegado hacia los confines de la derecha al antiguo liberalismo y a los otros partidos de la preguerra con el Paraguay, inclusive a los que invocaron el socialismo en sus siglas.

Con la Revolución de 1952 el mito de la legitimidad revolucionaria se enraizó en la sociedad. Aunque no faltaron quienes juzgaron la Revolución traicionada, su prestigio permanece hasta hoy. Sin duda para muchos tampoco fue una verdadera revolución, cuya llegada aún esperan.

Conviene retomar el hilo que quedó a principios de la década del 20, momento en que el marxismo, el socialismo y el anarquismo, en sus distintas vertientes, superaron el estado embrionario que tuvieron a finales del siglo XIX y comenzaron a tomar cuerpo en organizaciones obreras, gremiales y movimientos sociales. Su aparición resultó algo tardía con relación a otros países del área, pero atraparon el tiempo perdido.

El comunismo y, en menor grado, el socialismo compartieron la visión de la revolución como un parteaguas de la historia y la sociedad. Estuvo claro desde los inicios del marxismo que para ellos el nuevo mundo de justicia e igualdad humana sólo podría convertirse en realidad tras la destrucción del viejo y de los grupos sociales que lo respaldaban. No cupo duda que el terror, como sucedió en La Revolución Francesa con la sangrienta dictadura de los jacobinos, constituiría un componente indispensable de la revolución. Tendría que ejercerse implacablemente, sin contemplaciones legalistas ni falsos humanismos contra sus adversarios, sus instituciones y aparatos ideológicos.

El mito de la revolución, cuyo origen remonta a las tradiciones judeocristianas⁷, partía a la sociedad, al igual que la historia, en mitades antagónicas, una que encarnaba el ideal por llegar, la otra las resistencias del pasado. Las concepciones de Marx, Engels, Lenin y Trotsky aspiraron a crear por medio de las revoluciones, además de un orden político y social distinto al heredado, un nuevo tipo de hombre, de humanidad. La violencia y su sentido exclusivamente terrenal distanciaron esta visión de la revolución de sus lejanos orígenes cristianos (Trotsky, 1974).

¿Qué contribuyó al surgimiento de tales orientaciones en la sociedad boliviana? Dos acontecimientos que acapararon la imaginación de las incipientes agrupaciones laborales y de los intelectuales fue, en el ámbito internacional, el triunfo de la Revolución Rusa y, en el local, las primeras huelgas de mineros, probablemente iniciadas en Huanuni, por la reducción de la jornada de trabajo, y la represión que siguió. El desarrollo de la minería del estaño, con sus importantes concentraciones de trabajadores en campamentos

7 Sobre el tema y sus repercusiones en el mundo actual ver Gray (2008, Cap. II y ss)

relativamente aislados de los centros urbanos, resultó un caldo de cultivo propicio para la organización de actividades reivindicativas.

Por aquellos años se fundaron también las universidades populares que difundieron las ideas socialistas. Pero además y no de poco interés para la implantación de esa corrientes en la política nacional fue la publicación de obras de marxistas, socialistas y anarquistas a través de editoriales argentinas y españolas, como Claridad, Aguilar, que pusieron al alcance del público los principales textos de autores de esas corrientes. No que antes no existiesen traducciones, por ejemplo de Proudhon, Bakunin, Marx, Engels u otros, sino que la calidad dejaba mucho que desear, de manera que algunos importantes socialistas o anarquistas de antes apenas tuvieron un conocimiento muy aproximativo de las fuentes. La primera versión completa y cuidada de *El Capital* en castellano apareció en España, debida al profesor M. Pedrosa, 1933⁸

En 1914 se funda el primer partido socialista en Bolivia. En su programa de acción, firmado por intelectuales como Jaime Mendoza, Alberto Mendoza López, Ezequiel Salvatierra, llama la atención la radicalidad de las propuestas, entre las cuales se destacan la idea de revolución así como la de integración continental (Lora, 1970: 132)⁹. Luego hubo muchas otras tentativas de establecer partidos, asociaciones socialistas o comunistas hasta la Guerra con el Paraguay, a partir de la cual las agrupaciones partidarias van a establecerse y consolidarse, dando un giro diferente a la política nacional.

Las corrientes anarquistas se introducen sobre todo en las asociaciones obreras y artesanales, en las cuales se producen choques fuertes entre militantes anarquistas y socialistas. Lo mismo sucede en los primeros congresos obreros, a principios de los años 20, en Oruro, La Paz, Potosí, donde se hacen planteamientos tan radicales como los que más tarde cristalizaron en la Tesis de Pulacayo (1946) y en la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), de 1953.

En las conclusiones de los congresos ya se entrega el papel de actor privilegiado de las transformaciones y de la Revolución por venir al proletariado, particularmente a su

8 Antes, en 1918, apareció la primera versión castellana de *El Capital*, de K. Marx, a cargo de Juan Justo, en Buenos Aires, pero estaba incompleta, faltaban los últimos libros.

9 Esta obra, especialmente el volumen IV, resulta muy importante para examinar el desarrollo de las ideas y organizaciones socialistas en el país.

vanguardia minera (Lora, 1970: 11-56). La sociedad reconoció de inmediato que en la escena había surgido un actor protagónico. Con el tiempo el mito ha persistido, pero los llamados a ejecutarla y sufrirla han cambiado de clase o de origen social.

Data de ese tiempo el mito de la revolución contrapuesto al ideal de la democracia y del Estado de Derecho, vistos como una farsa burguesa o, con cierto pragmatismo, como una etapa histórica destinada a ser superada. El mito ganó terreno con la Revolución Rusa conquistando a intelectuales, sindicalistas y políticos. La Revolución Francesa fue menos invocada, porque se consideró que la independencia nacional había sido uno de sus frutos que no consiguió vencer el predominio del criollismo local ni liberar al indio y a los proletarios de sus sujeciones, ni al país de su dependencia, lacras que la revolución socialista prometía acabar. La promesa, que se tomó como moneda constante y sonante, de cumplimiento inexorable, fundada en las leyes científicas de la historia, según sus seguidores, iba en los años del Chaco a difundirse en la gran masa de combatientes. Pero también sufrió el enfrentamiento y la contaminación de otras ideas tan prometedoras y autoritarias como ella: los nacionalismos despóticos que ya se habían instalado en Alemania e Italia.

En el país, el periodo bélico y su fatal desenlace hicieron estallar toda la tradición acumulada por los conservadores y liberales, incluida la de los regimenes de cariz inicial socialista o nacionalista, como los de Saavedra o Siles relegándolos hacia una derecha estigmatizada de obsoleta. El descalabro militar erosionó la moral cívica democrática y republicana impulsando la aclimatación de vanguardias políticas e intelectuales socialistas, comunistas. Pero en el mismo periodo se manifestaron igualmente las corrientes rivales que ensalzaron el nacionalismo, los mitos originarios y la necesidad de un conductor enérgico del pueblo, ingredientes de una ideología autoritaria, antidemocrática, visible en las experiencias del nazismo y del fascismo. Ni éstos ni los socialismos se interesaban por la suerte de las instituciones libres y legales.

El fin de la década de los treinta e inicios de los 40 constituyó un hervidero de partidos políticos inspirados en ideologías extremas y adaptadas a las realidades locales. Se formaron el Partido Revolucionario Obrero (1935), la Falange Socialista Boliviana (1937), el Partido de Izquierda Revolucionario (1940), el Partido Comunista, desprendido del PIR (1950), el Partido Socialista Obrero (1940), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (1941) y otras agrupaciones menores. Viejos temas y

enfoques nuevos sobre el indio, las tierras, la propiedad de las grandes empresas mineras, el sindicalismo, ocuparon el debate político, que culminó con la Revolución Nacional de 1952 del MNR.

Ese hecho escindió la historia nacional en un antes y un después, a despecho de que los líderes del movimiento arrancaron su legitimidad en las elecciones de 1950, que ganaron y les fueron escamoteadas. Sin embargo, las medidas revolucionarias que ejecutaron se basaron en el mandato del pueblo, que tomó el poder derrocando al Ejército en las calles de La Paz y Oruro y en las minas. Así se dictaron los decretos de nacionalización de las grandes compañías mineras, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa.

El MNR opuso el nacionalismo revolucionario a la anti-nación, a la Rosca, vale decir a la burguesía minera, a los grandes propietarios de tierras y sus beneficiados, intentando forjar una nación unitaria proyectada al futuro, en el sentido francés del término. Mientras los partidos socialistas idealizaban la lucha de clases, el MNR se formó en una alianza de clases medias, obreras y campesinos para alcanzar sus propósitos. El impulso de la revolución sobre todo en los primeros años arrolló a todos los partidos opositores, relegándolos a los márgenes extremos de la derecha y la izquierda. Muchas personas salidas de las agrupaciones socialistas desarrollaron la tesis del "entrismo", ingresando al partido gobernante, con la idea de que, una vez cumplidos dentro del régimen "movimientista" los objetivos de la Revolución Nacional, más de carácter pragmático-burgués que socialista, se darían las condiciones para efectuar una auténtica revolución proletaria.

El primer gobierno revolucionario de V. Paz Estensoro fue un régimen *de facto* que, al margen de la legalidad y sin respetar los derechos y garantías constitucionales, ejecutó amplias transformaciones sociales. H. Siles Zuazo, elegido en la primera elección con sufragio universal (1956), apabulló a sus contendientes, si bien la elección pecó de manipulación, quizá innecesaria. Buscó consolidar las conquistas populares de la primera fase, en medio de una inflación galopante que forzó la toma de medidas resistidas por una parte del MNR y los sindicatos que hacían parte del Gobierno. Paz Estensoro ocupó por segunda vez la presidencia (1960), y al fin de su mandato intentó prorrogarse. Líder indiscutido del partido, monopolizó el poder en el Gobierno, en el partido y en las asociaciones sindicales afines, lo que produjo oposiciones dentro del MNR que se fraccionó en facciones desprendidas que iban de la derecha a la izquierda.

Su vicepresidente, el general R. Barrientos, lo derrocó al poco tiempo de iniciado el tercer periodo. Se formó un cogobierno con el general Ovando y se decidió retomar la vía democrática. Barrientos se presentó a elecciones generales con parte del MNR, grupos de su propia creación y aliado con los restos de los partidos tradicionales que lo llevaron a la presidencia. Tuvo la pretensión de reencaminar la Revolución del 52 que, sostenía, había perdido sus metas originales, creando la II República. El Congreso nacional que lo acompañó votó la Constitución actualmente vigente, con algunas modificaciones introducidas en 1994 y 2004.

Durante su gestión se firmó el Pacto Militar-Campesino, que sustentó su gobierno y los demás regímenes militares que le siguieron hasta 1982. En 1967 estalló la guerrilla de E. Che Guevara, que costó la vida a su comandante y a otros integrantes del grupo. Se trató de un primer intento de ganar por las armas el poder para establecer un régimen socialista.

Barrientos murió en un accidente de helicóptero y le sucedió su vicepresidente, L. A. Siles, que fue víctima de un golpe de Estado dirigido por el general Ovando (1969), inicio de varias dictaduras militares de derecha e izquierda, con un fuerte sello estatista, lo que no impidió la aparición de un segundo brote guerrillero que fue reducido pronto.

El Coronel Bánzer, ante el caos generado en la breve presidencia del general Torres por las fuerzas izquierdistas que condujeron a un casi gobierno dual con la Central Obrera Boliviana, convencidas que la revolución socialista estaba a la vuelta de la esquina, se hizo del poder apoyado por el grueso del ejército, además de partidos civiles. Durante su largo régimen racionalizó y modernizó el Estado boliviano, con un cariz centralista y planificador. Se proclamó dictador y prohibió los partidos políticos y sindicatos. Sin embargo, las presiones sociales y obreras obligaron a convocar a elecciones (1977), que fueron ganadas por el candidato oficial, General Pereda Asbún, acompañado por la Acción Democrática Nacionalista (ADN), organización partidaria en la que se agruparon los simpatizantes y partidarios de Bánzer, que representó la derecha, frente a varias otras formaciones que se proclamaban de centro o de izquierda. La ADN estuvo más tarde entre las formaciones partidarias que buscaron el establecimiento del Estado de Derecho en el período de la vuelta de la democracia.

Pereda tomó el poder por la fuerza, pues su elección fue anulada por fraude. Otro golpe militar cortó su gobierno, en sus comienzos. El fin de esta acción del ejército fue

llamar a elecciones, que no dieron un resultado definitivo. Las agrupaciones con mayor votación fueron ambas facciones del MNR, encabezadas por sus dirigentes históricos V Paz y H Siles, que se empantanaron en el Congreso, de donde salió designado presidente, para salvar el impasse, W Guevara, otro de los fundadores del MNR, que formó su propia tienda: el Partido Revolucionario Auténtico (PRA), en esa oportunidad aliado del MNR pazestensorista.

Guevara ocupaba el cargo de presidente del Senado, razón por la que se le designó para desempeñar interinamente la presidencia. Una intervención militar dirigida por el general Natusch Busch interrumpió su gestión, sospechosa para el Ejército de prorroguismo. Sin embargo, los militares, debido a la oposición vigorosa de la sociedad, no lograron quedarse en el poder, se volvió al régimen constitucional eligiendo en el Congreso a la primera mujer presidente de la República, Lydia Gueiler, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, que también fue víctima de otro brutal y crapuloso golpe militar, dirigido por el general García Mesa, no sin antes haber efectuado elecciones nacionales que dieron el triunfo al MNR de Izquierda conducido por H Siles.

Se sucedieron tres cortos gobiernos militares *de facto* de los generales García Mesa, Torrelio y Vildoso. Este último comprendió la inutilidad y el alto costo para el país y las Fuerzas Armadas de los gobiernos de fuerza y devolvió la presidencia al ganador de las elecciones de 1980 así como al congreso electo. De esta manera retornó la democracia hasta hoy.

5. La vuelta de la democracia

H Siles sufrió la arremetida de organizaciones sociales y sindicales que reivindicaban derechos conculcados por los autoritarismos militares, en una situación de caos económico y nuevamente con una inflación desbocada. Se vio obligado a acortar un año de su mandato y llamar a elecciones que dieron la presidencia de la República a V Paz Estensoro.

La administración de Paz E tomó con éxito drásticas medidas que cortaron la inflación y estabilizaron la economía. La legislación laboral sufrió una modificación significativa a fin de facilitar la libre contratación laboral, que causó el decidido rechazo

en las organizaciones sindicales. Cerca de 25.000 trabajadores fueron despedidos de la empresa minera estatal. Ante las huelgas laborales, el gobierno recurrió al Estado de sitio para recuperar el orden.

Por primera vez un juicio contra un ex presidente, García Mesa, concluyó, condenándolo junto a algunos de sus colaboradores, entre ellos al coronel Arce Gómez, ya preso por delito de narcotráfico en EEUU a 30 años de prisión, que cumple hasta hoy

En las elecciones siguientes (1989) ganó el general Bánzer con ADN y sus aliados, Sin embargo, en aras de la paz social, tuvo que ceder la presidencia a la tercera fuerza electoral, el MIR. Así llegó al gobierno J. Paz Zamora, que hizo una alianza con su antiguo adversario, Bánzer. El gobierno de Paz Zamora y ADN logró implantar instituciones, mediante acuerdos políticos con los partidos que tenían representación congresal, que al tiempo que modernizaron el Estado y la democracia, ampliaron la vigencia de legalidad

De esta suerte se estableció la Corte Nacional Electoral, independiente, cuyos miembros se eligen por 2/3 de votos del Congreso, igual que los vocales de la Corte Suprema de Justicia, acuerdos inéditos en Bolivia y el continente. Se separó el Ministerio Público del gobierno, se promulgó la ley SAFCO de la Contraloría General de la República, la ley INRA para el saneamiento y titulación de tierras. Pero la política de alianzas políticas fue mal vista por la sociedad, que la consideró inmoral, fuente de corrupción y nepotismo. Durante el régimen de Paz Zamora se inició una marcha indígena por la tierra y el territorio que trajo el reconocimiento de las naciones originarias, mostrando las nuevas sensibilidades que marcarían los cortes futuros de la sociedad boliviana.

En junio de 1993 se realizaron las elecciones presidenciales que otorgaron un cómodo triunfo a G. Sánchez de Lozada y V. H. Cárdenas (36%), seguidos por la Alianza Patriótica, liderada por H. Bánzer y O. Zamora, de ADN y el MIR, CONDEPA, con C. Palenque, e I. Kuljis ocupó el tercer lugar (14%), delante de otro frente populista de M. Fernández y E. Talavera que obtuvo algo menos del 14%, revelando ya la aceptación de las agrupaciones neo-populistas en la sociedad.

El régimen de Sánchez de Lozada tomó un giro abierto hacia el mercado y la capitalización de las empresas estatales con recursos extranjeros, que las controlaron. La

inclinación liberal de tales disposiciones fue motivo de conflicto con las organizaciones populares. lo que forzó un nuevo Estado sitio Algunos contratos negociados con compañías extranjeras fueron observados en su legalidad, a despecho de la atención que el Gobierno intentaba conceder a los aspectos jurídicos de sus acciones internacionales.

Se votó la ley de Participación Popular, que municipalizó y descentralizó el poder en el territorio nacional, dando recursos a las alcaldías, intentando cerrar la brecha campo-ciudad e impulsado el desarrollo rural, con evidentes diferencias entre municipios en el manejo de fondos Se trató de una medida de enorme alcance que tuvo efectos positivos en los bajos indicadores sociales que afligen al país, además de provocar el retorno a sus lugares de origen de algunos emigrados rurales que obtuvieron ya una educación superior Muchos de ellos, conocedores de los planteamientos modernos acerca de los derechos de los pueblos indígenas trabajaron, entre sus coterráneos, para afincarlos con éxito. De ahí proviene en parte la actual participación en la política de los sectores llamados indígenas, que decidieron actuar con colores propios, descartando la mediación de los partidos políticos

Al término del periodo ocurrió la toma de las minas de Capacirca y Amayapampa por los trabajadores, propiedad de una empresa extranjera. La recuperación ordenada por las autoridades gubernamentales ocasionó un número importante de muertos, que la oposición cargó al Gobierno. Mas fue el sistema democrático que sufrió con los hechos un enorme desgaste.

En esas condiciones se efectuaron las elecciones generales de 1997, que permitieron el retorno democrático al poder del general Bánzer secundado por el vicepresidente, J Quiroga, con 22 % del voto El MNR llegó en un segundo lugar, con un 18 %, el tercero le correspondió a CONDEPA, con 17 %, cuyo líder, C Palenque, ya había muerto El MIR obtuvo un cuarto sitio, con 16.7 %, y UCS ocupó el quinto puesto Las bajas proporciones de sufragios de las agrupaciones políticas y su corta diferencia descubrieron ya las fragilidades del sistema de partidos

Bánzer, para poder gobernar, formó una gran coalición política "El Compromiso por Bolivia", con el MIR y seis otras formaciones partidarias Inició un amplio diálogo nacional a fin recoger sugerencias para la reforma de la Constitución.

En Cochabamba sindicatos, asociaciones de vecinos iniciaron la denominada "Guerra del Agua", con objeto de impedir el cumplimiento del contrato firmado con una compañía extranjera de concesión de aguas. Un clima de agitación social se apoderaba de las principales ciudades y del área rural, que dificultaba la toma de decisiones políticas significativas. Las líneas de ruptura social del nuevo milenio, construidas alrededor de las etnias y las identidades locales, se tornaron críticas en ese momento.

Bánzer, gravemente enfermó, entregó el poder a su vicepresidente Quiroga faltando un año para terminar su periodo. Falleció poco después. Bánzer condujo el país en momentos de graves crisis. Su paso de la dictadura a la democracia fue sincero. Sin su intervención resulta difícil pensar que la democracia hubiese subsistido. Su partido formó una derecha modernizadora y plural que combatió por consolidar el Estado de Derecho, al cual las fuerzas de izquierda radical, ganadas al mito de la revolución, conceden un interés secundario o tal vez ninguno.

Quiroga asumió el mando en agosto de 2000, tratando de establecer una modalidad de conducción política diferente de la de los liderazgos fuertes, personalizados, del estilo de H. Siles, V. Paz E., H. Bánzer. Buscó fijar políticas económicas y sociales en consulta con organizaciones de la sociedad civil. Su corto paso por la presidencia trabó la posibilidad de iniciar acciones de largo plazo, lidiando, además, con una persistente agitación social heredada de los anteriores regímenes. Efectuó el censo de población en 2002, una de cuyas preguntas, planteada por los técnicos sobre identidades de los bolivianos en términos equívocos, deslegitimó a los gobiernos y la política desde el nacimiento de la República, vistos, sobre todo desde afuera, como secularmente interesados en preservar tan sólo el privilegio de las minorías en perjuicio de las grandes masas indígenas originarias. Una lectura sin duda deformante de la sociedad boliviana y su gente, de sus cruces y vínculos, de sus encuentros y desencuentros forjados desde hace más de 500 años de relaciones de diversa naturaleza entre los hombres y los pueblos del país. Las miradas desenfocadas de muchas asociaciones civiles y partidarias pretenden ignorar los reales esfuerzos de distintas políticas por incorporar los grupos desfavorecidos a la educación, la salud, la tierra, el trabajo, por superar las diversas formas de exclusión basadas en el sexo, la etnia, quizá lentos, no inexistentes.

En 2002, una nueva elección devolvió el poder a Sánchez de Lozada, acompañado por el periodista C. Mesa Gisbert, por el MNR. En esta oportunidad el segundo grupo

electoral fue el Movimiento hacia el Socialismo (MAS), de Evo Morales. Entre el primero y el segundo la diferencia apenas fue de un 1 % Siguió la Nueva Fuerza Revolucionaria de M Reyes Villa y luego el resto de formaciones con porcentajes más reducidos

Sánchez de Lozada formó otro amplio acuerdo de partidos, pero enfrentó desde el inicio de su administración una conflictividad social que creció La bandera de los movimientos contra el régimen fue la salida del gas por Chile, tema que oficialmente no fue tratado por el Gobierno. La agitación popular cobraba las facturas de las políticas neoliberales del pasado Sánchez de Lozada tuvo que resignar su mandato en el vicepresidente C Mesa Gisbert

El nuevo mandatario juró ante el Congreso comprometiéndose a cumplir una agenda política denominada de Octubre, por la fecha de su posesión. Allí figuró un referéndum para zanjar el problema del gas que se realizó El referéndum también sirvió para legitimar al Gobierno Sin embargo, falto de apoyo político real, no pudo conseguir la aprobación de la ley de hidrocarburos

Un ambiente de intranquilidad, de rumores, de conspiraciones, se apoderó de la sociedad que finalmente llevaron a su renuncia definitiva en junio de 2005, entregando el mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, J Rodríguez Veltze, cuya misión fue la de llamar a elecciones, de donde salió como claro vencedor el MAS y sus candidatos E Morales y A García Linera, con un programa de transformaciones revolucionarias de marcada inclinación indigenista y popular

Los principales partidos contendores aparecieron como de viejo cuño, acusados de corrupción, nepotismo, incompetencia, y fueron colocados en los confines de la derecha. Sin duda, ellos hicieron mucho por merecer las críticas, pero su actuación también tuvo mucho de positivo para enmarcar el país en instituciones modernas, plurales La incorporación de la idea de la multiculturalidad en el texto constitucional reformado fue resultado de sus acuerdos, idea que reemplazó la concepción del MNR de la nación unitaria abierta a un futuro compartido.

Tres generaciones de partidos actuaron en el periodo democrático, como recuerda Romero Ballivián (1999: 101 y ss), democracia que hace poco festejó 25 años de sucesiones presidenciales según las reglas legales La primera generación vio la sociedad

y sus problemas desde los ángulos del nacionalismo y el socialismo. A ella pertenecen el POR, el PIR, el MNR y la FSB. La segunda apareció en los 70, comprometida con una perspectiva revolucionaria que no desdeñó la guerrilla o el foco como vías para tomar el poder. Ahí estuvo el MIR y el Partido Socialista 1, de M. Quiroga Santa Cruz, aunque poco a poco entraron en el juego democrático, por cuya consolidación lucharon ADN también surgió en ese entonces, pero su posición fue de derecha; igualmente adoptó la democracia a la que contribuyó a estabilizar en ese largo periodo.

La tercera generación, conformada por CONDEPA y la Unión Cívica Solidaridad (U.C.S), tuvo una ideología y organización de corte populista, el primero más inclinado a la izquierda con ribetes nacionalistas, el segundo de corte más moderado, aunque igualmente inclinado al populismo. Una novel formación apareció con el nuevo milenio, el MAS, aunque sus raíces son viejas y tuvo predecesores en el campo de la etnicidad. La conforman agrupaciones con un fuerte contenido étnico popular, desconfiadas y opuestas a los mecanismos de mercado, a la globalización y hasta a la legalidad constitucional, lo que no impidió su participación en los actos electorales, y sus repetidas victorias en las urnas.

Los 25 años de democracia no han pasado en vano. Las instituciones legales se han arraigado en una gran parte de la población, pero nuevos peligros las amenazan, surgidos de las sensibilidades posmodernas, favorables a la pluralidad valorativa del multiculturalismo. Si bien el riesgo no está allí sino en el relativismo que lo acompaña que, en situaciones en que la sociedad se divide alrededor de debates cruciales, puede empujar hacia el "decisionismo arbitrario y extremo" del líder en ejercicio del poder, aun constitucional.

El fenómeno halla el terreno preparado, por una parte por el mantenimiento de prácticas acarreadas del viejo caudillismo que la democracia no consiguió desterrar, ahora plebiscitado y respaldado en el voto, y por otra por las particiones de la sociedad, antes más de contenido político e ideológico, hoy con un mayor ingrediente étnico, regional. Finalmente, la oposición democrática es minoritaria en el Congreso pero con capacidad de bloquear iniciativas de la mayoría, tentada de superar las dificultades refiriéndose a la fuerza del liderazgo. Así se une a las seculares tendencias, que obstaculizaron en el pasado el asentamiento vigoroso de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, la atracción del decisionismo del jefe.

La idea de revolución que ha retornado y cobrado vigor, renovada con objetivos étnicos antes que proletarios, da otra vez pie para realizar actos contrarios al régimen constitucional, justificados en la necesidad de materializar las propuestas electorales de gobernar con los movimientos sociales y étnicos, de acuerdo con sus deseos de cambio revolucionarios, promesa del nuevo régimen en el poder, excusa para quebrar la ley. A ello se suma, acentuando la tendencia, otro componente de la cultura política del país, ya conocido: el culto al liderazgo mesiánico, que en la democracia puede darse al ganador indiscutido en las urnas, admitiendo la posibilidad de definir por decisión propia la irresolución social y política del momento.

C. Schmitt, jurista alemán que se comprometió con el nacionalsocialismo, reflexionó sobre este "decisionismo puro" en la década del 20, retomando la fórmula de T. Hobbes de que "es la autoridad, no la verdad, la que hace la ley". Y fue por referencia a ella que llegó a su concepción de la decisión última del conductor, que caracterizaría la auténtica soberanía que se ejerce, a despecho de la legalidad jurídica, potestad proclive a manifestarse, como entrevio M. Weber, en un mundo de las múltiples culturas admitidas como iguales (Mesure, 1999: 149 y ss)¹⁰. Se trata de un valor legítimo, pero que en casos de conflicto social dificulta encontrar soluciones racionales, democráticas, pues cada actor se encapsula en su reino valorativo, inconmensurable con el del otro, dejando el camino abierto para que el líder, plebiscitado en una elección, tome las medidas finales de acuerdo con su juicio y arbitrio, por encima de las oposiciones y hasta de la norma.

El sistema jurídico y el caudillismo autoritario en Bolivia han guardado y guardan entre ellos relaciones forjadas en la historia larga, sin duda con cambios en uno y otro. Los caudillos salidos de los partidos políticos no eran los mismos del militarismo del siglo anterior, aunque la esencia del vínculo se preservó. El caudillismo, un estilo de gobernar presente en distintos momentos de la vida nacional tuvo sus especificidades en cada época, que no rompían la nota dominante de pretender concentrar el poder en una persona y que en lo tocante a las leyes buscaba supeditarlas, apoyarse en ellas para sus fines.

10 El artículo ofrece una valiosa consideración sobre la radicalización de algunos planteamientos weberianos en Schmitt.

Al mismo tiempo, en el sistema legal, fuera de las personalidades que ejercían el poder discrecional y ponían todo de su parte por cuidarlo, la propia constitucionalidad, como se señaló, establecía mecanismos que fortalecían los estilos de manejo gubernamental de los políticos, creando complicidades entre éstos y aquel sistema, con distintos grados de autonomía y de sumisión. Hasta cierto punto han sido las prácticas, más estables que la opinión, que han amparado el complejo de vínculos perjudiciales para la democracia, lo que pide una revisión de las prácticas, que cada cierto tiempo parecen hallarse en retroceso, pero que, para sorpresa de la opinión democrática, vuelven a levantar cabeza y se refuerzan con nuevos aliados e ideologías.

Bolivia ha aceptado su carácter multicultural y multiétnico, mas la definición no está reñida con la democracia y la normatividad. Al contrario, obliga al Estado, a la sociedad y a las personas a buscar instituciones adecuadas para la convivencia de todos, para construir una comunidad de ciudadanos, todos iguales ante la ley e integrados al quehacer político común a través de la democracia.

Los debates actuales sobre el reconocimiento de derechos culturales sirven para recordar que la ciudadanía legal se desenvuelve en un espacio público, que no podría existir si no es capaz de trascender las divisiones y desigualdades de la sociedad civil (Schnapper, 2000 y 2003). La utopía revolucionaria creyó en el derrocamiento de una minoría por una mayoría para conseguir la justicia y la libertad, pero el reino que creó fue el del un totalitarismo cruel. Las víctimas de las revoluciones históricas contemporáneas suman varios millones y los frutos esperados del cambio jamás los justificaron

Invocar nuevamente la revolución para cortar la legalidad, para no pagar el costo de las transformaciones, para castigar a segmentos sociales a los cuales se carga con el sambenito de ser conservadores, negándoles el derecho a participar con sus valores en la nueva construcción, fuera de carecer de valor argumental empírico atenta contra las concepciones de un orden plural, contra los derechos humanos proclamados y sostenidos por los mismos revolucionarios y aceptados mayoritariamente por la sociedad.

En el momento actual, los bolivianos están en procura de edificar una sociedad abierta al Otro, al diferente, a las minorías, pero éstas y las mayorías solo pueden encontrarse en el respeto recíproco, en el derecho y la democracia, que son la garantía

de una vida pacífica y prometedora. Los ciudadanos de todas las regiones y culturas aspiran a participar en la vida política nacional, a solucionar en la legalidad los conflictos nacidos de intereses diferentes, y no parecen dispuestos a ceder ante la violencia del poder de uno o de un segmento de la sociedad sus prerrogativas.

¿Cómo marchar juntos, evitando estos escollos? Los modelos autoritarios del pasado, sin duda no desaparecidos, no son la respuesta apropiada para los tiempos que corren. Igualmente resulta inapropiado el intento de entregar la conducción de las transformaciones, que el país demanda, a un movimiento o a un actor social privilegiado. Pocos creen sinceramente en la vocación histórica de una clase o de un grupo étnico o regional, menos de una persona. La historia ha desmentido esa pretensión. Para seguir conviviendo juntos, con nuestras diferencias, anhelo compartido por una inmensa masa de bolivianos, respetar las garantías legales, las reglas del juego democrático, reforzar la ciudadanía legal, común, parece fundamental. Pero no basta, los desafíos de la modernidad no se pueden ignorar. Comprender su naturaleza, sus posibilidades y sus límites, a fin de definir nuestras opciones políticas con ellos, resulta otra exigencia insoslayable. Vivir la época sin dejar bailar nuestro folklore no parecen ser propósitos incompatibles.

REFERENCIAS

- Arguedas, A. 1923. *Los caudillos letrados*. Barcelona: López Roberts y Cía, p. 114 y ss.
- Boelli, E. 1976. "Contitucionalismo". En: N. Bobbio y N. Matteucci, *Diccionario de política*. México: Siglo XXI, Ed. Tomo I, p. 388 y ss.
- Crespo, A. 1944. *Santa Cruz, el cóndor indio*. México: F.C.E.
- Finot, E. 1946. *Nueva historia de Bolivia*. Buenos Aires: Fundación Universitaria Patiño López, p. 358.
- Gray, J. 2008. *Misa negra*. Barcelona: Piados. Cap., II y ss.
- Gutiérrez, A. 1975. *El melgarejismo antes y después de Melgarejo*. La Paz: Ed. Populares Camarlinghi., p.274.
- Habermas, J. 1997. *Droit et démocratie*. Paris: Gallimard
1991. *De l'éthique de la discusión*. Paris: Ed du Cerf.
- Kelsen, H. 1941. *La teoría pura del derecho*. Buenos Aires: Losada
1948. *Teoría general del Estado*. México: Ed. Nacional.
- Laski, H. J. 1936. *El Estado en la teoría y en la práctica*. Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado. p.102.
- Lavaud, J. P. 1988. "Le comperage a La Paz". En: Cahiers des Amériques Latines, Paris, N° 13-14, p. 89-113.
- Lora, G. 1970. *Historia del movimiento obrero boliviano, 1923-1933*. La Paz- Cochabamba Ed. Amigos del Libro, vol. III, p. 132.
- Malloy, J. 1989. *Bolivia: la revolución inconclusa*. La Paz, Cochabamba: CERES.
- Mesure, S. 1999. "Nationalisme et faillibilisme". En: A. Renaut (Dir.), *Les Philosophies politiques contemporaines*. Paris: Calman-Levy. Vol. V, p. 149 y ss.

- Moreno, G R 1940. *Últimos días coloniales en Alto Perú*. La Paz Renacimiento Tomo II, p 10
- Román Armendáriz, A: 1993 *Política. 650 conceptos al alcance de todos* Guayaquil Instituto Ecuatoriano de Estudios Políticos Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. p 82
- Romero Ballivián, S 1999 *Reformas, conflictos y consensos*. La Paz Fundación H Seidel, Fundemos. p. 101 y ss
- Saavedra, B 1921 *La democracia en nuestra historia*. La Paz. Gonzáles y Medina p 75
- Schanapper, D. 2000. *Qu est-ce que la citoyenneté*. Folio Actuel Paris Paris Gallimard 2003 *La communauté des citoyens*. Folio Essais. Paris : Gallimard.
- Schmitt, C 1968 *La dictadura*. Madrid Rev de Occidente.
- Sirenelli, J F *et al.* 2006 *La droite en France*. Paris Gallimard
- Soriano de Garcia Pelayo, G 1996 *El personalismo político hispanoamericano del siglo XX. Criterios y proposiciones metodológicas para su estudio* Caracas: Monte Ávila Ed
- Trigo, C. F *Derecho constitucional boliviano*. La Paz Ed., Cruz del Sur
- Trotsky, L. 1974 *Literatura y revolución* Buenos Aires El Yunque.
- Weber, M 1964. *Economía y sociedad*. México: FCE. 2 Ed., p 197 y ss.
- Winock, M. «Mécanique du glissement a la droite» In *Les droites en France 1789-2007* Nouvel Observateur, Hors Serie N° 87

The Dynamics of Poverty in Bolivia

*Alejandro F. Mercado**
*Jorge G.M. Leitón-Quiroga***

Abstract

The research aims to the understanding of the main factors that explain the dynamics of poverty in Bolivia. A main working hypothesis is that poverty is strongly linked to low social mobility levels. Social mobility can be defined as the equality of opportunities, or in other words, the probability that somebody can reach a better social position independently of his position of origin.

We rely in the concept that low social mobility generates a vicious poverty circle in which households that were poor yesterday, will see that their children are poor today, and with high probability, their children's children will be poor tomorrow. Indeed, our research hypothesis is that the dynamics of the phenomenon (the vicious circle) is explained fundamentally by two self reinforcing factors – ethnic and gender discrimination; which in turn lower the social mobility levels in a dynamic framework. This is proved partially along this research, especially for the subsets of indigenous women.

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo identificar los principales factores que explican la dinámica de la pobreza en Bolivia. La hipótesis de partida es que la pobreza está ligada a una baja movilidad social. La movilidad social puede ser definida como la igualdad de oportunidades, es decir, la probabilidad de que los individuos puedan mejorar su posición social independientemente de su posición de origen.

* Alejandro F. Mercado is Director of the Institute for Socio-Economic Research (IISEC - UCB)

** Jorge G.M. Leitón-Quiroga is Associate Researcher of the IISEC.

Consideramos que la baja movilidad social genera un círculo vicioso de pobreza en el cual los hogares que fueron pobres ayer son pobres hoy, y, con alta probabilidad, los hogares de sus hijos también serán pobres. Nuestra hipótesis es que la reproducción de la pobreza se explica, en gran medida, por dos factores: la discriminación étnica y la discriminación por género, elementos que actúan profundizando la baja movilidad social

Introduction

Poverty in Bolivia has become an endemic phenomenon, and the country has achieved strong support from international donors in order to fight poverty. More than 60 per cent of the total population is poor in Bolivia, and more than 80 per cent of total rural population is poor. In this regard, our research tries to understand the dynamics of poverty throughout the analysis of the Social Mobility Index by population subsets. One of the leading approaches in the study of the dynamics of poverty in Bolivia was proposed by Mercado (1992). In this study the author argues that the high rate of global participation of members of a household in the labor market penalizes the children's educational attainment. The low earnings of the parents pressure children to exchange school hours for working hours in order to meet the minimum income requirements of the household. Later on, this translates into a worsened laborer's conditions (in terms of skills), and lower income levels, which reinforces child labor in the future. This generates a vicious circle where children leave school today, worsening their working opportunities for the future and worsening their ability to keep their children in school in the future.

In the late 1990s the interest to study the causes and the dynamics of poverty focused on the problems of the education system. The methodology proposed by Altonji and Blank (1999) was used to study the phenomenon in Bolivia. The central elements of these investigations referred to the quality of education and the ethnic and gender discrimination.

The work of Dahan and Gaviria (2000) and Andersen (2001) constituted the background to study poverty in Bolivia from the viewpoint of social mobility. Andersen (2003) and Mercado *et al.* (2005b) concluded that low social mobility is caused by the low quality of public education, and this becomes one of the main factors that explain the dynamics of poverty.

Therefore, according to the previous investigations and their findings, we follow this research with the assumption that the main factor that explains the dynamics of poverty in Bolivia is linked to low social mobility levels. We mean by social mobility: the equality of opportunities, that is to say, the probability that somebody can reach a better social position independently of his or her position at origin. Low social mobility generates a vicious poverty circle, in which households that were poor yesterday, will see that their children are poor today, and with high probability, their children's children will be poor tomorrow (Mercado, *et al.*, 2002).

Although, low social mobility in Bolivia is closely related to ethnic discrimination, we have some evidence that this phenomenon is reinforced by gender discrimination. And this is the core concept around which the present research aims to give some answers.

Therefore, our research hypothesis acknowledges the fact that social mobility is one of the main factors that explains the dynamics of the poverty circle in Bolivia. Indeed, our research hypothesis is that the dynamics of the phenomenon (the vicious circle) is explained fundamentally by two self-reinforcing factors –ethnic and gender discrimination; which in turn lower social mobility levels in a dynamic framework.

Our research will analyze ethnic discrimination, contrasting the social mobility levels within sub-samples: i) indigenous vs. non-indigenous; ii) male vs. female, iii) and a crossed analysis combining i. and ii. results. In summary, the objective of this research is to extend our knowledge on the causes that explain the dynamics of poverty in Bolivia. For this, we will try to identify the main variables that explain the low levels of social mobility. We will start with the hypothesis that low social mobility is explained by high levels of ethnic and gender discrimination.

Section 2 provides a brief background regarding poverty in Bolivia and its link with social mobility. Section 3 explains the methodology used in the research. Section 4 provides the results and empirical evidence. Finally, the concluding remarks are at the end of the paper.

1. The Bolivian Context

The Bolivian economic growth for the period of 1952 to 2006 showed a modest behavior, on average, the economy rate of growth was very close to the population's rate of growth (Mercado, *et al.*, 2002). Poverty in Bolivia has become an endemic phenomenon, we were poor yesterday, we are poor today and, most likely, we will be poor tomorrow. Bolivia has experimented with almost all conceivable economic policies. We have nationalized, privatized, capitalized and nationalized again, while we continue to be stuck in poverty.

Alongside the public economic policies, increased public expenditures only resulted in larger fiscal deficits, devaluations did not have a noticeable effect on our balance of payments, on the contrary, they only imposed disincentives to the national productive apparatus by raising the prices of imported capital goods, and an expansive monetary policy only resulted in a reduction of net international reserves and a reduction in the purchasing power of the local currency due to inflationary pressures. We opened up the economy to the free trade and, in other periods, we closed the economy, however all the efforts were vain, the economy stayed in much reduced levels of growth.

The actual poverty status in Bolivia is very high, indeed, the country maintains the higher poverty levels in the South America. But beyond the actual poverty numbers¹ we want to highlight the concept that a poverty rate of fifty per cent poverty can mean two completely different things. One interpretation of this might be that the probability of becoming a poor person is 50 per cent; or from another point of view, the whole population is poor half of the time. That means that the 50 per cent of the population is always poor, while the remainder is unlikely to become poor. If the same households are poor all the time, it is much more difficult to develop strategies to alleviate the hardship. Poor people cannot save for harder times, as all times are hard, and they cannot borrow against higher future income because they don't expect their incomes to be any better in the future. It seems that the best strategy is to transfer knowledge and skills to this deprived population in order to prepare them to enhance their entitlements management in the future².

1 Incidence of poverty and extreme incidence of poverty in 2004 was 63.1% and 34.5% respectively.

2 We are taking the concept of entitlement as Sen (1999).

In accordance with a study carried out by the Institute of Socio-Economic Research (IISEC) of the Bolivian Catholic University (Mercado *et al.*, 2005), the tendency factors are more important than the short run factors to explain economic growth, that means that the structural restrictions are more important than those linked to the economic policies, and these structural constraints reduced the economic policies effect in the short run. This idea is supported by Klasen *et al.* (2002), who highlights the strong dichotomy among the behavior of urban economic agents versus their rural counterparts. The production function is not consistent between them in terms of technology, production scale, workers skills and most importantly products. This situation constitutes a restraint of the Bolivian economic growth from this lack of technological progress of rural areas.

This diagnosis has led to the investigators to examine about the structural factors that would be restraining the economic growth. Andersen (2003) introduced within the explanatory variables the low social mobility index, she demonstrated the high correlation between the low social mobility index and the low rate of growth for the Bolivian economy. Other investigations, such as Mercado *et al.* (2005), corroborated Andersen's initial discoveries, at the same time they demonstrated the little effectiveness that would have the economic policies in a context of strong structural restrictions.

Later works were focused to determine the factors that would explain the low social mobility, as well as to find the links between the social sphere and the economic growth. The investigations of Mercado *et al.* (2004) and Leitón (2005) put their emphasis in the educational system, the segmentation in the social structure and the discrimination associated to factors of ethnic origin and gender.

We understand as social mobility the set of opportunities that the individuals have to ascend in the social scale, low social mobility implies that people are stuck somewhere in the income distribution scale year after year, and generation after generation. If the structural social factors -basically those referred to the household's heritable aspects- are important; then, the possibilities of social ascent are reduced, *i.e.* there exists a low social mobility condition. This implies the lack of a link between the efforts of people to overcome poverty such as training (studying several years), working harder, saving and investing; as they don't expect these efforts to pay off in the future and create a vicious circle, in which a low social mobility condition is reducing the incentives for growth, implying lower economic growth rates and which is reinforced in the next period by

a low social mobility index, and so on (Vicious Circle of Poverty) In sum, when these efforts produce no payback, people make less effort and less incentives to growth, thus, the country doesn't growth

The actual literature show us that the education is the most important factor concerning the social mobility, however, there other factors or barriers to social mobility, like the differences in education quality and education geographical scope between rich and poor people, even with public (free) education, there are still indirect costs clothing, school supplies, transport, etc , and opportunity costs due to low households' income levels, children are linked to domestic and farm work The latter has become an important source of income for poor people.

Furthermore, the discrimination in the labor market reduces the returns to education to those population underprivileged segments. Extensive investigations have tried to account for discrimination and social group within the whole population Mercado *et al.* (2004) have found that the marriage market corresponds to high levels of discrimination and that the structure of the marriage market imposes a discrimination strategy *per se* within social groups.

2. Methodology

The ISM will be calculated following the methodology proposed by Andersen (2003)³ In first instance the Fields Decomposition is applied to the results of the regression of the form:

$$(1) \quad X_{t,i} = \alpha + \beta Z_{t,i} + \varepsilon$$

Where:

$X_{t,i}$: Educational gap for period t and cohort i.

α : Constant term

β : Matrix of coefficients for the households' characteristics

$Z_{t,i}$: Matrix of households' characteristics

ε : Error term

3 For a full description of Andersen (2003) methodology, please see appendix.

We have defined the educational gap as the children's years old versus the number of years of education he has received at the moment of the survey, minus six years (which determines the time when children enroll the school).

However, the SMI is calculated based in a regression where the dependent variable is the educational gap and the explanatory variables are the "family records", for example, the level of the parents' education, the household's income, the parents' ethnic condition among others. If those variables are statistically significant to explain the educational gap, we conclude that the social mobility is low. The estimation through the Fields' decomposition will be applied to test the importance of each explanatory variable, through the relative contributions to the factorial inequality.

In order to answer the questions proposed in this research we have identified the following cohorts that will help us to understand the poverty dynamics in Bolivia. The Social Mobility Index is calculated for the periods 1993 and 2003-2004 with the Bolivian households' survey data. The periods proposed give us 10 years time span.

Also, we have taken into account people between 12 and 18 years old for the first cohort; between 19 and 25 years old for the second cohort and finally the total sample of 12 to 25 years old for the third cohort. Furthermore, we make distinction by gender and ethnicity characteristics. Therefore we obtain the following Social Mobility Indexes (See Table 1)

Table 1
Index of Social Mobility: Cohorts and Subsets

Cohorts: 12-18 years old 19-25 years old 12-25 years old	All	Indigenous	Non-Indigenous
All	√	√	√
Men	√	√	√
Women	√	√	√

As the SMI is based on the educational gap, we only consider people that are between 12 to 25 years old. We expect that the results will show us no changes in the

social mobility index between 1993 and 2003-2004. Also, it is expected that the social mobility index is smaller for the indigenous women sub sample.

In the second step, and in order to identify the phenomenon in more detail, the above results allow us to calculate the variations of the SMI between the periods selected. In this regard, we will be able to acknowledge how people have evolved in terms of social mobility.

We expect that the SMI index will be lower in the crossed *Indigenous-Women* box. Also, it is expected that the SMI is lower in the cases where the proportion of people that attend public schools is higher to those that attend private schools. As before, it is expected that the social mobility has not changed between 1993 and 2003-2004.

In the third step, we will try to see the process from a more dynamic angle⁴. Thus, for the year 1993, we will take the same sub sample as before. Importantly, both age and education will be included within the educational gap. The same will be applied to the 2003-2004 survey and its subsequent estimations. Hence, with the previous results, we follow the same methodology as in the SMI and contrast both results. How do the differences help to explain the phenomenon? The estimation of the probability for a person to be poor in 1993 and remain poor in 2003-2004 leads us to important remarks about the permanent characteristics of poverty.

A poor-poor condition for both 1993 and 2003-2004 can show us the stickiness of poverty according to specific characteristics, mainly making distinction by gender and ethnicity. According to the explanation given above, we define the following econometric process in order to understand the phenomenon⁵.

$$\begin{aligned} \text{Let: } \hat{P}_{1993} &= x_{1993} \hat{\beta}_{1993} + \varepsilon_{1993} \\ \hat{P}_{2003} &= x_{2003} \hat{\beta}_{1993} + \varepsilon_{1993} & (3 \text{ y } 4) \\ e = P_{2003} &= \hat{P}_{1993} & (5) \end{aligned}$$

4 According to the characteristics of the households' databases, we cannot use panel data estimation. The methodologies of each survey have changed. However, we can perform other standard econometric analysis.

5 This methodology follows the one provided by Juhn et al. (1993).

P: The estimated educational gap

β : Model coefficients

ε : Statistical errors of all the regressions built for the SMI

To examine changes in poverty over time (the dynamic effects) the following null hypothesis will be used:

$$(4) \quad H_0 : \varepsilon = 0$$

If we cannot reject the null hypothesis then we conclude that the poverty circle is a permanent phenomenon. Rejection of the null hypothesis implies a transitory phenomenon. Or in other words, we can split our hypothesis according the following:

$$a) \frac{1}{n} \sum e \stackrel{<}{>} 0,$$

$$b) \frac{1}{n} \sum e = 0$$

Where:

a) Indicates a systematic behavior of poverty

b) Indicates a permanent incidence of poverty

3. Empirical Evidence

This chapter starts the explanation with the identification of poverty in Bolivia, and subsequently we follow the analysis around the Social Mobility Index and Educational Gaps as explanatory variables of the dynamics of poverty in Bolivia.

In order to characterize poverty within the country, let's take a look to Table 1, we can find the levels of poverty in Bolivia from 1999 to 2003. According the data, poverty incidence accounts for 63 per cent of total population, where indigenous people are more deprived with 70 per cent of poverty incidence. In the same table, we can highlight that indigenous people are more affected by extreme poverty⁶. Consistently,

⁶ Poverty incidence equals the head count ratio. Also extreme poverty is explained by 1 US\$ poverty line per day

this replicates for urban areas, capital cities and for rural areas. The latter ones shows a deeper poverty condition, with more of 80 per cent of poverty incidence for indigenous people

Table 2
Indicators of Poverty⁽¹⁾ and Inequality
According to Geographic Area and Linguistic Ethnic Condition (1999 - 2004)

Indicators	1999	2000	2001	2002	2003-2004 ⁽³⁾
Bolivia					
Incidence of poverty (%)	63.5	66.4	63.1	63.3	63.1
Indigenous	73.1	76.0	69.4	71.0	70.1
Non-Indigenous	45.1	54.1	51.9	53.3	49.1
Extreme Incidence of poverty (%)	40.7	45.2	38.8	39.5	34.5
Indigenous	50.6	56.1	46.0	48.7	42.0
Non-Indigenous	21.8	31.1	25.9	27.5	19.4
GINI Index	0.58	0.62	0.59	0.60	n.d.
Urban					
Incidence of poverty (%)	51.4	54.5	54.3	53.9	54.4
Indigenous	60.8	62.2	59.1	60.5	61.7
Non-Indigenous	40.7	48.2	48.2	48.1	43.7
Extreme incidence of poverty (%)	23.5	27.9	26.2	25.7	22.9
Indigenous	30.2	34.1	29.3	31.6	29.0
Non-Indigenous	15.9	22.9	22.2	20.5	14.1
GINI Index	0.49	0.53	0.53	0.54	n.d.
Capital City (2)					
Incidence of poverty (%)	46.4	52.0	50.5	51.0	52.8
Indigenous	56.7	60.5	55.1	58.8	61.0
Non-Indigenous	35.4	45.5	44.7	44.1	40.6
Extreme incidence of poverty (%)	20.7	25.7	22.3	23.9	21.7
Indigenous	27.1	32.2	25.0	30.8	28.1
Non-Indigenous	13.9	20.6	18.8	17.9	12.0
Rural					
Incidence of poverty (%)	84.0	87.0	77.7	78.8	77.7
Indigenous	85.8	89.8	81.4	81.9	80.7
Non-Indigenous	72.1	78.0	64.1	70.2	66.4
Extreme incidence of poverty (%)	69.9	75.0	59.7	62.3	53.7
Indigenous	71.8	78.3	65.7	66.7	58.3
Non-Indigenous	57.5	64.3	38.1	50.1	36.4
GINI Index	0.64	0.69	0.64	0.63	n.d.

(1) Considered by Income Line Method

(2) It includes capital cities and El Alto city

(3) The information is from MECOVI 2003-2004. INE

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Table 3
Income Poverty Line (2003 - 2004)

Characteristics	N ° of persons (Thousands)	% of Persons	Per capita household income (Bs.)	Extreme incidence of poverty	Incidence of poverty	Schooling Gap	Severity of poverty
National whole	9,138	100.0	399	63.1	34.5	31.1	19.8
Cohorts							
25 years old or less	5,384	58.9	342	68.0	37.5	33.1	20.7
Between 25 and 44 years old	2,157	23.6	480	56.9	29.3	27.2	17.2
Between 45 and 64 years old	1,159	12.7	504	54.5	28.5	27.4	18.2
64 years old or more	437	4.8	427	57.6	39.5	35.0	25.9
Gender							
Male	4,474	49.0	407	62.2	34.1	30.7	19.6
Female	4,664	51.0	392	64.0	34.9	31.5	19.9
Level of education reached							
None	629	11.4	219	75.9	53.3	46.2	33.7
From 1 to 5 years of education	1,525	27.7	276	70.8	41.4	37.8	25.7
From 6 to 8 years of education	888	16.2	351	61.3	29.9	28.1	16.8
From 9 to 12 years of education	1,669	30.4	470	51.7	20.1	20.3	11.0
More than 12 years of education	785	14.3	1,120	18.8	4.7	6.1	2.9
Ethnic condition							
Indigenous	6,106	66.8	310.2	70.1	42.0	36.4	23.9
Non-Indigenous	3,032	33.2	579.0	49.1	19.4	20.6	11.6

Source: Institute of National Statistics

Furthermore, when we follow the analysis by gender situation, it is important to note that women are facing higher rates of poverty incidence rather than males. Table 3 shows us that phenomenon and also is possible to follow the analysis of poverty incidence throughout the number of years of education. Interestingly, as higher are the numbers of years of education, the poverty incidence ratio decreases consistently in all the cases⁷

The households' income surveys that we have analyzed provides us results for poverty incidence in absolute numbers. The results are consistent with Table 2 and Table 3 explained above. Also, when we provide results (absolute numbers) for the average years of educations, Annex 3 and Annex 4 accounts for those results.

According the characteristics explained in the methodology, we have made the econometric estimation of the regressions (with the Ordinary Least Squares Method) for the calculation of the SMI and we have obtained the results showed in Annex 5 to Annex 14. The households characteristics included in the regression are:

Dependent Variable:

$$(10) \text{ SG: Education Gap} = \text{Years old} - \text{Years of education} - 6$$

Explanatory Factors:

- AEDUMA: Mother's years of education
- AEDUPA: Father's years of education
- MIEMBROS: Number of household members.
- REG2: Dummy for the La Paz City
- REG3: Dummy for Cochabamba City
- REG7: Dummy for Santa Cruz City
- OCUPADO: Dummy for employment condition. Employed = 1
- DORMI: Number of rooms available in the house
- DAGUA: Dummy for water access
- DCLOACAS: Dummy for sewage access
- DJEFEMU: Dummy women head households
- DJEFESOL: Dummy for the head household marital status

⁷ Annex 1 and Annex 2 provides results for Urban and Rural scenarios

It is important to highlight that even though we follow the methodology proposed by Andersen (2003), we are not including the same explanatory variables due to the purposes of this research and also important to data constraints. Indeed, the data from early surveys such as the 1993s cannot provide more detailed information and we cannot follow the same households and persons in both surveys. Instead of, we are comparing the conditions for similar groups in two times in the space.

As we are studying only one country, the results of the SMI can differ from other studies, the comparisons made in previous studies are not the aim of this one. We are focused to acknowledge the behavior of the SMI within Bolivia. However, the SMI calculated by Andersen (2003) for Bolivia is 88 percentage points. We must keep in mind this feature at the time to interpret the results on Strategy Papers framework

Table 4 show us the results for the first cohort studied, *i.e.* people between 12 and 18 years old and for all the subsets defined above. The results provide a very interesting performance of the SMI within the population subsets and within the time span selected. In terms of the full sample, the SMI has increased importantly and across the subsets this is reinforced steadily.

Now, what have happened with the male-female condition? Is it true that females are 'SMI worse-off' rather than males? The results shows mixed results, for the general women subset the SMI is higher than the males one. However, when we analyze the indigenous-women condition, the results points to a worsened SMI position; as was expected, indigenous women present the lowest SMI.

Furthermore, if we compare in general the indigenous condition versus the non-indigenous one, the result shows that the indigenous condition got a lower SMI rather than the non-indigenous.

Hence, we can rely in the assumption that those within the ethnicity condition are tied to lower education levels and lower access to development opportunities. From one point of view this can constitute a problem to overcome poverty and from another point of view, this can be understood as a structural barrier to further development (economic, political and social), which in turn need to be focalized and work towards its improvement.

Table 4
Index of Social Mobility
Cohort: 12 to 18 years old

Detail	1993	2003 - 2004
All	0.921	0.942
Male	0.903	0.930
Female	0.934	0.949
Indigenous	0.900	0.910
Non-Indigenous	0.940	0.943
Indigenous Men	0.906	0.962
Non-Indigenous Men	0.919	0.925
Indigenous Women	0.881	0.872
Non-Indigenous Women	0.952	0.957

Source: Own elaboration

Following our study, if we cross the analysis between indigenous condition and gender condition, again the results shows a worse off position for the indigenous women. Moreover, interestingly in 1993 non-indigenous people were better off rather their counterparts, but this is no true for the 2003-2004 results. We must highlight that the SMI shows a higher level of social mobility for the indigenous-males. These results presumably belong to the second generation reforms carried out in Bolivia during the 1990s. The governmental policies introduced by mid-1990s should have achieved important effects in terms of social development and access to opportunities and also, improvements in the effective use of entitlements (Sen, 1999). Within these policies we can highlight the most important ones: the educational reform, health system improvements, the new social security network reform, government decentralization (Participación Popular), and all the social policies carried out within the Poverty Reduction Strategy Papers framework.

If we replicate the analysis for the next cohort (19-25) we find different results (See Table 5). In general, the SMI has not changed through time, and the conditions for people within this cohort are the same from the last 10 to 15 years. When we try to understand what is happening inside each subset we find several ups and downs in the index: a) as far as males presents the higher social mobility indexes in 1993, this is not consistent with the results for 2003-2004. In the latter years there have been changes in the distribution of the index, with a lowered SMI for males in general, b) thus, as long as non-indigenous condition has lowered their SMI, the indigenous one has increased.

the same applies to indigenous males versus non-indigenous males, c) Also, for the women subset, the non-indigenous ones have maintained their SMI (at the limit), but for the indigenous women the situation has got worst. The indigenous women SMI have dropped by almost 30 percentages.

Table 5
Social Mobility Index
Cohort: 19 to 25 years old

Detail	1993	2003 - 2004
All	0.906	0.902
Male	0.931	0.917
Female	0.882	0.886
Indigenous	0.905	0.952
Non-Indigenous	0.925	0.906
Indigenous Men	0.930	0.989
Non-Indigenous Men	0.945	0.913
Indigenous Women	0.888	0.593
Non-Indigenous Women	0.906	0.898

Source: Own elaboration

Finally, we need to observe what have happened in the full sample. For people between 12 and 25 years old, the results showed similar to the previous cohort. Again the women indigenous condition is the most disadvantaged one (see Table 6).

Table 6
Social Mobility Index
Cohort: 12 to 25 years old

Detail	1993	2003 - 2004
All	0.926	0.944
Male	0.930	0.947
Female	0.922	0.940
Indigenous	0.926	0.963
Non-Indigenous	0.943	0.944
Indigenous Men	0.945	0.986
Non-Indigenous Men	0.941	0.943
Indigenous Women	0.903	0.921
Non-Indigenous Women	0.945	0.946

Source: Own elaboration

Consequently, we have made an exercise of SMI differences between the two periods proposed.

Table 7 provides us with the results with the following remarks

- In general, the SMI have shown a positive behavior (and almost zero for the 19-25 cohort)
- People within the 19-25 years old did not benefit from the upward behavior of the SMI. In contrast, within this cohort, the index has experienced a downward trend for the following subsets: males, non-indigenous, non-indigenous males, and more heavily for indigenous women
- The most important improvements in the SMI were accounting within the 12-18 cohort, again proving the focus pointed by the Bolivian governments in poverty alleviation schemes alongside with the Poverty Reduction Strategy Papers
- The increments in the SMI seem to favor the indigenous conditions. The higher improvements are given in these subsets, except for indigenous women.

Table 7
Social Mobility Index
Cohorts Differences: 1993 vs. 2003-2004

Years old Detail	Between 12 to 18 years old	Between 19 to 25 years old	Between 12 to 25 years old
All	0.021	(0.004)	0.018
Male	0.027	(0.014)	0.016
Female	0.016	0.003	0.018
Indigenous	0.010	0.047	0.037
Non-Indigenous	0.003	(0.019)	0.001
Indigenous Men	0.056	0.060	0.041
Non-Indigenous Men	0.006	(0.032)	0.002
Indigenous Women	(0.009)	(0.295)	0.018
Non-Indigenous Women	0.004	(0.008)	0.001

Source: Own elaboration

Now that we have acknowledged the patterns of the SMI by cohort and controlling by indigenous and gender conditions, we follow our methodology and we apply the criteria proposed in equations 2 to 5. Precisely, Table 8 provides us the results for equation 5⁸. We need to remember that we are now trying to understand the patterns of the educational gap inside the sub-sample used to study the Social Mobility phenomenon.

We have found an overall increase in the educational gap. Which is mainly explained by a higher increase for indigenous people, and specifically (and markedly) for indigenous women. These results are consistent with the ones explained above in the sense that, even though that indigenous people (males) are improving their education levels, it seems that the indigenous condition *per se* may represent a constrain to close the gap. This reinforces the idea that the earnings in terms of years of education ending with a higher social mobility index is greatly explained by the focused social programs implemented in Bolivia during the 1990s. Which has not achieved a sustainability status and therefore still needs further support throughout social programs.

Table 8
Coefficient E
Changes in the Probability to be Poor in Bolivia

e = p2003 - p1993

Calculated differences between 1993 - 2003

Years old Detail	Between 12 to 18 years old	Between 19 to 25 years old	Between 12 to 25 years old
All	0.0584	0.3839	0.2377
Male	0.0323	0.2622	0.2187
Female	0.0881	0.5601	0.2650
Indigenous	0.3781	1.4142	0.9771
Non-Indigenous	0.0573	0.2616	0.1759
Indigenous Men	0.3217	1.4041	0.8164
Non-Indigenous Men	0.0201	0.1200	0.1790
Indigenous Women	0.3965	1.7145	1.2482
Non-Indigenous Women	0.0834	0.4636	0.1874

Source: Own elaboration

8 The estimation of equations 2 to 7 are provided in full in Annex 2

In general, the results shows that Bolivia as a whole has not reversed the widening educational gap and still is a binding problem to account for and overcome. This means that the economic conditions and the efforts that have been made in order to overcome poverty are not enough in this process. Even though we have claimed that the social policies constituted an important pillar in order to overcome poverty and that have transferred better skills to the population that allow them to do a better use of their entitlements, the detailed results have mixed trends.

4. Final remarks

The poverty status in Bolivia has not changed dramatically along the last 15 years. The Social Mobility index has shown improvements in various segments of the population, but still there are important groups that are lagging behind.

For the 12-18 years old cohort and in terms of the full sample, the Social Mobility Index (SMI) has proved and increase, which replicates for the all the subsets: males versus females, indigenous versus non-indigenous and the crossed analysis for the indigenous-gender condition.

In particular, the results are mixed for the women subsets. For the general women subset the SMI is higher than the males one. But, when we follow the analysis for the women indigenous, the results are disappointing due to a worsened SMI position. This proves our hypothesis about indigenous women with the lowest Social Mobility Index.

However, regarding the comparison between indigenous versus non-indigenous subsets, the results point to a better position of the non-indigenous population. Thus, in 1993 non-indigenous people were better off than the indigenous ones rather their counterparts, but unexpectedly, this is not true for the 2003-2004 results.

The governmental policies introduced by mid-1990s should have achieved important effects in terms of social development and access to opportunities and also, improvements in the effective use of entitlements.

For the 19-25 years old cohort, the SMI has not changed through time, and the conditions for people within this cohort are the same as for the last 15 years. But, we

acknowledge that in the latter years there have been changes in the distribution of the index, with a lowered SMI for males in general; regarding the indigenous conditions there were observed an improvement of the SMI for the indigenous population, and a decrease for the non-indigenous segment. Also, for the women subset, the non-indigenous women have not presented a change. But the situation of the indigenous women has deteriorated to a great extent. Lastly, for the full sample (12-25 cohort), again the women indigenous condition is the most underprivileged

Finally, we want to highlight the importance of social programs that seemed to got important effects in poverty alleviation levels. According the results obtained, the educative reform alongside the second generation reforms in Bolivia have introduced interesting steps towards poverty reduction. Low social mobility generates a vicious poverty circle, in which households that were poor yesterday will see that their children are poor today, and with high probability, their children's children will be poor tomorrow.

REFERENCES

- Altonji, G. J. and R. M. Blank. 1999. "Race and Gender in the Labor Market" En O. Ashenfelter y D. Card (eds.) *Handbook of Labor Economics* 3c: 3143-3259
- Andersen, Lykke. 2003. "Baja movilidad social en Bolivia" *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*. Septiembre. Universidad Católica Boliviana. La Paz
- Dahan, M. and A. Gaviria. 2000. "Sibling Correlations and Social Mobility in Latin America" Interamerican Development Bank. Office of the Chief Economist. Draft. Marzo
- Fields, G. S. 1996. "Accounting for Differences in Income Inequality" School of Industrial and Labor Relations, Cornell University. Draft. Enero
- Instituto Nacional de Estadística. Encuestas de Hogares 1993, 2003, 2004. La Paz, Bolivia
- Juhn, Chinhui, Kevin M. Murphy and Brooks Pierce. 1993. "Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill" *The Journal of Political Economy*, Vol 101, No. 3, June. Pages 410-442
- Klasen, Stephany, Melanie Grosse, Rainer Thiele, Jann Lay, Julius Spatz and Manfred Wiebelt. 2002. *Operationalizing Pro-Poor Growth. Country Case Study: Bolivia*. KfW Entwicklungsbank (KfW Development Bank)
- Leitón, Jorge G.M. 2005. "¿Existe una tendencia hacia la feminización de la pobreza?" *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*. Abril. Universidad Católica Boliviana. La Paz
- Mercado, Alejandro F. 1992. "Elementos para el diseño de políticas en el ámbito laboral" Fundación Milenio. Mimeo. La Paz, Bolivia

- Mercado, Alejandro F., Lykke Andersen, Osvaldo Nina and Mauricio Medinacelli. 2002. "Movilidad social: clave para el desarrollo" Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) - Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC) Universidad Católica Boliviana La Paz
- Mercado, Alejandro F., Jorge G.M. Leitón and Fernando Ríos. 2004 "Segmentación en el mercado matrimonial". *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico* Octubre. Universidad Católica Boliviana. La Paz
- Mercado, Alejandro F., Jorge G. M. Leitón and Marcelo F. Chacón. 2005. "El crecimiento económico en Bolivia (1952-2003)" *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*. Edición Especial, Julio. Universidad Católica Boliviana. La Paz
- Mood, A.M., F.A. Graybill and D.C. Boes. 1974 *Introduction to the Theory of Statistics* Third Edition, McGraw-Hill
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Annex 1
Urban Income Poverty Line

Characteristics	N° of persons (Thousands)	% of Persons	Per capita household income (Bs.)	Extreme Incidence of poverty	Incidence of Poverty	Schooling Gap	Severity of poverty
Urban	5,706	100.0	508	54.4	22.9	22.2	12.0
Cohorts							
25 years old or less	3,380	59.2	434	59.8	26.3	24.7	13.3
Between 25 and 44 years old	1,467	25.7	582	49.6	19.5	19.5	10.5
Between 45 and 64 years old	654	11.5	673	41.5	13.8	15.9	8.4
64 years old or more	205	3.6	656	41.8	21.0	20.0	12.7
Gender							
Male	2,784	48.8	512	53.6	22.6	21.8	11.7
Female	2,922	51.2	503	55.2	23.3	22.6	12.2
Level of education reached							
None	220	6.2	308	66.1	32.7	30.7	18.7
From 1 to 5 years of education	740	20.9	358	62.3	26.0	25.9	14.5
From 6 to 8 years of education	559	15.8	400	55.8	22.6	22.5	12.0
From 9 to 12 years of education	1,309	37.0	515	47.6	16.4	17.3	8.7
More than 12 years of education	705	20.0	1,141	19.2	4.6	6.2	2.9
Ethnic condition							
Indigenous	3,395	59.5	396.9	61.7	29.0	26.0	14.4
Non-Indigenous	2,311	40.5	670.1	43.7	14.1	16.6	8.4

Source: UDAPE, 2003

Annex 2
Rural Income Poverty Line

Characteristics	N° of persons (Thousands)	% of Persons	Per capita household income (Bs.)	Extreme Incidence of poverty	Incidence of Poverty	Schooling Gap	Severity of poverty
Rural	3,432	100.0	219	77.7	53.7	45.9	32.8
Cohorts							
25 years old or less	2,004	58.4	187	81.8	56.4	47.4	33.1
Between 25 and 44 years old	690	20.1	263	72.3	50.0	43.6	31.6
Between 45 and 64 years old	506	14.7	284	71.3	47.4	42.3	30.8
64 years old or more	233	6.8	226	71.6	55.8	48.2	37.6
Gender							
Male	1,690	49.2	232	76.4	53.0	45.4	32.7
Female	1,742	50.8	254	73.1	49.3	43.2	31.1
Level of education reached							
None	408	20.8	171	81.1	64.4	54.6	41.7
From 1 to 5 years of education	785	40.0	198	78.9	56.0	49.0	36.3
From 6 to 8 years of education	329	16.8	268	70.7	42.4	37.7	25.0
From 9 to 12 years of More than	360	18.3	305	66.5	33.4	31.3	19.3
12 years of education	80	4.1	930	15.3	5.7	5.4	2.7
Ethnic condition							
Indigenous	2,712	79.0	201.6	80.7	58.3	49.3	35.8
Non-Indigenous	721	21.0	286.6	66.4	36.4	33.3	21.6

Source: UDAPE, 2003

Annex 3
Poverty Incidence and Income Levels

Details	From EIH of 1993					From MECOVI 2003 - 2004				
	All	Male	Female	Indigenous	Non-Indigenous	All	Male	Female	Indigenous	Non-Indigenous
Observations	2,864,170	1,408,647	1,455,523	817,407	1,675,999	4,707,317	2,300,344	2,406,973	885,405	3,568,770
Mean	286.699	287.047	286.362	219.377	334.036	597.244	599.657	594.937	367.677	665.486
Decil 1	1.472	1.498	1.448	1.671	1.440	1.771	1.761	1.777	2.121	1.772
Decil 2	2.503	2.538	2.470	2.829	2.465	2.882	2.878	2.891	3.804	2.774
Decil 3	3.382	3.413	3.350	3.703	3.339	3.669	3.667	3.663	4.864	3.548
Decil 4	4.214	4.254	4.180	4.647	4.183	4.518	4.544	4.498	5.839	4.408
Decil 5	5.191	5.244	5.131	5.556	5.151	5.480	5.494	5.462	7.015	5.364
Decil 6	6.379	6.467	6.299	6.757	6.388	6.630	6.659	6.612	8.164	6.549
Decil 7	8.109	8.221	7.998	8.335	8.101	8.120	8.104	8.132	9.725	7.950
Decil 8	10.662	10.746	10.569	10.962	10.507	10.303	10.280	10.325	11.876	10.302
Decil 9	15.206	15.318	15.107	15.424	15.146	15.406	15.393	15.429	15.709	15.857
Decil 10	42.882	42.301	43.449	40.115	43.282	41.221	41.222	41.211	30.882	41.477
Decil 10 / Decil 1	29.106	28.225	29.973	23.955	30.033	23.260	23.368	23.171	14.542	23.380
Percentil 90 / Percentil 10	9.301	9.203	9.401	8.293	9.798	8.018	8.069	7.978	5.886	8.791
Percentil 95 / Percentil 80	2.332	2.272	2.396	2.252	2.358	2.520	2.527	2.514	1.912	2.481
GINI Index	0.529	0.525	0.534	0.499	0.533	0.503	0.503	0.504	0.399	0.510
Theil Index	0.639	0.627	0.651	0.515	0.671	0.523	0.523	0.523	0.291	0.532
Coefficient de Variation	2.533	2.489	2.575	1.563	2.708	1.562	1.560	1.564	0.945	1.560
Coefficient of Atkinson (e=0.5)	0.239	0.235	0.243	0.209	0.245	0.212	0.212	0.212	0.132	0.216
Coefficient of Atkinson (e=1.0)	0.389	0.384	0.395	0.351	0.395	0.354	0.354	0.354	0.244	0.361
Coefficient of Atkinson (e=2.0)	0.584	0.579	0.589	0.541	0.591	0.552	0.554	0.549	0.446	0.556
Entropy Generalize Index (c=0.0)	0.494	0.485	0.502	0.431	0.503	0.437	0.438	0.437	0.280	0.447
Entropy Generalize Index (c=1.0)	0.639	0.627	0.651	0.515	0.671	0.523	0.524	0.523	0.292	0.533
Entropy Generalize Index (c=2.0)	3.209	3.099	3.316	1.222	3.667	1.220	1.216	1.223	0.446	1.216
fgt(alfa 0)	10.67	10.39	10.95	14.52	8.01	3.91	3.84	3.97	6.98	2.96
fgt(alfa 1)	3.91	3.76	4.07	5.38	2.99	1.37	1.36	1.37	2.79	0.95
fgt(alfa 2)	2.47	2.37	2.56	3.41	1.93	0.78	0.76	0.8	1.61	0.54

Source: Author's own estimation. Based on Bolivian Households Surveys 1993 - 2003/2004.

Annex 4 Educational Statistics (Age cohorts)

Detail	From EIH of 1993			From MECOVI 2003 - 2004		
	Observations	Mean	Standard Desv.	Observations	Mean	Standard Desv.
All						
Between 12 to 18 years old	426,125	1.053	1.473	680,871	1.076	1.519
Between 19 to 25 years old	241,018	3.664	3.096	358,999	3.789	3.217
Between 12 to 25 years old	667,143	1.996	2.534	1,039,870	2.012	2.598
Male						
Between 12 to 18 years old	214,415	1.047	1.398	337,839	1.127	1.495
Between 19 to 25 years old	126,280	3.719	2.909	208,402	4.078	3.245
Between 12 to 25 years old	340,695	2.038	2.456	546,241	2.253	2.730
Female						
Between 12 to 18 years old	211,710	1.058	1.546	343,032	1.025	1.542
Between 19 to 25 years old	114,738	3.603	3.291	150,597	3.388	3.137
Between 12 to 25 years old	326,448	1.953	2.614	493,629	1.746	2.416
Indigenous						
Between 12 to 18 years old	66,549	1.821	1.945	57,869	1.776	1.928
Between 19 to 25 years old	48,869	4.970	3.716	25,666	5.474	3.657
Between 12 to 25 years old	115,418	3.154	3.231	83,535	2.912	3.094
Non-Indigenous						
Between 12 to 18 years old	359,576	0.910	1.321	622,188	1.002	1.439
Between 19 to 25 years old	192,149	3.332	2.824	333,172	3.652	3.128
Between 12 to 25 years old	551,725	1.754	2.290	955,360	1.926	2.521

Source: Author's own estimation. Based on Bolivian Households Surveys 1993 - 2003/2004.

Annex 5
Econometric Estimation
Estimation from EIH of 1993
Estimation for All

Schooling Gap	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.036)	(70.280)	0.037	(0.107)	(79.280)	0.067	(0.075)	108.980	0.044
Father's years of education	(0.039)	(72.610)	0.042	(0.053)	(36.120)	0.027	(0.051)	(69.100)	0.030
Number of household members	0.067	63.880	0.012	0.147	62.610	0.018	0.086	66.380	0.009
Dummy for the La Paz City	(0.307)	(53.640)	0.005	(0.395)	(25.820)	0.002	(0.290)	(37.790)	0.002
Dummy for Cochabamba City	(0.146)	(19.880)	0.002	(0.422)	(22.060)	0.005	(0.239)	(24.490)	0.002
Dummy for Santa Cruz City	0.016	2.440	0.000	(0.055)	(3.190)	0.001	0.010	1.170	0.000
Dummy for employment condition (Employed=1)	0.496	85.660	0.027	1.276	111.810	0.060	1.726	265.970	0.110
Number of rooms available in the house	(0.110)	(64.120)	0.022	(0.258)	(59.840)	0.031	0.020	9.040	0.001
Dummy for water access	(0.333)	(52.610)	0.012	(0.715)	(38.210)	0.014	(0.415)	(47.270)	0.006
Dummy for sewage access	(0.085)	(17.140)	0.006	(0.534)	(40.850)	0.024	(0.051)	(7.750)	0.002
Dummy women head households	(0.023)	(2.920)	0.000	0.160	8.700	0.001	(0.104)	(10.580)	0.002
Dummy for the head household marital status	(0.094)	(4.610)	0.000	0.892	18.650	0.002	0.359	13.750	0.001
Constant	1.727	160.470		4.730	171.170		2.381	169.060	
R2			0.166			0.247			0.205
Sum of Factor Inequality Weights			0.165			0.247			0.204
Social Mobility Index			0.921			0.906			0.926

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 6 Econometric Estimation for Gender

Schooling Gap	Estimation for Males									Estimation for Females								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.036)	(51.060)	0.042	(0.073)	(41.320)	0.043	(0.064)	(67.490)	0.037	(0.037)	(48.320)	0.033	(0.137)	(67.090)	0.090	(0.086)	(85.160)	0.050
Father's years of education	(0.045)	(60.290)	0.055	(0.052)	(28.010)	0.026	(0.054)	(55.000)	0.033	(0.036)	(45.550)	0.033	(0.054)	(23.530)	0.028	(0.047)	(43.950)	0.028
Number of household members	0.052	39.370	0.010	0.166	56.620	0.026	0.071	42.570	0.008	0.083	50.530	0.013	0.125	33.990	0.012	0.103	51.140	0.009
Dummy for the La Paz City	(0.345)	(47.290)	0.009	(0.524)	(27.060)	0.008	(0.302)	(30.230)	0.004	(0.261)	(29.420)	0.003	(0.244)	(10.300)	0.001	(0.270)	(23.020)	0.000
Dummy for Cochabamba City	(0.209)	(21.880)	0.003	(0.116)	(4.760)	0.001	(0.145)	(11.230)	0.001	(0.084)	(7.520)	0.000	(0.711)	(24.080)	0.010	(0.341)	(23.250)	0.003
Dummy for Santa Cruz City	(0.053)	(6.320)	0.001	0.222	10.040	0.005	0.018	1.570	0.000	0.049	4.980	0.000	(0.446)	(16.790)	0.002	(0.054)	(4.150)	0.000
Dummy for employment condition (Employed = 1)	0.678	95.100	0.057	1.617	109.450	0.109	2.015	242.690	0.167	0.273	28.450	0.008	0.893	50.330	0.026	1.400	135.720	0.064
Number of rooms available in the house	(0.086)	(38.270)	0.019	(0.298)	(51.680)	0.039	0.057	19.590	0.003	(0.130)	(50.050)	0.025	(0.240)	(37.680)	0.027	(0.011)	(3.390)	0.001
Dummy for water access	(0.284)	(34.230)	0.011	(0.846)	(34.730)	0.017	(0.443)	(37.710)	0.006	(0.398)	(41.690)	0.014	(0.649)	(23.000)	0.012	(0.416)	(31.880)	0.007
Dummy for sewage access	(0.153)	(23.810)	0.012	(0.318)	(19.150)	0.015	(0.030)	(3.490)	0.001	(0.019)	(2.480)	0.001	(0.671)	(33.000)	0.029	(0.059)	(5.900)	0.002
Dummy women head households	0.006	0.640	0.000	0.172	7.450	0.001	0.028	2.160	0.000	(0.048)	(3.990)	0.001	0.125	4.350	0.001	(0.242)	(16.170)	0.004
Dummy for the head household marital status	(0.221)	(8.380)	0.000	(0.338)	(5.760)	0.000	(0.087)	(2.570)	0.000	0.070	2.220	0.000	2.546	32.540	0.010	0.907	22.530	0.002
Constant	1.741	124.530		4.244	118.690		2.121	113.580		1.719	105.160		5.306	126.280		2.643	125.390	
R2			0.218			0.287			0.253			0.131			0.239			0.169
Sum of Factor Inequality Weights			0.217			0.286			0.253			0.131			0.238			0.169
Social Mobility Index			0.903			0.931			0.930			0.934			0.882			0.922

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 7 Econometric Estimation for Ethnic

Schooling Gap	Estimation for Indigenous All									Estimation for Non-Indigenous All								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.015)	(5.980)	0.006	(0.098)	(20.230)	0.029	(0.072)	(23.780)	0.019	(0.033)	(66.440)	0.034	(0.098)	(72.730)	0.063	(0.065)	(97.870)	0.038
Father's years of education	(0.125)	(59.470)	0.094	(0.168)	(37.660)	0.065	(0.138)	(52.710)	0.055	(0.025)	(46.930)	0.027	(0.023)	(15.230)	0.012	(0.032)	(44.740)	0.020
Number of household members	0.043	12.090	0.002	(0.005)	(0.730)	0.000	0.020	4.780	0.001	0.086	83.090	0.022	0.199	83.860	0.041	0.118	90.590	0.020
Dummy for the La Paz City	(0.204)	(12.150)	0.003	0.051	1.320	0.001	0.382	17.860	0.004	(0.255)	(43.320)	0.007	(0.545)	(33.990)	0.012	(0.410)	(51.730)	0.008
Dummy for Cochabamba City	(0.152)	(7.040)	0.001	0.025	0.540	0.000	0.146	5.420	0.001	(0.130)	(17.400)	0.002	(0.462)	(22.650)	0.006	(0.317)	(31.420)	0.003
Dummy for Santa Cruz City	0.616	15.190	0.006	1.682	17.880	0.009	1.344	25.600	0.007	0.136	21.670	0.006	(0.000)	(0.020)	0.000	0.075	8.850	0.002
Dummy for employment condition (Employed = 1)	0.874	54.820	0.053	1.321	42.770	0.048	1.955	106.940	0.101	0.310	51.670	0.015	1.209	103.060	0.063	1.563	235.030	0.105
Number of rooms available in the house	(0.218)	(37.590)	0.030	(0.232)	(19.970)	0.022	(0.053)	(7.710)	0.003	(0.104)	(61.250)	0.021	(0.263)	(59.290)	0.029	0.028	12.730	0.001
Dummy for water access	(0.150)	(9.490)	0.005	(0.892)	(24.510)	0.025	(0.293)	(14.410)	0.005	(0.205)	(29.690)	0.004	(0.150)	(6.590)	0.001	(0.174)	(17.670)	0.001
Dummy for sewage access	(0.264)	(15.030)	0.010	(1.113)	(31.880)	0.042	(0.216)	(10.280)	0.004	(0.031)	(6.400)	0.002	(0.379)	(27.970)	0.016	0.033	5.060	0.001
Dummy women head households	0.381	15.590	0.006	0.337	7.030	0.003	0.120	4.110	0.002	(0.193)	(24.920)	0.005	(0.117)	(6.100)	0.001	(0.311)	(31.050)	0.006
Dummy for the head household marital status	0.421	5.740	0.001	3.112	23.470	0.018	2.228	26.520	0.009	(0.260)	(12.990)	0.000	0.056	1.140	0.000	(0.147)	(5.670)	0.000
Constant	2.219	67.730		6.461	92.660		3.153	78.350		1.363	122.300		3.702	122.170		1.841	124.320	
R2			0.201			0.255			0.202			0.144			0.244			0.199
Sum of Factor Inequality Weights			0.200			0.255			0.201			0.144			0.243			0.198
Social Mobility Index			0.900			0.905			0.926			0.940			0.925			0.943

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 8 Econometric Estimation for Males and Ethnic

Schooling Gap	Estimation for Indigenous Men									Estimation for Non-Indigenous Men								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.064)	(17.140)	0.031	(0.129)	(19.310)	0.042	(0.100)	(23.980)	0.031	(0.032)	(47.220)	0.039	(0.066)	(36.140)	0.038	(0.056)	(58.910)	0.031
Father's years of education	(0.083)	(29.710)	0.063	(0.083)	(15.080)	0.029	(0.068)	(20.790)	0.024	(0.033)	(44.800)	0.043	(0.031)	(15.680)	0.016	(0.045)	(43.920)	0.028
Number of household members	0.002	0.350	0.000	(0.163)	(19.490)	0.012	(0.076)	(13.860)	0.006	0.076	58.530	0.025	0.232	74.670	0.052	0.103	59.410	0.018
Dummy for the La Paz City	(0.379)	(16.600)	0.004	(0.575)	(13.440)	0.003	(0.030)	(1.150)	0.000	(0.292)	(39.320)	0.011	(0.494)	(22.930)	0.013	(0.353)	(32.720)	0.008
Dummy for Cochabamba City	(0.163)	(5.620)	0.003	0.320	5.690	0.001	(0.009)	(0.280)	0.000	(0.182)	(18.570)	0.004	(0.113)	(4.250)	0.001	(0.130)	(9.360)	0.001
Dummy for Santa Cruz City	0.544	10.480	0.009	(2.249)	(19.600)	0.014	(0.693)	(11.160)	0.000	0.018	2.250	0.001	0.315	13.540	0.011	0.095	8.050	0.003
Dummy for employment condition (Employed = 1)	0.855	40.420	0.067	1.657	42.850	0.103	2.121	94.960	0.153	0.530	72.360	0.045	1.531	96.300	0.106	1.922	217.330	0.164
Number of rooms available in the house	(0.154)	(19.470)	0.024	(0.190)	(13.260)	0.021	(0.010)	(1.150)	0.001	(0.083)	(37.540)	0.018	(0.349)	(56.070)	0.043	0.062	20.380	0.002
Dummy for water access	(0.278)	(12.750)	0.012	(0.829)	(18.530)	0.034	(0.285)	(11.070)	0.006	(0.108)	(11.810)	0.002	(0.470)	(15.420)	0.005	(0.300)	(21.720)	0.001
Dummy for sewage access	(0.293)	(12.270)	0.012	(0.874)	(20.310)	0.038	(0.180)	(6.890)	0.003	(0.133)	(21.190)	0.011	(0.283)	(15.870)	0.013	0.013	1.430	0.000
Dummy women head households	0.455	14.570	0.004	1.386	23.740	0.001	0.799	22.340	0.003	(0.179)	(17.980)	0.006	(0.192)	(7.660)	0.001	(0.191)	(13.960)	0.003
Dummy for the head household marital status	0.888	12.350	0.005	4.773	20.070	0.019	1.430	15.150	0.004	(0.775)	(27.770)	0.003	(0.770)	(13.000)	0.001	(0.404)	(11.390)	0.000
Constant	2.231	49.630		5.708	70.480		2.696	54.370		1.399	95.720		3.663	88.790		1.792	86.350	
R2			0.225			0.311			0.224			0.206			0.300			0.256
Sum of Factor Inequality Weights			0.225			0.311			0.224			0.206			0.299			0.255
Social Mobility Index			0.906			0.930			0.945			0.919			0.945			0.941

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 9 Econometric Estimation for Females and Ethnic

Schooling Gap	Estimation for Indigenous Women									Estimation for Non-Indigenous Women								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	0.014	3.850	0.005	(0.092)	(14.150)	0.029	(0.061)	(14.350)	0.015	(0.034)	(46.890)	0.030	(0.123)	(62.590)	0.087	(0.073)	(78.350)	0.043
Father's years of education	(0.162)	(51.440)	0.124	(0.204)	(30.590)	0.083	(0.189)	(48.060)	0.082	(0.021)	(27.150)	0.018	(0.014)	(6.270)	0.007	(0.021)	(20.430)	0.012
Number of household members	0.066	13.520	0.001	0.093	8.990	0.003	0.074	11.870	0.002	0.095	57.660	0.019	0.161	44.560	0.030	0.132	68.060	0.020
Dummy for the La Paz City	(0.109)	(4.470)	0.002	0.568	9.210	0.013	0.640	19.460	0.006	(0.206)	(22.540)	0.004	(0.590)	(25.200)	0.010	(0.458)	(39.730)	0.006
Dummy for Cochabamba City	(0.143)	(4.450)	0.001	(0.525)	(7.400)	0.016	0.216	5.320	0.002	(0.074)	(6.610)	0.001	(0.892)	(28.810)	0.014	(0.530)	(36.490)	0.007
Dummy for Santa Cruz City	0.630	9.890	0.003	5.866	41.780	0.070	3.405	41.220	0.028	0.214	22.450	0.007	(0.391)	(15.630)	0.008	(0.006)	(0.510)	0.000
Dummy for employment condition (Employed = 1)	0.899	37.100	0.043	0.864	18.650	0.021	1.844	64.930	0.075	(0.018)	(1.790)	0.000	0.706	40.190	0.020	1.081	105.500	0.048
Number of rooms available in the house	(0.295)	(33.970)	0.036	(0.177)	(10.400)	0.016	(0.100)	(9.640)	0.005	(0.116)	(45.370)	0.023	(0.217)	(34.530)	0.022	0.001	0.250	0.000
Dummy for water access	(0.118)	(5.090)	0.003	(1.090)	(20.190)	0.023	(0.454)	(14.970)	0.007	(0.334)	(32.240)	0.008	0.218	6.490	0.001	(0.087)	(6.180)	0.000
Dummy for sewage access	(0.256)	(9.890)	0.009	(1.326)	(25.910)	0.045	(0.229)	(7.280)	0.004	0.068	9.150	0.003	(0.422)	(20.720)	0.017	0.064	6.700	0.002
Dummy women head households	0.307	8.110	0.007	(0.482)	(6.880)	0.007	(0.384)	(8.670)	0.008	(0.176)	(14.850)	0.003	(0.079)	(2.680)	0.001	(0.439)	(30.070)	0.008
Dummy for the head household marital status				0.647	3.920	0.004	3.727	26.120	0.019	0.200	7.040	0.001	1.423	16.420	0.004	0.159	4.210	0.000
Constant	2.449	51.400		7.247	69.000		3.820	62.820		1.351	80.800		3.834	87.030		1.919	91.360	
R2			0.209			0.323			0.244			0.109			0.203			0.143
Sum of Factor Inequality Weights			0.209			0.323			0.244			0.109			0.203			0.143
Social Mobility Index			0.881			0.888			0.903			0.952			0.906			0.945

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 10
Econometric Estimation
Estimation from MECOVI of 2003 - 2004

Estimation for All									
Schooling Gap	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.049)	(114.490)	0.042	(0.106)	(96.800)	0.062	(0.082)	(147.350)	0.042
Father's years of education	(0.020)	(38.400)	0.016	(0.084)	(62.170)	0.036	(0.033)	(48.750)	0.014
Number of household members	0.110	125.020	0.027	0.217	94.290	0.034	0.106	92.580	0.015
Dummy for the La Paz City	(0.122)	(25.350)	0.002	0.064	4.720	0.000	0.125	19.280	0.000
Dummy for Cochabamba City	(0.044)	(7.630)	(0.000)	(0.547)	(33.100)	0.003	(0.284)	(36.270)	0.001
Dummy for Santa Cruz City	0.044	8.350	0.000	0.019	1.250	0.000	0.074	10.290	0.000
Dummy for employment condition (Employed=1)	0.636	142.340	0.038	1.301	134.320	0.058	1.841	360.210	0.121
Number of rooms available in the house	(0.104)	(66.190)	0.009	(0.233)	(59.410)	0.013	0.057	28.970	0.000
Dummy for water access	(0.149)	(25.280)	0.002	(0.915)	(47.890)	0.010	(0.289)	(34.990)	0.002
Dummy for sewage access	(0.158)	(40.400)	0.008	(0.681)	(59.190)	0.025	(0.264)	(49.470)	0.006
Dummy women head households	(0.246)	(39.130)	0.006	0.286	16.950	(0.000)	(0.223)	(26.810)	0.002
Dummy for the head household marital status	(0.074)	(6.970)	(0.000)	0.309	9.500	0.000	(0.046)	(3.130)	0.000
Constant	1.385	154.480		4.698	183.000		1.966	163.250	
R2			0.150			0.240			0.204
Sum of Factor Inequality Weights			0.150			0.240			0.203
Social Mobility Index			0.942			0.902			0.944

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 11 Econometric Estimation for Gender

Schooling Gap	Estimation for Males									Estimation for Females								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.062)	(103.900)	0.060	(0.106)	(72.220)	0.057	(0.089)	(111.440)	0.045	(0.039)	(62.520)	0.029	(0.104)	(64.220)	0.066	(0.074)	(96.320)	0.039
Father's years of education	(0.014)	(18.960)	0.011	(0.065)	(35.160)	0.026	(0.021)	(21.550)	0.008	(0.026)	(35.670)	0.021	(0.100)	(52.140)	0.048	(0.042)	(46.270)	0.021
Number of household members	0.076	59.830	0.013	0.176	57.930	0.026	0.081	48.250	0.009	0.143	117.550	0.047	0.267	75.810	0.048	0.141	90.450	0.026
Dummy for the La Paz City	(0.146)	(21.880)	0.004	(0.017)	(0.930)	(0.000)	0.192	20.660	0.001	(0.104)	(14.940)	0.001	0.147	7.390	0.001	0.059	6.610	0.000
Dummy for Cochabamba City	0.102	12.770	0.001	(0.421)	(18.890)	0.000	(0.098)	(8.660)	(0.000)	(0.165)	(19.730)	0.001	(0.743)	(30.820)	0.011	(0.452)	(42.080)	0.004
Dummy for Santa Cruz City	0.222	30.970	0.004	(0.504)	(24.540)	0.003	0.060	5.860	(0.000)	(0.159)	(20.250)	0.001	0.735	32.310	0.009	0.084	8.310	0.000
Dummy for employment condition (Employed = 1)	0.630	105.730	0.044	1.519	115.010	0.076	2.105	298.640	0.156	0.594	88.100	0.029	0.922	63.340	0.028	1.384	184.270	0.070
Number of rooms available in the house	(0.135)	(62.700)	0.015	(0.258)	(46.360)	0.014	0.030	10.500	0.000	(0.067)	(29.100)	0.005	(0.204)	(37.030)	0.012	0.079	29.210	0.000
Dummy for water access	(0.223)	(27.640)	0.005	(0.030)	(1.230)	0.000	(0.081)	(6.950)	0.001	(0.042)	(4.920)	0.000	(1.996)	(66.440)	0.028	(0.435)	(37.610)	0.003
Dummy for sewage access	(0.138)	(25.300)	0.008	(1.059)	(68.380)	0.040	(0.356)	(46.080)	0.009	(0.178)	(32.230)	0.007	(0.154)	(9.080)	0.005	(0.162)	(22.440)	0.004
Dummy women head households	(0.230)	(26.160)	0.004	0.393	17.230	0.001	(0.175)	(14.560)	0.001	(0.257)	(28.850)	0.007	0.078	3.180	(0.000)	(0.322)	(28.490)	0.005
Dummy for the head household marital status	(0.183)	(13.270)	0.000	0.472	11.020	0.000	0.022	1.040	0.000	0.056	3.670	0.000	0.034	0.690	0.000	(0.117)	(5.760)	(0.000)
Constant	1.704	139.620		4.406	131.460		1.964	116.470		1.040	79.330		5.013	125.100		1.881	110.550	
R2			0.169			0.243			0.229			0.147			0.255			0.171
Sum of Factor Inequality Weights			0.168			0.243			0.228			0.147			0.254			0.171
Social Mobility Index			930			0.917			0.947			0.949			0.886			0.940

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 12 Econometric Estimation for Ethnic

Schooling Gap	Estimation for Indigenous All									Estimation for Non-Indigenous All								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.060)	(23.130)	0.015	0.195	18.890	(0.010)	(0.149)	(42.160)	0.028	(0.050)	(118.520)	0.046	(0.109)	(99.660)	0.065	(0.079)	(141.710)	0.041
Father's years of education	(0.170)	(52.920)	0.076	(0.364)	(45.840)	0.057	(0.051)	(12.890)	0.009	(0.014)	(27.600)	0.012	(0.068)	(50.160)	0.029	(0.034)	(49.190)	0.015
Number of household members	0.182	59.180	0.062	0.227	21.880	0.007	0.097	24.270	0.006	0.098	107.940	0.022	0.235	99.860	0.041	0.114	95.720	0.017
Dummy for the La Paz City	(0.169)	(7.950)	(0.001)	(0.717)	(11.670)	0.007	0.151	5.460	0.001	(0.048)	(9.880)	0.001	0.131	9.370	0.001	0.161	24.180	0.001
Dummy for Cochabamba City	(0.436)	(21.060)	0.020	(0.525)	(9.160)	0.004	(0.807)	(29.530)	0.013	0.099	16.300	0.000	(0.512)	(29.520)	0.005	(0.161)	(19.400)	0.001
Dummy for Santa Cruz City	(0.684)	(23.400)	0.001	0.823	8.700	0.005	(0.891)	(22.310)	0.002	0.110	20.710	0.001	0.078	5.000	0.000	0.143	19.530	0.000
Dummy for employment condition (Employed=1)	0.836	51.260	0.052	2.706	54.540	0.097	2.428	122.130	0.143	0.588	127.680	0.033	1.215	124.130	0.054	1.799	342.990	0.119
Number of rooms available in the house	(0.201)	(28.650)	0.004	(0.878)	(48.770)	0.046	(0.146)	(16.480)	(0.000)	(0.097)	(60.960)	0.010	(0.195)	(48.820)	0.010	0.072	35.540	0.000
Dummy for water access	(0.496)	(27.050)	0.003	(2.049)	(37.260)	0.025	(0.570)	(22.840)	0.002	(0.098)	(15.880)	0.001	(0.811)	(39.180)	0.007	(0.228)	(25.690)	0.001
Dummy for sewage access	0.103	5.730	0.001	(0.834)	(16.360)	0.022	(0.833)	(35.600)	0.012	(0.164)	(41.730)	0.008	(0.663)	(56.010)	0.023	(0.231)	(42.400)	0.005
Dummy women head households	0.102	4.120	(0.002)	2.292	34.710	0.021	(0.502)	(16.470)	0.004	(0.250)	(38.810)	0.006	0.064	3.690	(0.000)	(0.195)	(22.610)	0.002
Dummy for the head household marital status	(0.661)	(11.850)	0.001	2.213	9.530	0.005	(1.163)	(14.620)	0.001	(0.019)	(1.850)	0.000	0.295	9.130	0.000	0.023	1.560	0.000
Constant	1.941	61.960		5.639	60.980		3.433	86.610		1.280	137.160		4.415	162.540		1.715	134.670	
R2			0.231			0.287			0.220			0.140			0.235			0.202
Sum of Factor Inequality Weights			0.231			0.287			0.220			0.139			0.234			0.201
Social Mobility Index			0.910			0.952			0.963			0.943			0.906			0.944

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 13 Econometric Estimation for Males and Ethnic

Schooling Gap	Estimation for Indigenous Men									Estimation for Non-Indigenous Men									
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	
Mother's years of education	(0.053)	(17.390)	0.020	0.240	16.370	0.004	(0.099)	(18.750)	0.017	(0.064)	(107.150)	0.067	(0.111)	(75.690)	0.062	(0.087)	(107.640)	0.045	
Father's years of education	(0.045)	(11.410)	0.019	0.051	4.300	0.007	0.036	5.820	(0.003)	(0.010)	(13.980)	0.008	(0.061)	(32.920)	0.025	(0.029)	(29.320)	0.012	
Number of household members	(0.008)	(1.530)	(0.001)	0.355	27.570	0.044	0.016	2.180	0.000	0.083	65.420	0.014	0.166	53.370	0.025	0.090	52.870	0.011	
Dummy for the La Paz City	(0.611)	(22.620)	0.018	(1.446)	(18.000)	0.037	0.098	2.420	0.000	(0.069)	(10.140)	0.002	0.118	6.260	0.001	0.225	23.540	0.001	
Dummy for Cochabamba City	(0.980)	(35.580)	0.041	0.276	3.490	0.003	(0.877)	(21.170)	(0.002)	0.260	31.070	0.003	(0.348)	(14.680)	0.002	0.050	4.220	0.000	
Dummy for Santa Cruz City	(0.860)	(23.240)	(0.007)	(1.140)	(7.160)	0.001	(1.674)	(26.490)	0.015	0.281	39.100	0.006	(0.445)	(21.330)	0.001	0.128	12.410	(0.000)	
Dummy for employment condition (Employed = 1)	1.106	54.540	0.103	1.987	29.710	0.055	2.667	89.050	0.151	0.610	99.010	0.041	1.491	112.090	0.075	2.097	291.560	0.157	
Number of rooms available in the house	(0.002)	(0.260)	0.000	(0.942)	(42.790)	0.039	(0.052)	(3.960)	(0.001)	(0.144)	(66.460)	0.019	(0.222)	(38.520)	0.012	0.039	13.180	0.000	
Dummy for water access	0.080	3.540	0.001	(2.216)	(33.560)	0.084	(0.415)	(11.620)	0.003	(0.293)	(34.260)	0.007	0.566	20.990	(0.002)	0.040	3.190	(0.000)	
Dummy for sewage access	(0.544)	(23.110)	0.012	(0.828)	(12.580)	0.026	(0.961)	(26.630)	0.016	(0.089)	(16.210)	0.005	(1.133)	(70.450)	0.040	(0.327)	(41.200)	0.007	
Dummy women head households	0.067	2.130	0.000	0.337	3.990	0.008	(0.358)	(7.540)	0.001	(0.240)	(26.620)	0.006	0.289	12.240	0.000	(0.092)	(7.380)	0.001	
Dummy for the head household marital status	(1.743)	(8.120)	0.001	2.892	12.590	0.010	3.341	17.430	0.008	(0.164)	(11.730)	(0.000)	0.349	8.130	0.000	(0.036)	(1.730)	0.000	
Constant	2.120	51.890		5.826	50.320		3.032	51.720		1.630	127.130		3.853	108.300		1.680	93.780		
R2			0.207			0.318			0.204			0.177			0.241				0.234
Sum of Factor Inequality Weights			0.206			0.318			0.204			0.176			0.240				0.233
Social Mobility Index			0.962			0.989			0.986			0.925			0.913				0.943

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Annex 14 Econometric Estimation for Females and Ethnic

Schooling Gap	Estimation for Indigenous Women									Estimation for Non-Indigenous Women								
	12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old			12 to 18 years old			19 to 25 years old			12 to 25 years old		
	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.	Coefficient	t	F.I.W.
Mother's years of education	(0.035)	(7.860)	0.006	(0.141)	(10.170)	0.024	(0.173)	(35.090)	0.038	(0.038)	(63.480)	0.030	(0.104)	(65.050)	0.067	(0.069)	(90.650)	0.036
Father's years of education	(0.269)	(54.150)	0.122	(0.726)	(65.770)	0.383	(0.137)	(27.130)	0.042	(0.017)	(23.870)	0.014	(0.074)	(39.320)	0.035	(0.037)	(40.050)	0.018
Number of household members	0.233	54.950	0.112	0.327	18.490	(0.033)	0.129	27.950	0.018	0.122	94.080	0.034	0.323	91.770	0.069	0.152	91.720	0.028
Dummy for the La Paz City	(0.099)	(2.980)	(0.003)	0.679	7.390	0.006	0.199	5.200	0.003	(0.030)	(4.260)	0.000	0.144	7.270	0.001	0.106	11.660	0.000
Dummy for Cochabamba City	(0.169)	(5.410)	0.009	(0.356)	(4.420)	0.015	(0.668)	(18.520)	0.027	(0.059)	(6.750)	0.000	(0.566)	(22.990)	0.008	(0.341)	(30.090)	0.003
Dummy for Santa Cruz City	(0.774)	(17.200)	0.004	0.870	8.410	0.019	(0.341)	(6.730)	(0.003)	(0.084)	(10.910)	(0.000)	0.790	35.110	0.010	0.150	14.750	0.001
Dummy for employment condition (Employed=1)	0.596	21.550	0.030	4.085	42.680	0.165	2.254	80.290	0.125	0.504	73.210	0.023	0.725	50.200	0.022	1.290	167.100	0.065
Number of rooms available in the house	(0.330)	(28.980)	0.013	(1.142)	(44.410)	0.097	(0.293)	(24.010)	0.010	(0.053)	(22.990)	0.004	(0.176)	(32.570)	0.009	0.103	37.650	0.001
Dummy for water access	(1.029)	(35.350)	0.018	(3.891)	(34.230)	(0.098)	(0.663)	(19.140)	(0.001)	0.132	14.740	(0.000)	(2.645)	(82.860)	0.043	(0.428)	(34.540)	0.003
Dummy for sewage access	0.386	14.200	0.008	(1.715)	(22.850)	0.038	(0.882)	(29.020)	0.007	(0.233)	(42.010)	0.011	(0.069)	(4.050)	0.002	(0.148)	(20.120)	0.003
Dummy women head households	0.403	10.650	(0.011)	4.049	42.170	(0.057)	(0.471)	(12.010)	0.009	(0.276)	(30.290)	0.007	(0.192)	(7.760)	0.001	(0.348)	(29.740)	0.005
Dummy for the head household marital status	(0.751)	(11.270)	0.002				(2.366)	(28.250)	0.008	0.155	10.090	0.001	0.240	5.070	0.000	0.039	1.900	0.000
Constant	2.289	44.780		6.876	50.700		3.966	71.960		0.871	64.560		5.181	124.430		1.633	91.180	
R2			0.311			-			0.284			0.122			0.268			0.163
Sum of Factor Inequality Weights			0.311			-			0.284			0.121			0.267			0.163
Social Mobility Index			0.872			0.593			0.921			0.957			0.898			0.946

Source: Own elaboration with data of National Institute of Statistic

Appendix A

Methodology

We provide a theoretical derivation of the Fields' Decomposition and thereafter we exemplify the calculus of the Social Mobility Index ¹

A.1 The Fields' Decomposition

Let's define an income generating function of the form

$$Y = \sum_j a_j Z_j$$

Where:

Y logarithmic vector of individual's income within the sample

Z: defined as a matrix with j explicative variables, including the constant, education years, experience, squared experience, gender, etc., for each individual in the sample

The income's log-variance is a simple inequality measure. Therefore, the variance is taken from both sides of the income function. The right-hand side can be modified with the following theorem

Theorem (Mood, Graybill and Boes, 1974): Let Z_1, \dots, Z_j ; and Y_1, \dots, Y_M : two sets of random variables, and a_1, \dots, a_j and b_1, \dots, b_M two sets of constant variables. Then

$$\text{cov} \left[\sum_{j=1}^J a_j Z_j; \sum_{m=1}^M b_m Y_m \right] = \sum_{j=1}^J \sum_{m=1}^M a_j b_m \text{cov} [Z_j Y_m]$$

Under the assumption of one random variable, we get the following

$$Y = \sum_j a_j Z_j$$

$$\text{cov} \left[\sum_{j=1}^J a_j Z_j; Y \right] = \sum_{j=1}^J \text{cov} [a_j Z; Y]$$

¹ Appendix A follows the appendix provided in Andersen (2003)

The left-hand side is the covariance between Y and itself, and represents the variance of Y . Then

$$\sigma^2(Y) = \sum_{j=1}^J \text{cov}[a_j Z_j; Y]$$

Dividing by: $\sigma^2(Y)$

$$1 = \frac{\sum_{j=1}^J \text{cov}[a_j Z_j; Y]}{\sigma^2(Y)} = \sum_{j=1}^J s_j$$

Where, each s_j is given by:

$$s_j = \frac{\text{cov}[a_j Z_j; Y]}{\sigma^2(Y)} = \frac{a_j \sigma(Z_j) \text{cor}[Z_j; Y]}{\sigma(Y)}$$

S_j 's represents the weighted factorial inequality (FIW) and the lump-sum of all of these explanatory factors equals 1. Every s_j can be decomposed as follows

The years of education greater explains the income inequality

- As higher is the regression coefficient to Education
- As higher is the standard deviation of the years of education
- As higher is the correlation between education and income (covariance)

Fields explain that this decomposition applies to other commonly used inequality measures; such as the Gini Coefficient, the Atkinson Index, the generalized entropy family indexes, also the log-variance ones.

A.2 Building the Social Mobility Index

The Fields Decomposition allows us to judge the importance of each explanatory variable through the weighted factorial inequality (FIW). For example, if the FIW accounts for 0.07 means that 7 per cent of the total variation is explained by this particular variable. Therefore, if we account for the maximum years of education of the parents (E_{\max}) and the per capita household income (I_{pc}), controlled by adult equivalences; these variables account for the family initial conditions. If the family initial conditions are important, then the social mobility index is low; the opposite applies. Thus, Andersen (1993) defines the SMI as:

$$\text{SMI} = 1 - (E_{\max} + I_{pc})$$

Breve visión histórica de los mercados internos latinoamericanos y su relación con el actual estado de desarrollo general

*Jesús Mogrovejo**

Resumen

Muchas son los puntos de vista que tratan de responder el retraso económico de los países que componen América Latina. Entre alguno de ellos resurge con fuerza la denominada "teoría de la dependencia"¹, como explicación más bien estructural-histórica del desarrollo latinoamericano, creando un espacio en el discurso "marxista" para el concepto de "dependencia". No está demás desempolvar esas, aparentes y viejas, conclusiones que fueron elaboradas a mediados de la década del siglo XX por destacados economistas que se habían emancipado del desarrollo intelectual de las teorías clásicas y las teorías marxistas estrictas para explicar el desarrollo económico en

* Doctorado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela.

1 En términos conciliadores para un entendimiento abreviado, el concepto de "dependencia" puede sintetizarse por la conjunción de los aportes de Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos y André Gúnder Frank como: la situación en la cual la economía de cierto grupo de países se encuentra subordinada por el desarrollo y expansión de otras economías, con el objeto de asegurar la reproducción ampliada de esa dependencia que supone la explotación de los primeros países. Por tanto, las economías dominantes pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto las economías dependientes sólo pueden hacerlo como un reflejo de esa expansión que puede influir positiva o negativamente en su desarrollo inmediato. Pero, al mismo tiempo, el concepto de "dependencia" no se circunscribe únicamente a la relación externa, sino que la dependencia es igualmente una condición interna e integral de las sociedades latinoamericanas, dado que sus respectivas burguesías se encuentran concatenadas con los centros capitalistas que refuerzan el lazo de dependencia de sus economías.

América Latina² No obstante, la presente elucidación tan sólo recoge algunos elementos de análisis de la "teoría de la dependencia" y las conjuga con hechos históricos para responder, sucintamente, que las pautas de desarrollo económico en América Latina se generaron a partir de una matriz histórica y estructural, la cual ya es evidente en el siglo XIX

Abstract

There are many points of view that aim to respond the economic delay of the countries composing Latin America Among some of them, the denominated "theory of the dependency", resurges with force as a historical structure explanation of Latin American development, creating a space in "the Marxist" speech for the concept of "dependency". It is important to review those old conclusions that were elaborated in the middle of the decade of century XX by outstanding economists who had emancipated the intellectual development of the classic theories and the theories of strict Marxists to explain the economic development in Latin America However, the current elucidation only collects some elements of the "theory of the dependency" analysis and conjugates with historical facts to respond, briefly, that the roles of economic development in Latin America were generated from an historical and structural matrix, which is already evident in the XIX century.

Desarrollo

Es importante hacer notar que las economías latinoamericanas no partieron desde un mismo nivel económico-social Desde un principio las condiciones geográficas, el encuentro de importantes poblaciones indígenas que presentaban diterentes grados de desarrollo y, principalmente, de sumisión ante el conquistador hispano-portugués³; y las

2 Las críticas generales de apropiarse de dichas teorías se basa en que las mismas fueron argumentadas y difundidas en función a la evolución económica e histórica de los hoy países desarrollados, por lo tanto, indefectiblemente, no corresponde explicar el desarrollo del capitalismo en Latinoamérica. Especialmente las mayores dimensiones argumentativas se estrellan, principalmente, en contra de las teorías neoclásicas. Tal como Prebisch (1981) indica -refiriéndose a las teorías neoclásicas-, ignoran estas teorías la estructura social y la diversidad de elementos que se conjugan en el desarrollo, además de los económicos

3 Y también francés, puesto que la colonización de Haití y la consiguiente importación de esclavos africanos se efectivizó por intereses franceses, aunque posteriormente se haya tratado de eliminar todo vínculo con Francia tras su independencia -eliminación y/o expulsión de los criollos haitianos. Incluyendo a los mestizos- con excepción de la presencia de la lengua francesa, la que persistió como nexo de comunicación haitiano, matizada por la introducción de elementos holandeses, africanos, españoles e ingleses, ahora llamado creolé

dotaciones de potencial riqueza de la región; condicionaron la economía de las colonias y amalgamaron los diferentes estratos de las relaciones sociales. Conjunto de causas que se proyectaron hasta de nuestros días con una evidencia aplastante y que delinear con enorme precisión el estado de desarrollo de las economías latinoamericanas. Es pues de esta manera que la historia económica, plausiblemente, puede revelar los consiguientes principios de desarrollo económico y los diferentes niveles de integración con la economía mundial. Este epitome explicita las razones históricas, económicas y sociales de Latinoamérica, con el objeto de comprender el origen de las condiciones económicas actuales y, por tanto, develar un importante segmento del estado de situación presente de las economías que la componen

Es pues menester preguntarse el legado que supone haber sido dependientes de potencias extranjeras, que en sus respectivos ocasos imperiales eran en sí mismas satélites de otros centros metropolitanos europeos –Londres, Ámsterdam– Es evidente que los rasgos esenciales de lo que serían las estructuras sociales y económicas tienen su origen en las instituciones que implantaron los conquistadores⁴, en un marco que englobaba una geografía difícil de transitar y de establecerse⁵, y que incluía un factor humano sometido o esclavizado; los indígenas habían sido aniquilados si no presentaban las condiciones propicias para su sometimiento para la explotación de los recursos naturales y/o disminuidos hasta representar una minoría intrascendental⁶,

- 4 Las instituciones impuestas por los conquistadores se circunscriben, desde una perspectiva marxista, a una reproducción feudal de sus modos de producción de la Europa occidental. Esta afirmación a veces debatida se refuerza en las afirmaciones de Ernesto Laclau (1973), el que a su vez cita a Eric J. Hobsbawm al indicar al siglo XVII como el periodo de crisis general en la economía europea que marca el punto de transición a la economía capitalista. Por lo tanto, se deduce que los siglos anteriores a la citada transición los modos de producción feudales son los que dominan las interacciones entre los dueños del capital y sus trabajadores, que en este caso se llamarían siervos.
- 5 En América Latina no existen espacios naturales interiores que sean transitables, sean mares o praderas, como es el caso de los mares Mediterráneo o Báltico, o praderas de magnitud, como las del oeste de los montes Apalaches de Norteamérica. Los difíciles accidentes geográficos: cordilleras como la de los Andes, selvas tropicales insalubres y los desiertos; todo ello enmarcado en una inmensidad territorial, hacían que los extensos caminos de herradura sean extremadamente costosos, y más aún para el tránsito de carretas.
- 6 Los pueblos indígenas que lograron sobrevivir y que tuvieron alguna relevancia económica fueron las poblaciones indígenas de mayor desarrollo y/o las que se encontraban bajo la órbita de dominación de los imperios azteca e inca, puesto que, al estar organizadas por lo general sobre modos de producción serviles, permitían una más fácil dominación. En contraste, pueblos que no habían sido previamente conquistados por los primeros o no habían desarrollado un mayor grado de civilización, como los guaraníes, patagones y araucanos, difícilmente podían ser asimilables para la absorción de las riquezas y excedentes económicos de las colonias, a no ser por la esclavitud tácita, por lo que representaban más una carga que un beneficio para los intereses económicos.

además de los esclavos africanos importados. Todo aquello establecía peculiaridades únicas para establecer los actuales estados latinoamericanos.

Es así que en este contexto general se establecen las colonias en Latinoamérica y marcan los indicios primigenios del desarrollo económico en estas regiones como naciones independientes, dado el fin del proceso de balcanización de las colonias españolas. No obstante, cabe preguntarse cuál era el estado económico heredado, puesto que no ocurre a partir de un vacío, sino sobre una base económica social preexistente, como se había mencionado. El estado de situación tras la independencia de las naciones latinoamericanas no puede ser nada halagüeño, puesto que se habían desarticulado los vínculos que potencialmente podían integrar los mercados latinoamericanos con únicas reglas de juego, tal como parcialmente ocurría con el comercio hispanoamericano, a pesar de encontrarse gerentados por metrópolis subdesarrolladas. A lo anterior cabe señalar el impresionante coste indirecto de las guerras de independencia, en palabras de Cueva (1990):

la misma fuga de precipitada de riquezas ocurrida en el momento de la emancipación no es más que el punto culminante de un largo proceso de desacumulación es el acto último con que el colonizador concluye su misión civilizadora. Y el hecho no carece de significación económica. Con respecto al virreinato de Nueva España, por ejemplo, sabemos que en apenas tres años, de 1821 a 1823, emigraron riquezas líquidas equivalentes a 20 millones de libras esterlinas. En cuanto al otro gran virreinato, el de Lima, se ha estimado que sólo los barcos de guerra británicos exportaron en metálico por un valor de 26.900.000 libras esterlinas entre 1819 y 1825 [Cueva, 1990: 14].

Y lo más importante es el pesado lastre de la herencia colonial en gran parte de la América Latina, la síntesis originaria de su subdesarrollo, *su estructura precapitalista basada en las economías feudales y esclavistas*. Esta tesis, sustentada por Lukacs (1969), Laclau (1973) y Cueva (1990), enuncia diversas evidencias que hacen que dicho razonamiento sea sensatamente sustentado de acuerdo a las tipologías de los modos de producción alcanzados e inclusive potenciados tras la independencia de los países de Latinoamérica⁷. En síntesis, las estructuras económicas precapitalistas basadas

7 Como prueba de la existencia y el fortalecimiento del esclavismo en Cuba y Brasil, pese a las restricciones de las importaciones de esclavos impuesta por Inglaterra, en estos países se crearon criaderos de esclavos nativos con el objeto de conservar la fuerza laboral necesaria para las plantaciones (Halperin, 2002).

en la servidumbre y esclavitud confluyen en un modo de producción que inhibe la creación de mercados internos monetizados, puesto que ello implica la inexistencia de asalariados

Ahora bien, dentro de un marco relativista estricto, tampoco es posible inferir que estos modos de producción se hayan producido tal cual, ya que es evidente la existencia de grupos que no siendo la mayoría de sus respectivas poblaciones nacionales hayan percibido salarios fruto de sus libertades de vender su mano de obra. Sin embargo, si es claro que el verdadero sustento de las economías, el verdadero émbolo productivo se basó en la explotación feudal y esclavista. De este modo, es razonable reconocer que esta situación atomiza la consolidación de los Estados-nación como unidades económicas coherentes y por tanto constituyen un obstáculo para el desarrollo posterior de sus sociedades. Porque a diferencia de esta estructura económica, una configuración económica capitalista es propulsada por una base proletaria asalariada, si es que se extiende a lo largo de un sistema económico generando interdependencia entre sus partes y originando un mercado de suficiente envergadura, lo que proporciona en conjunto las más sólidas bases para la constitución de un Estado congruente

No obstante, existen algunos detractores de la tesis presentada, entre los que destacan Gunder Frank (1976) y Stavenhagen (1973) entre otros. Estos intelectuales han sostenido que las economías que se han parecido más a las estructuras económicas feudales han sido integrantes desde un principio del capitalismo mundial. Por ende, no constituían economías cerradas de autosubsistencia, sino que desde la conquista y colonización de América Latina, el capitalismo mundial había impuesto una estructura expoliadora de las economías latinoamericanas, convirtiéndolas en satélites coloniales de las metrópolis capitalistas extranjeras. Importantes segmentos feudales subsidiaban las economías exportadoras con el mínimo costo que representaba la mala subsistencia de la mano de obra esclava y servil, la cual, como instrumento empresarial reproducible como el ganado, trabajaba la extracción de los recursos naturales y proveía de alimento y manutención a los centros de consumo dependientes del capitalismo mercantil colonial. Por tanto, los recursos exportados a las metrópolis capitalistas tendían a ser altamente rentables y se basaban en gran parte de la apropiación de estas últimas del excedente de la fuerza de trabajo indígena y esclava. El poder del capital establecía las condiciones de cómo debían darse las relaciones mercantiles y de apropiación de la riqueza.

De este modo, a consecuencia de las imposiciones estructurales del capitalismo global, las economías latinoamericanas se habrían subdesarrollado de acuerdo a la evolución de las metrópolis capitalistas extranjeras, es decir, el subdesarrollo sería un producto histórico de las relaciones mercantiles entre el satélite y los actuales países desarrollados. Así que el capitalismo periférico, tal como lo enunciaba Raúl Prebisch, se había desarrollado como un anexo sangrante de excedentes que eran absorbidos hacia un centro, en el que las clases dominantes que residían en Latinoamérica se relacionaban en concomitancia con los intereses extranjeros explotadores. Es de esta forma que era preciso mantener los costes de explotación de la mano de obra, lo que implicaba que existieran fuertes presiones para mantener los modos de producción servil y esclavista. Asimismo, el mantenimiento de los privilegios de las clases dominantes radicaba en la explotación de los seres humanos casi sin reconocimiento a su labor.

Por otra parte y de acuerdo a las reflexiones de Prebisch (1981), es posible inferir que gran parte de la historia económica de América Latina se sintetiza en la siguiente sentencia.

Aquella distribución tan inequitativa de los frutos del desarrollo se debe primordialmente a la apropiación por los estratos superiores de la estructura social (de las economías periféricas) de una parte considerable del progreso técnico en forma de excedente económico. ..Sucede, sin embargo, que una parte importante del excedente se destina por los estratos superiores a la imitación del consumo de los centros. Hay un desperdicio ingente del potencial de acumulación de capital en la sociedad privilegiada de consumo. Y también desperdicio en la exagerada succión de los centros. Y no es ajena a ello la hipertrofia del Estado, consecuencia en gran parte de las mismas fallas del sistema. La acumulación de capital se vuelve insuficiente frente al extraordinario aumento de la fuerza de trabajo. El sistema así tiende a excluir grandes masas que quedan vegetando en el fondo de la estructura social. (Prebisch, 1981: 32)

De esta forma Prebisch añade una conclusión demoledora de la realidad latinoamericana: el capitalismo periférico se basa fundamentalmente en la desigualdad más transgresora.

Con lo dicho en los párrafos preliminares, la existencia de mercados de trabajo no garantizaba el desarrollo de las economías latinoamericanas, pero tampoco es posible

negar que la inexistencia de mercados internos primigenios promovidos por una masa asalariada y con alguna posibilidad de sus elites de acumular excedentes, establecía mayores perspectivas de bienestar económico y social que en las economías donde prevalecían relaciones internas serviles y esclavistas. En las economías donde persistían la esclavitud y el servilismo al margen de las relaciones económicas se establecían relaciones sociales que convergían hacia la formación de castas, situación que complicaría aún más la formación de Estados nacionales con igualdad de oportunidades y que dejaría en consecuencia un pesado lastre de pobreza y marginación de una gran parte de sus poblaciones. Así es que es posible evidenciar que desde un inicio las bases económicas republicanas se habían sentado sobre estructuras cuasi-feudales de distinto matiz, las cuales habrían ya sido gestadas por las condiciones geográficas, de riqueza natural, de importantes poblaciones indígenas civilizadas, es decir, generadas por las dotaciones naturales de la localización geográfica de los países latinoamericanos.

A lo anterior se debe añadir que no todos los países presentaban los mismos tamaños de mercados. Se había destruido la unión colonial que hacía de América Latina española un interesante mercado interno potencial. Quizás en los mercados más pequeños que descansaban sobre masas de población no asalariada cabe de una forma más certera la reflexión de Gunder Frank (1976) y Stavenhagen (1973), al indicar que el capitalismo doméstico y la burguesía han promovido históricamente el subdesarrollo latinoamericano. Por todo lo expuesto, es ingenuo concluir que dentro del contexto del subdesarrollo de la periferia capitalista todas las economías latinoamericanas han partido en similares condiciones. Estas diferencias pueden ser contrastadas en el siguiente cuadro:

En el Cuadro 1 se hacen seis diferencias en función a los modos de producción generalmente prevalecientes hasta inicios de la revolución industrial y el consiguiente capitalismo que entra a la fase imperial en el último cuarto del siglo XIX. El primer grupo está constituido por los países que adolecen de las mayores contradicciones económicas y sociales precapitalistas, puesto que sus economías descansan sobre estamentos sociales serviles y de esclavos. No obstante, si bien es cierto que en todos estos países se ejercitaba una economía de subsistencia, es plausible excluir de este grupo a Perú y Bolivia, ya que estos países presentaban reminiscencias de la explotación y exportación de minerales -los cuales, sin embargo, al momento de sus respectivas independencias, se encontraban en franca decadencia.

Cuadro 1
Grados de modos de producción de los países latinoamericanos
al momento de sus respectivas independencias⁷



⁷ No se cita a Panamá porque hasta inicios de la construcción del canal de Panamá este país era una dependencia colombiana.

Elaboración propia en base a Cueva (1990), Halperin (2002), Cardoso y Faletto (1978) y Furtado (1976)

También es interesante notar que en las sociedades en las cuales se presentaban economías de subsistencia casi no existió resistencia realista. Esto evidencia a *grosso modo* la escasa relevancia geopolítica de estas regiones, tanto para su mantenimiento colonial como para ser utilizadas como plazas de reconquista de las otras colonias potencialmente más ricas. Lo anterior se ejemplifica con las resistencias coloniales en las repúblicas centroamericanas, caribeñas y el Paraguay. En los casos de Ecuador y Haití sí existieron fuertes resistencias metropolitanas, Ecuador por encontrarse entre los virreinos de Nueva Granada y de Perú, y Haití porque al momento de su independencia era el mayor productor de azúcar del mundo⁸.

⁸ El proceso de independencia y la organización económica en Haití siguiente es explicado por Suzy Castor, citado por Cueva (1990): "Después de la independencia, el Estado confiscó las propiedades pertenecientes al reino de Francia y a los colonos franceses. Así, de un 60 a un 90% de las tierras cultivadas pasaron a constituir propiedades estatales, hecho quizá único en América Latina. Sin embargo, empezaron a surgir nuevas estructuras que dieron a la cuestión agraria haitiana su característica propia. Los gobiernos adoptaron una política de constitución de grandes propiedades privadas a partir de tierras estatales. Grandes extensiones de tierra fueron distribuidas a los jefes militares de alto rango y a los principales funcionarios civiles negros y mulatos... Así se fue generando una aristocracia terrateniente -negra, mulata- constituida y consolidada gracias al poder político" (Cueva, 1990: 19-20). Una vez independiente, Haití casi no tuvo ninguna gravitación en la industria azucarera como lo había sido en la época colonial.

En todos los países del primer grupo se reforzaron las instituciones precapitalistas, las cuales pervivieron inclusive más allá de la mitad del siglo XX. Este desarrollo tiene una correspondencia lógica con la minimización económica de los países que se aislaban en la constitución de sus Estados. No había otra salida que expandir las zonas feudales asimilando a los campesinos libres y explotar aun más la fuerza de trabajo servil, dado el debilitamiento del comercio interamericano y la práctica extinción de los nexos con las metrópolis colonialistas; este vacío correspondía ser cubierto. Tanta fue la necesidad de la expansión feudal en las repúblicas centroamericanas, con excepción de Costa Rica, que volvieron a regir antiguas ordenanzas de Bilbao en la organización del comercio, tal como indica Cueva (1990) citando a Edelberto Torres-Rivas

En Honduras, por ejemplo, se establecieron como leyes de la república la Novísima recopilación y las Siete Partidas; y en Guatemala se volvió al régimen de estancos y alcabalas territoriales, se fortaleció el sistema de vinculaciones y manos muertas y especialmente negativa fue la inmovilidad social y económica de una estructura rural que dejó intactas las tierras ejidales y a las baldías las colocó bajo el régimen censitario que tiene orígenes en el derecho civil romano y medieval (Cueva, 1990: 19)

Otras connotaciones profundas y de gran interés es la composición de la masa servil de este grupo de países. Se distingue en ellos la población indígena, la cual se concentraba en grandes núcleos en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. La población indígena, sin embargo, parecía tener un rango superior apenas visible de la mano de obra esclava africana y china⁹; de todas maneras, la existencia de esta población sólo alimentaba las contradicciones que se iban formando, población que en un principio no existía políticamente en los países recientemente independizados. Se había consolidado entonces un sistema de castas; la democracia liberal establecida por los emancipadores sólo existía en las hojas de papel de sus respectivas constituciones.

El segundo caso, mal llamado grupo, corresponde a una sola colonia, la de Brasil, que por su extensión territorial, la inmensa potencialidad natural de sus recursos, merece un caso aparte. La singularidad de este país radica en la diferenciación de sus modos de producción regionalizados, esclavista en el nordeste (basado en economías

⁹ En el siglo XIX en el Perú las clases dominantes habían importado mano de obra china en calidad de esclavos para la explotación de los yacimientos de guano y salitre en las costas del Pacífico. Esta población fue denominada como *coolies*.

de plantación exportadora –caña de azúcar– y capitalista en el centro y sur –café, oro y diamantes en el centro y de explotación ganadera en el sur. Contradicción de las estructuras económicas simplificadas como el llamado “dualismo estructural”¹⁰ (Cardoso y Faletto, 1978). Siendo una de las más inconvenientes herencias de los modos de producción esclavistas en el Nordeste brasileño, una vez agotado el uso potencial de la mano de obra esclava: la reminiscencia calculada en millones de personas antes esclava y fuera de los circuitos dinámicos de la economía. En este sentido, Stavenhagen (1973) sostiene que el subdesarrollo de la zona antes mencionada posibilitó una estructura social arcaica debido al desarrollo económico anterior bajo las premisas del esclavismo.

El tercer grupo de países es el conformado por modos de producción donde se avizoran lentamente procesos de producción capitalistas, pero que no se superponen sobre los modos precapitalistas hasta principios del siglo XX. Consecuencia de aquel proceso son las guerras civiles e invasiones de potencias extranjeras que asolaron a estos países durante todo el siglo XIX. Los eslabones capitalistas pueden detectarse en las economías agrícolas de Antioquia en Colombia (Furtado, 1991) y en la producción de cacao y café en Venezuela (Halperín, 2002), así como también en la industria textil en Puebla, en México, donde, según rezan los manuscritos, se llegó a lograr competir con las telas inglesas (Halperin, 2002).

Como es el caso de Brasil, el cuarto grupo sólo consigna como caso único a Costa Rica, porque este país fue desde sus inicios un enclave mercantil que no descansaba primariamente en formas de explotación de mano de obra servil o esclava. No obstante, el único interés potencial que representaba esa pequeña economía era la explotación de café y sus reducidas vinculaciones con el mercado extranjero. En síntesis, Costa Rica no interesaba en demasía al capitalismo mundial, que por su parte no había alcanzado su madurez imperial, por sus escasas economías de escala.

El quinto grupo corresponde a los países del Río de la Plata. La costa atlántica española, al estar casi despoblada de elementos indígenas que podrían ser explotados, promovió desde sus inicios un mercado originario de una masa laboral asalariada. Las provincias

10 Por el contrario, precisamente es en el caso brasileño donde abiertamente discute Gunder Frank sobre la validez de la significación científico-social del “dualismo estructural”, puesto que, como se ha explicado antes, el dualismo estructural de la economía brasileña presentaba profundas relaciones económicas. Las relaciones económicas feudales subsidiaban a los sectores exportadores y a los centros de consumo de alrededor.

del norte de la Argentina, más allegadas a los modos de producción del Perú –por la mayor población indígena servil– fue lentamente anexada a los modos de tendencia capitalista. El triunfo del federalismo, promovido por la provincia más fuerte –Buenos Aires– y casualmente donde primaba una estructura claramente capitalista, posibilitó la normalización de las estructuras capitalistas nacionales a fines del siglo XIX.

Chile, por su parte representa la economía más coherente con su realidad política que se había formado en América Latina. En el Cuadro 6 se la ha tipificado como economía agroexportadora y minera, para distinguirla de las economías de plantación destinadas a los mercados europeos, ya que el mercado natural de los productos chilenos –trigo, harina, carne, aguardientes– eran Perú y Argentina. También en la región denominada norte chico existían explotaciones mineras de cobre de capitales chilenos, los mismos que habían sido generados por procesos de acumulación internos que correspondían al citado sector agroexportador.

De acuerdo a Gunder Frank (1977)¹¹, en el periodo inmediato a su independencia, Chile consiguió un crecimiento económico espectacular, basado en la minería, la agricultura y en su marina mercante, convirtiéndose en el país de América del Sur probablemente más fuerte, pese a ser una economía que no superaba los dos millones de habitantes y que tan sólo controlaba cerca de quinientos mil kilómetros cuadrados, cuyo centro económico era el valle central, con una extensión menor al 20% de su territorio en aquella época. Asimismo, añade Gunder Frank, citando a Pinto (1958): "en 1842-1843, el 6% de los bonos nacionales se cotizaban en la Bolsa de Londres a 93-105 puntos, mientras que los del Brasil no pasaron de 64, los de Argentina de 20. " (Gunder Frank, 1977: 65). A pesar de lo mencionado, es preciso reconocer que en este contexto tan auspicioso todavía persistía en sus campos una forma sutil de servidumbre, llamado inquilinato, pero que estaba bastante alejada de lo ocurrido en las otras regiones citadas y que virtualmente eliminada del espectro económico antes que finalice el siglo XIX.

Conforme a Pinto (1970), Chile consiguió lo que otras repúblicas latinoamericanas no alcanzaron una vez independientes: el dominio civil de la clase terrateniente del Estado no por medio de un líder uniformado, sino por medio de una representación

¹¹ Famoso ensayo cuando se empezaba a conocer la "teoría de la dependencia" sobre el subdesarrollo capitalista, escrito en Brasil en el año 1963.

civil. En otras palabras, en Chile el poder efectivo según la estructura económica vigente asumió su rol. Es precisamente este el punto de inflexión que ha hecho la diferencia, puesto que la mano de obra base que sostenía la clase terrateniente se encontraba asalariada y se hallaba prácticamente concentrada en el valle central y las zonas cercanas a éste. En cambio, otros países no consiguieron formalizar la tutela objetiva de los intereses económicos vigentes, muchas veces fraccionados por la disensión de sus burguesías o élites más cercanas a esta definición –proyectos de burguesías. Es así que el vacío de poder debía ser cubierto por caudillos y dictadores que, si bien respondían en el fondo a determinados intereses de los grandes propietarios, introducían un alto grado de inestabilidad política. De todos modos, en Chile se había formado una economía que promovía el mercado interno -de pequeñas dimensiones pero mercado interno al fin- en el que una burguesía terrateniente tenía un alcance nacional y, de acuerdo a sus intereses y de los extranjeros, comandaba los destinos políticos de su país. Este ensamble de factores hace que pueda caracterizarse como el único país capitalista de la América Latina del siglo XIX. El posterior estancamiento económico de Chile tiene una explicación concisa y clara desde el punto de vista del capitalismo periférico, debate que corresponde a otro análisis¹².

Pero en general, en gran parte de Latinoamérica, incluido Chile, se había producido una evacuación del excedente económico, el cual se producía con distintos grados de intensidad. De esta manera cabe la siguiente reflexión de Marx (1975) sobre la riqueza producida en América Latina y su transformación en capital. El excedente económico producido en estas áreas no llegaba a transformarse en capital en el interior de ellas, donde se extorsionaba al productor directo por vías esclavistas y serviles, sino que fluía hacia el exterior para convertirse, allí sí, en capital. En el marco de un ámbito relativista ante este tipo de afirmaciones, es necesario precisar que los grados de intensidad de la succión del excedente deben ser parametrizados por la capacidad de retención y la transformación del mismo en capital; el cual, dentro de diversas opciones, puede ser reproducible en la misma economía, claro está si existen las condiciones mínimas para tal efecto. Es decir, un mercado interno asalariado o que se encuentre en determinada proyección hacia él.

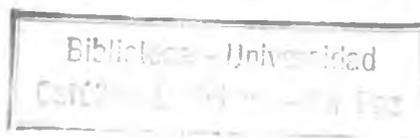
12. Conforme a Gunder Frank (1977), Chile, antes de pasar la mitad del siglo XIX, todavía estaba expuesta a un impacto exterior. En efecto, la depresión de 1857 y la posterior guerra del Pacífico hicieron retroceder la economía chilena. A pesar de que la guerra le brindó a Chile ricas tierras salitreras, el salitre demostró a largo plazo ser la ruina del desarrollo chileno. Unos años después de triunfar contra los ejércitos de Perú y Bolivia, infinitamente inferiores en recursos, las salitreras conquistadas se encontraban en manos de extranjeros.

Sin duda los modos de producción iniciales en Latinoamérica han tenido una repercusión hondamente profunda hasta nuestros días, ya que estructuralmente establecieron una estratificación económica-social que difícilmente podía ser resuelta en el mediano plazo. Prueba de ello son las convulsiones políticas, en muchos países resueltas por las armas, hasta finales del siglo XX. Los cambios económicos y sus evoluciones fueron disimiles: de economías de "enclave" con diversas gamas de interrelación con las economías locales pudieron dar paso a un sector productivo manufacturero de baja intensidad tecnológica y de esta etapa saltar a la producción de bienes de capital de razonable envergadura, claro está, donde las economías de escala posibilitaban tal salto, como fueron los casos de Argentina, México y Brasil.

En el siguiente cuadro es posible apreciar una aproximación de la relación histórica de los países latinoamericanos –ordenados en los grupos por modos de producción– con respecto a los niveles de desarrollo:

Cuadro 1
Desarrollo alcanzado de los países latinoamericanos

País	Índice de Desarrollo Humano (IDH) (2003)	PIB per cápita paridad de poder de compra (PPP) (US\$ 2003)	Población 2004 (Miles de habitantes)	Producto Interno Bruto (PIB) (Millones de US\$ 2004)
Haití	0,475	1.742	8,407	3.827
Guatemala	0,663	4.148	12,295	27.399
Honduras	0,667	2.665	7,048	7.371
Bolivia	0,687	2.587	9,009	8.713
Nicaragua	0,690	3.262	5,376	4.496
El Salvador	0,722	4.781	6,762	15.822
R. Dominicana	0,749	6.823	8,768	18.452
Paraguay	0,755	4.684	6,017	7.375
Ecuador	0,759	3.641	13,040	32.964
Perú	0,762	5.260	27,562	68.658
Venezuela	0,772	4.919	26,127	110.104
Colombia	0,785	6.702	44,915	96.783



País	Índice de Desarrollo Humano (IDH) (2003)	PIB per cápita paridad de poder de compra (PPP) (US\$ 2003)	Población 2004 (Miles de habitantes)	Producto Interno Bruto (PIB) (Millones de US\$ 2004)
Brasil	0,792	7.790	183,913	603.973
Panamá	0,804	6.854	3,175	14.204
México	0,814	9.168	102,050	683.486
Costa Rica	0,830	9.606	4,253	18.496
Uruguay	0,840	8.280	3,439	13.215
Chile	0,854	10.274	16,124	95.026
Argentina	0,863	12.106	38,372	153.015

Elaboración propia en base a Human Development Report 2005. Banco Mundial. Anuarios estadísticos CEPAL 2005 y UNCTAD 2006.

Como es posible apreciar en la Tabla 1, los países que habían tenido marcadas formas de modos de producciones precapitalistas, señaladas como Grupo 1, se encuentran delineados en el área menos oscura de la tabla, y los países de consolidación de formas de producción capitalistas, Grupos 5 y 6, se hallan en el área más oscura de la misma tabla. Lo relevante de este ordenamiento es que el mismo coincide ascendentemente con el Índice de Desarrollo Humano (IDH)¹³. Se toma en consideración este indicador porque puede condensar cuantitativamente la riqueza económica de un país desde un punto de vista estructural, puesto que se basa en el desarrollo humano alcanzado en una economía, el cual no puede ser producto del corto plazo y de los vaivenes coyunturales, sino que es producto de una construcción evolutiva social y económica. Así es que se evidencia que los valores más altos del IDH se encuentran circunscritos en los países que en un principio se habían desarrollado bajo parámetros de modos de producción capitalistas. Esta situación es un detonante multiplicativo de explicaciones, puesto que desde un principio genera condiciones básicas de acumulación de excedentes, lo que a

¹³ El IDH se realiza por el promedio simple de tres indicadores: Índice de esperanza de vida, índice educativo y el PIB per per, ajustado por una canasta de bienes y servicios predeterminada, con su capacidad de compra en la economía doméstica. Es decir, el IDH es el resultado del promedio de otros tres índices que agrupan a su vez todos los factores que pueden condicionar los promedios de vida-salud, alimentación, y de educación alcanzados -niveles primario, secundario, carreras técnicas, universitarias y doctorales-, y lo que efectivamente puede adquirirse en el marco comparativo internacional en una economía determinada.

su vez genera mayores condiciones para la integración en los mercados internacionales, no basados esencialmente en la explotación de los recursos naturales

Por tanto, el frágil desarrollo alcanzado en Latinoamérica se encuentra en función de no haber salvado sus propias contradicciones económicas y sociales, lo que explica la inmadurez de la mayoría de los países latinoamericanos, hasta el punto de que muchos de ellos recién consolidaron sus Estados nacionales a mediados del siglo XX. Asimismo, el componente indígena, donde existe aún, hace más controversial la ideología común de los pueblos en sus valores éticos y patrones de comportamiento, por detentar cosmovisiones ajenas a las occidentales, tal como ocurre en importantes poblaciones indígenas y/o indígenas en Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú. De acuerdo a Robinson (1966), la ideología es indispensable para la vida en sociedad, ya que ésta no puede existir sin sentimientos comunes sobre el método apropiado de llevar sus asuntos, y estos sentimientos están expresados en la ideología. Cuanto más variadas sean las posiciones ideológicas desmarcadas de un orden legítimo ante las leyes expresas, mayores serán los problemas sociales y políticos. Pero este sintético análisis no pretende desentrañar la problemática indígena en los países latinoamericanos, pues esto corresponde a un estudio más profundo, donde las herramientas de análisis sociológicas y antropológicas sean las indicadas. Basta con decir que parte importante del subdesarrollo de los países con importantes segmentos de población indígena se debe a las cuentas históricas no saldadas generadas por sistemas económicos impuestos.

Finalmente, es importante indicar que existen interesantes indicios para reconocer que existe una diferenciación económico-social más razonable de los países latinoamericanos, basada en el contraste de los modos de producción económicos iniciales, en un marco de subdesarrollo que afecta a todos los países en cuestión. De todas formas, este escueto punto de vista permite entender que no es una sorpresa el estado de situación actual de la región y de sus economías en particular, sino que es consecuencia de procesos económicos y sociales que se desarrollaron por generaciones, en los que se avizora que estas economías se insertaron con diversas velocidades y grados de intensidad a la dinámica capitalista. En suma, es posible argumentar que existe un mayor desarrollo y sustentabilidad económica instrumentalista en los escenarios de integración económica mundial en los países donde primariamente prevalecieron los modos de producción capitalistas. Riliqui eum dolesto od et, commolorem zzrit

REFERENCIAS

- Comisión para América Latina y el Caribe CEPAL - División de Estadística y de Proyecciones Económicas BADESTAT, *Información Estadística*, <http://www.cepal.org/badestat/>
- Banco Mundial, estadísticas on-line, <http://web.worldbank.org/>
- Cardoso, F. H. y Enzo Faletto. 1987. *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Siglo XXI editores, vigésimo primera edición.
- Cueva, Agustín. 1990. *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. Siglo XXI editores, treceava edición aumentada.
- Furtado, Celso. 1991. *La economía latinoamericana, formación histórica y problemas contemporáneos*. Siglo XXI editores, vigésima segunda edición.
- Gunder Frank, André. 1976. *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. Siglo veintiuno editores, tercera edición.
1977. *Sobre el subdesarrollo capitalista*. Editorial Anagrama.
- Halperin T. y otros. 2002. *Historia económica de América Latina, desde la independencia hasta nuestros días*. Editorial Critica.
- Human Development Report 2005.
- Laclau, E. 1973. "Feudalismo y capitalismo en América Latina". En: *Tres ensayos sobre América Latina*. Cuadernos Anagrama, Serie: Sociología y Antropología.
- Lukács, Georg. 1969. *Historia y conciencia de clase*. Ediciones Grijalbo.
- Marx, Karl. (1867) 1975, *El capital*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pinto A. 1970. "Desarrollo económico y relaciones sociales". En: *Chile hoy*. Centro de Estudios Socio-económicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Chile, primera edición.

Prebisch, R. 1981. *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*. Fondo de Cultura Económica, primera edición.

Robinson, J. 1966: *Filosofía económica*. Madrid: Editorial Gredos.

Stavenhagen, R. 1973. "Siete tesis equivocadas de América Latina". En: *Tres ensayos sobre América Latina*. Cuadernos Anagrama, Serie: Sociología y Antropología.

United Nations. 2005. Conference on Trade and Development, UNCTAD. World Investment Report.

Bolivia and the Dutch Disease: What are the risks and how to avoid them?

*François-Xavier de Mevius
and Iván Albarracín**

Resumen

Desde inicios del siglo XIX, la economía boliviana ha sido altamente dependiente de la producción de recursos naturales, y por tanto su economía ha sido muy vulnerable a los *shocks* externos. El documento analiza si el *boom* en el sector del gas ocurrido en los últimos años podría dar lugar a la “enfermedad holandesa” y describe las posibles políticas que podrían ser aplicadas en caso de evidenciarse la misma. Realizando un análisis de los principales indicadores macroeconómicos y explorando la evolución de los diferentes sectores económicos se encuentra evidencia de que Bolivia no estaría enfrentando una “enfermedad holandesa”, pero que es probable que Bolivia enfrente a futuro los síntomas de este fenómeno económico.

Abstract

Since the beginning of the 19th century, the Bolivian economy has always been highly dependant on its natural resource production, and therefore has always been quite vulnerable to external shocks. The paper analyse if the boom in the gas sector happened in the last years would be able to the “Dutch Disease” and describe the possible politics that would be applied of it is evidenced. Realizing an analysis of the main macroeconomics indexes and exploring the evolution of the differents economics sectors involved, evidence is found that Bolivia was not facing a full blown Dutch Disease but is probably that in the future will face the symptoms of the Dutch Disease

* François-Xavier de Mevius and Iván Albarracín are researchers of the IIESEC.

1. Introduction

Since the beginning of the 19th century, the Bolivian economy has always been highly dependant on its natural resource production, and therefore has always been quite vulnerable to external shocks. During the 80's and 90's, Bolivia was a large exporter of different minerals (mainly gold and tin), and since 2003 it has become a large gas exporter. It is easy to understand how a negative price shock, for example, can have a negative impact on such an exporting economy. To illustrate this, we can see how Bolivia has suffered from negative price shocks on tin and gas during the 80's: the main result was an approximate 10% cumulated GDP loss during the price shock.¹ But a country can also suffer from a positive international price shock for a natural resource that it is exporting. One of the negative consequences of a positive shock (for example a sharp price and volume increase) in the resource based export sector on the other exporting sectors of the economy is called the Dutch Disease.

Since 2003, gas production and prices in Bolivia have increased sharply, leading to a very positive trade balance, a high foreign currency inflow, a budgetary surplus and an increase in public and private aggregate demand. Those important currency inflows have put pressure on inflation, on the nominal exchange rate and finally on the real exchange rate. A real exchange rate appreciation would lead to a loss of competitiveness of non-resource exports (basically agriculture and manufacture goods), which would have a negative impact on the total export level and on the long-term growth rate.

The aim of this work is to study the evolution of the booming tradable sector (the natural gas sector) in Bolivia, and its effect on the main macroeconomic indicators and on the non-booming tradable sector (the agriculture and manufacture sector). We will also study the effect of the increase in national revenue on the construction sector, and the importance of the *Investment* or *Construction Boom* in Bolivia. We will analyze those changes between 1996 and 2006, and highlight the different risks of experiencing a full blown Dutch Disease.

After analyzing the effects of the boom, we will suggest some preventive policies to try to avoid the negative impact of the real exchange rate appreciation on the other exporting sectors.

1 See Morales (1999)

Section 2 presents the general theory about the Dutch Disease. Sections 3 to 6 explain the effects of the boom in the gas sector on the general economic variables, on the non-booming tradable sector and on the construction sector. We will explain the risks of contracting the Dutch Disease in section 7, and propose four preventive policies in section 8. Those policies are: the creation of a stabilization fund, the reimbursement of foreign debt, the direct distribution of the windfall to the households, and finally, keeping a budgetary surplus while increasing international reserves. We will then add some remarks on the work done and conclude this study.

2. General Theory of the Dutch Disease

The term “Dutch Disease” was used for the first time in *The Economist* in 1977, to explain the negative consequences of the gas discovery in the Netherlands in the late 60’s (and the high revenues generated by it) on their nominal and real exchange rate, and the following loss of competitiveness of their manufacture industry. Many economists have since then presented different models to try to explain this phenomenon, the starting model being the Corden and Neary (1982) one. In this section, we will summarize their model revised by Migara and De Silva (1994), to adapt it to a developing economy.

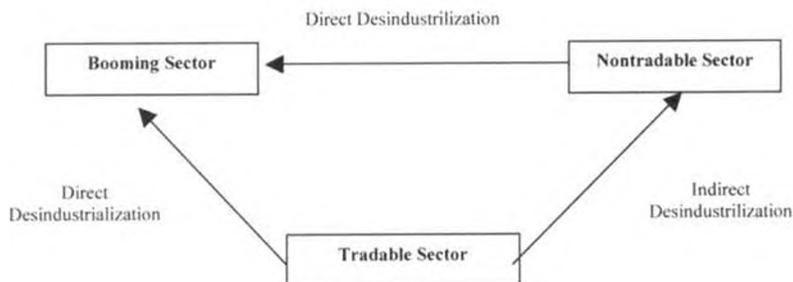
The model starts with a small open economy divided in two main sectors²: the tradable sector (with internationally traded goods) and the non-tradable sector (N) (represented by different kinds of services, the most common example being the haircut). The tradable sector is divided in two sub-groups: the booming sector (B) (example: oil, gas, mineral resources...) which will face a positive technological shock, and the non-booming tradable sector (T) (for example the manufacturing industry or the agriculture). The prices in the tradable sector (P_T) are fixed by global supply and demand, which means that if domestic demand is higher (lower) than domestic supply, the country will import (export) this particular good. In the non-tradable sector, the prices (P_N) are fixed by domestic demand and supply, so if the demand is higher (lower) than the supply, the price will rise (fall). The non-tradable good market always has to clear. The goods studied in this section are exclusively final consumption goods. The real exchange rate, q , is represented by P_N / P_T , so that an increase of this relationship leads to a real appreciation.

2 See Annex 1 for an illustration of the division of each sector.

We will not, in this section, study the implication of the positive technological shock (the boom³) on the monetary variables, keeping it to the changes in real terms. We will consider that the three goods use a combination of the two production factors labour and capital, and those two factors can move freely between the different sectors. Another assumption is that the real wages are perfectly flexible, the labour market always clears (there is no unemployment in this model).

The Dutch Disease, or the consequence of the boom on the economy, can be divided in two different effects: the *Resource Movement Effect* (RME) and the *Spending Effect* (SE).

Figure 1a: Consequences of the RME



Source: Migara and De Silva (1994)

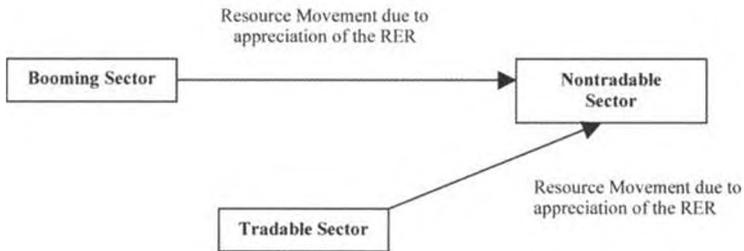
The Resource Movement Effect The boom (the technological shock) in the *B* sector will increase the marginal product of both factors (capital and labour), which in turn will increase their remuneration and the demand of this sector for both factors. Labour and capital will thus move from the *T* and *N* sector to the booming sector, leading to a *direct-deindustrialization*. Because factors have moved from the *N* and the *T* sector to the *B* sector, diminishing supply for an unchanged demand, we have an excess demand in both sectors. This excess demand will lead to increasing imports in the *T* sector, but to clear the non-tradable sector, P_N will have to rise, leading to a real exchange rate appreciation, and both production factors will move from the *T* to the *N* sector (because

3 The boom can also be a discovery of a huge amount of any natural resource, a very positive price shock in the natural resource that the country is exporting, an increase in foreign aid or foreign remittances...

of the higher remuneration offered), leading to an *indirect-deindustrialization*. Figure 1a summarizes those different effects.

The *Spending Effect*: the higher real income of the booming sector will increase aggregate demand in the economy. Higher demand for the non-booming tradable goods will lead to a higher level of imports. But the higher demand for non-tradable goods will lead to an excess demand that will have to be cleared by an increase in P_N (a real appreciation) and a new displacement of both factors from the B and T sector to the N sector, reinforcing the *indirect-deindustrialization* expressed in Figure 1a. All those movements are represented in Figure 1b.

Figure 1b: Consequences of the SE



Source: Migara and De Silva (1994)

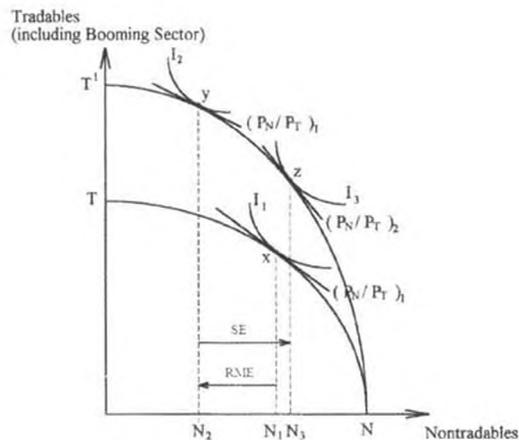
The RME and the SE are represented in Figure 2, where the vertical axis represents all tradable goods (sector B and T), and where the horizontal axis represents the non-tradable goods. We start with the pre-boom equilibrium in x , where the indifference curve I_1 is tangent to the production possibility frontier (T-N), with a real exchange rate of $(P_N/P_T)_1$. The boom (here represented by an increase in the factors productivity in the B sector) will displace the production possibility frontier asymmetrically (from T-N to T^1 -N), and the equilibrium moves from x to y . Because the RME displaced factors from the N and T sector to the B sector, production in the non-tradable sector diminishes from N_1 (level that clears the non-tradable market) to $N_2 < N_1$, putting pressure on the real exchange rate and leading to the *indirect-deindustrialization*.

The SE, derived from the increased aggregate demand in the economy, will lead to a displacement of both factors from sector *B* and *T* to *N*, and will put pressure on P_N , leading to a real appreciation, from $(P_N/P_T)_1$ to $(P_N/P_T)_2$. The post-boom equilibrium is point *z*, which represents the case where the spending effect is more important than the resource movement effect. The real exchange rate has appreciated, the non-tradable production has increased with $N_3 > N_1$, and the production of tradable goods has also increased (because of the production increase in the booming sector)

The important point to underline is that the RME drives production factors out of the non-booming tradable sector (because of an increase in the marginal productivity of both factors in the *B* sector), called *direct-deindustrialization*, and that the SE also drives factors out of the *T* sector (because of the real appreciation and the following loss of competitiveness), called *indirect-deindustrialization*. The effect on production in the *T* sector is unambiguous: it has to fall. The non-booming tradable sector suffers most from the consequences of the boom in the resource sector, leading to important production decreases and losses in the agriculture and/or the manufacturing sector.

The RME will in general be smaller than the SE, like the above mentioned case, for two main reasons.

Figure 2: Pre and Post-Boom Equilibrium



Source: Migara and De Silva (1994)

The first reason is that the model starts with a labour market in equilibrium, which means that if one sector increases its demand (and quantity) for labour, another sector will lose some workers. But if the economy has a certain number of unemployed, one sector can increase its quantity of workers without having to decrease labour in another sector

The second reason is that if the resource sector is an "enclave" type sector, using a very small workforce and having a very specific type of capital, a boom in this sector will not displace factors from the two other sectors. The gas and oil sectors are very often seen as "enclave" type sectors, and we will therefore see very little displacement in economies with a booming sector of that type. The *deindustrialization* will therefore mainly occur because of the real appreciation caused by the spending effect⁴.

We have used the word *deindustrialization* in this first part, because the very first models represented developed economies of the 70's, where agriculture was already playing a very small role in total production. But if agriculture is one of the main non-booming tradable sectors in the economy, like it is the case in many developing countries, we will have to look at the effect of the boom not only on the manufacture industry, but also on the production in the agricultural sector.

The figure represented in Annex 1 tells us that there are two main types of non-tradable goods in a developing economy: on the one hand we have the non-tradable consumption goods (and services), and on the other hand we have the non-tradable capital goods. The work of Morales (1995) tells us that the variation in consumption of goods and services doesn't take place directly after a positive shock: agents take time to modify their consumption habits. In countries where the boom is at its start, the effect on consumption goods and services will therefore be quite small⁵.

McMahon's work (1997) explains how, when a positive shock is considered as temporary, and when the economy has very little attractive investment possibilities (with a very underdeveloped and controlled domestic financial market, for example), a very large part of the windfall will be directly spent in construction. This theory, which is an extension of the Dutch Disease, is known as the *Construction* or

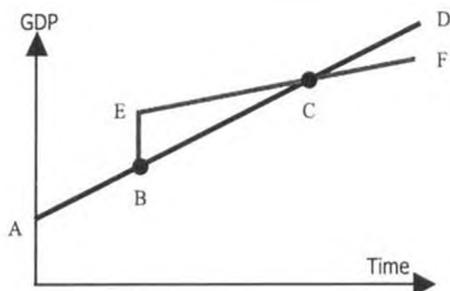
4 See Corden (1984)

5 See also Collier and Gunning (1999)

Investment Boom. This happens mainly when the state and/or departments of the country are the main beneficiaries of the windfall and try "to give a big push to the economy by investing in a large number of projects simultaneously" The result of such an *Investment Boom* is an increase in construction wages, and higher prices for all kinds of materials used in the construction sector. Because infrastructure (and construction in general) is considered as a non-tradable, this price increase will put further pressure on the real exchange rate. We will thus have to analyze the effect of the boom on the construction sector too.

The real appreciation, the Resource Movement Effect and the Spending Effect are considered a "disease" because of their medium and long term effect on economic growth. The boom in the natural resource extraction sector, caused by a large discovery or increase in prices, can usually be represented as follows:

Figure 3: Effect of the Boom on the GDP level and Growth Rate



Source: Gylafson (2001)

There is an important increase in the GDP at the moment of the boom, but this boom will affect the long term growth rate. Many extractive sectors have very low productivity growth, so their participation in the long-term growth rate is very small. The non-booming tradable sector, on the contrary, is very important for the long term growth in developing countries⁶, because of its high productivity growth.

⁶ It has been argued that some developed countries did not suffer from the negative effects on the non-booming tradable sector, because the non-tradable sector has a higher productivity growth than the non-booming tradable sector. So if there is a displacement of production factors from the non-booming tradable sector to the non-tradable sector, or just an increase in the production of the latter, the growth rate actually increases.

The manufacturing industry, for instance, is very important for growth because of the *learning by doing* effects, and also because of the backward and forward linkages of this particular sector. This industry is based on experience accumulation, and after a loss of it, years are needed before the industry can become competitive again. Agriculture can also constitute an important sector for growth if a large part of the population works in it, and if their products are exported on several international markets: this forces them to increase productivity to diminish costs and increase their competitiveness on the external markets. If the shock is temporary, the negative effects of the real appreciation and the RME on the non-booming tradable sector can be reversed. But if the boom lasts too long, the losses in the sector become irreversible, leading to a lower long term growth rate and a higher unemployment level.

In the following sections we will analyze the effect of the important increase in prices and in export volumes of Bolivian natural gas on the general economic indicators, and on the quantity of workers used and profits made in the different sectors of the economy (especially manufacturing and agriculture). Finally, we will look at its effect on the construction sector, to see if the *Construction Boom* theory is applicable to Bolivia.

3. The Booming Tradable Sector

The natural gas sector is definitely the booming tradable sector since 2003 in the Bolivian economy. Bolivia has the second largest reserves of natural gas in South America⁷, and its two major clients are Argentina and Brazil, the latter importing about 5 times more gas than the former. Tarija is the department producing the most important part of it (about 60% of total gas production in 2006), and about 90% of total production is exported, leaving 10% for domestic consumption. In 2006, natural gas represented about 40% of total exports, and about 7% of total GDP. The prices and volumes of exports have exploded since 2003, as shown in the next graphic.

This volume increase follows the 1994 "Capitalization Law", privatization campaign of the state-owned companies which enabled foreign companies to invest heavily in them, and the 1996 "New Hydrocarbons Law", forcing companies to invest heavily in

7 Figures based on 2006 proven reserves. This information has to be put in perspective: Venezuela's reserves, assessed to be the biggest in South America, are estimated to be 6 times as big as the Bolivian reserves, and Argentina, third reserve holder in South America, has nearly 80% of the Bolivian reserves.

new gas fields to escape a heavier taxation. The Production and prices have stabilized in the two first quarters of 2007 at their 2006 level, because of the decree of May 1 2006 where the government reversed the privatization program implemented in 1994, forcing foreign companies to revise their contracts with the "Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos" (YPFB)⁸ and to pay higher taxes on their production.

Because of that nationalization campaign, foreign investors have frozen all projected investments, which are now cruelly needed: the pipelines are functioning near maximum capacity, and Bolivia, without new investments (estimated at about one billion US dollars), will only be able to fulfill its contracts with both Argentina and Brazil until 2010.

Prices, however, are still expected to rise, because of the high prices in the oil market (the prices of gas follow, with a short lag, variations in oil prices), but also because the current prices are very much below the Henry Hub reference price⁹. Bolivia is now trying to modify its price with both Argentina and Brazil.

Graph 1: Volume and Prices of Natural Gas Exports (1994-2006)

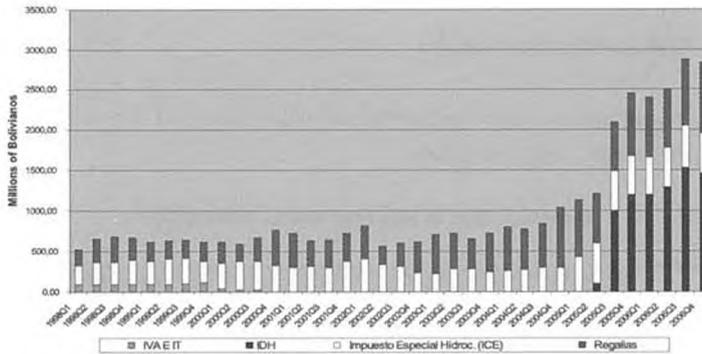


Source: Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, YPFB

8 The state energy owned company, supervising production and contracts
 9 Because of the nature of gas transport and production, there is no international price for gas. One of the most generally used reference, however, is the Henry Hub price, a United State's market based price.

The state is the major beneficiary of this huge increase in both prices and production. In the years 2000's, there has been significant domestic public opinion, which led in 2004 to different taxation reforms and finally to the nationalization decree in 2006. The taxation reforms increased taxes on production, and created the "Impuesto Directo Sobre Hidrocarburos", also known as the IDH, raising total taxation at about 50% of the production value. The 2006 nationalization decree has increased the total taxation to 82% of total production value, but it has apparently not yet been implemented in most of the extraction fields. We show here the evolution of total taxes¹⁰ on the hydrocarbon sector during the 1998-2006 periods.

Graph 2: Composition of taxes on Hydrocarbons



Source: Unidad de Programación Social, UPF

We can see how the total amount received by the central government¹¹ has increased dramatically since the instauration of the IDH. The total amount of taxes received by the state generated by the hydrocarbon sector¹² represented about 35% of government's total income in 2006.

This heavy extraction will, as we will study, have an important impact on the different economic indicators: the heavy inflow of dollars will create huge surpluses in the fiscal and trade balance, but it will also put pressure on the nominal and real exchange rates. It will

¹⁰ The explanation of the different taxes is in Annex 2.

¹¹ The exchange rate between the Boliviano and the US Dollar is represented in Graph 12.

¹² Bolivia also produces oil, but it only accounts for 16% of total exports and about 30% of total hydrocarbon production.

increase the national currency reserve, and it could lead to a heavy spending effect both will put pressure on the inflation rate. The following sections will analyze the effects of the boom on the general economic indicators, and on the non-booming tradable sector

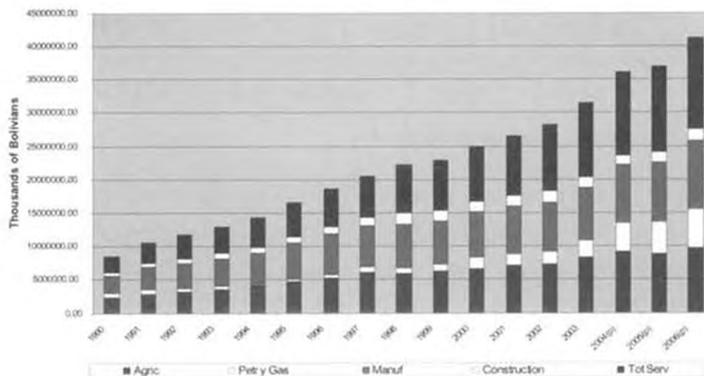
4. Economic overview of Bolivia between 1996 and 2006

This section will start with an overview of the Bolivian domestic indicators, such as the GDP and its composition, the labour market, and government's income and spending. We will then study the movements in the different external indicators of Bolivia, such as the current account, the capital account, the balance of payments, the trade balance, and finally the real exchange rate

a. Bolivian GDP and its composition

The first figure shown here represents the main sectors of the economy, and how they evolved between 1990 and 2006.

Graph 3: GDP in Nominal terms-1990-2006(P)



Source: Instituto Nacional de Estadística, INE

We can see the relative importance of manufacture and agriculture in the composition of GDP in real terms: the former is about 17% of real GDP, and the latter is about 15% (both keep a stable path during the studied period). Bolivia has known a relatively stable economic growth since 2004, of slightly over 4% a year. We have to

remind ourselves that the political instability during the 2002-2005 periods will have an important influence on different indicators. The oil and gas sector was about 7 % of total GDP in 2006 (in real and nominal terms).

b. The Labour market

When we look at the labour factor in the different sectors of the economy as a percent of total, we can see that the manufacturing and agricultural sectors maintain a stable part of the total (at about 16 % and 2 % respectively of the 2006 total), as does the gas and mineral sectors (employing nearly 1 % of total workforce in 2006), even though the natural gas sector has known a boom since 2003. This verifies our hypothesis about the extractive sector being an "enclave" type sector in the Bolivian economy: it employs a very small part of the total workforce (being very capital intensive), and so even though prices and volume increase sharply, employment doesn't follow. The capital doesn't move between the two other sectors and the booming sector, because the latter uses a very specific type of capital. Because the sector experiencing the boom is an "enclave" type sector, the Resource Movement Effect, on a national level, is not visible¹³

The national unemployment rate has stabilized around 5 % of total active population in 2006. The urban rate of unemployment is at about 8 %, but is partly offset by the relatively low unemployment in the rural area, which is at about 1 %. Those results ought to be taken very carefully because of the importance of informal labour in Bolivia, which represents about 63 % of the labour market¹⁴.

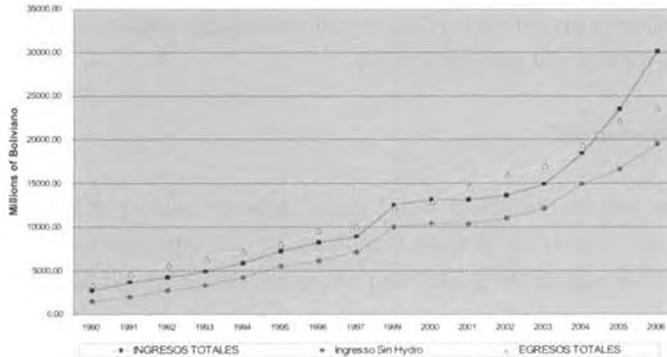
c. Government Income and Spending

Income has increased drastically since 2003, mainly because of taxation of the oil and gas sector, representing about 40 % of current income in 2006. Spending by the government has also increased sharply in the studied period, following the increase in income. The government high spending on construction and personal services has had an effect on inflation during the period (as we will show in section 4.e) The following figure shows the total annual income, the total annual income minus the oil and gas sector taxes, and the total annual spending (pensions are not shown in the figure)

¹³ See Annex 3 for the labour per sector in the Capital cities.

¹⁴ See IBCE et al. (2006)

Graph 4: Central Government income and spending (1990-2006)

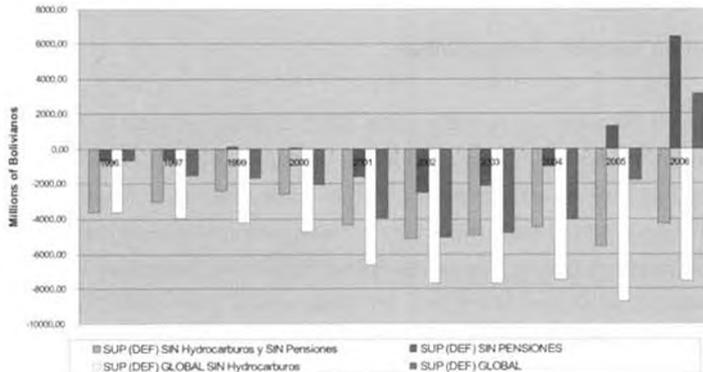


Source: Unidad de Programación Fiscal, UPF

The next figure shows the different fiscal balances, with and without the hydrocarbons, and with and without pensions

It is important to note, as evidenced in the preceding figure, that Bolivia lacks a sound fiscal policy (it has a structural fiscal deficit), and is highly dependant on hydrocarbon revenues, being the only reason why the country has a budgetary surplus in 2006 (representing 4, 6 % of GDP) In fact, if we deduct the tax income on oil and gas in the current revenues, we see that Bolivia would be in deficit, even in 2006

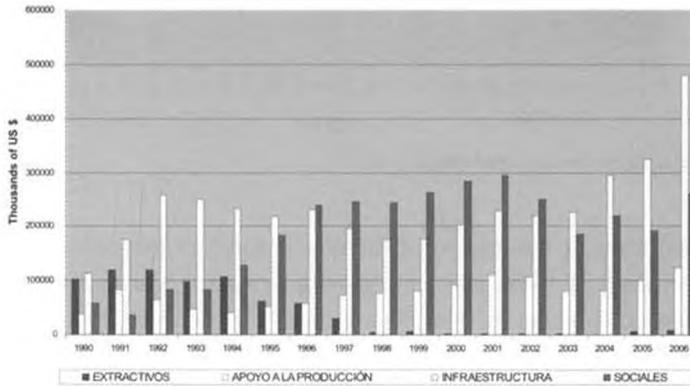
Graph 5: Fiscal Balance (1996-2006)



Source: Unidad de Programación Fiscal, UPF

The next graph shows public investments¹⁵ per sector of the economy. The total amount of investments has nearly doubled between 2003 and 2006. This important increase can be explained by the explosion of revenue from hydrocarbon taxes¹⁶. This increase in revenues has mainly benefited investments in infrastructure, which has had an impact on labour and prices in the sector.

Graph 6: Public Investment per Sector (1990-2006)



Source: Ministerio de Hacienda - Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

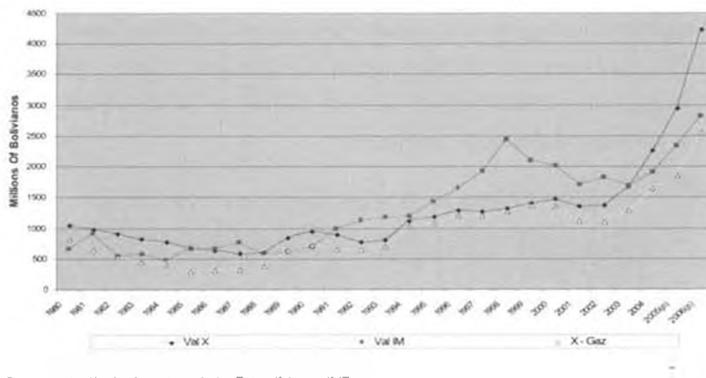
d. Current and Capital Account, and the Balance of Payments

The current account has been mainly negative between 1980 and 2002, and this because of a structurally negative trade balance. The situation has improved since 2003, because of a very positive international economic situation. High increase in commodity prices has helped exporters of those goods. Because of the remaining importance of minerals and metals (zinc, gold, platinum, tin...) and the high demand of some developing countries (China, India...), prices and exported quantities of minerals has risen sharply. Evidently, the positive trade balance is also explained by the increase in gas price and export volume, as shown in Graph 7, representing exports, exports minus hydrocarbons, and imports. We see that without gas exports, the trade balance would have remained negative during the whole period.

15 Since 1996, it also takes into account the investments made by the municipalities.

16 In particular, we can see the important increase in the «Impuestos Directos a los Hidrocarburos» (IDH) and the Regalías

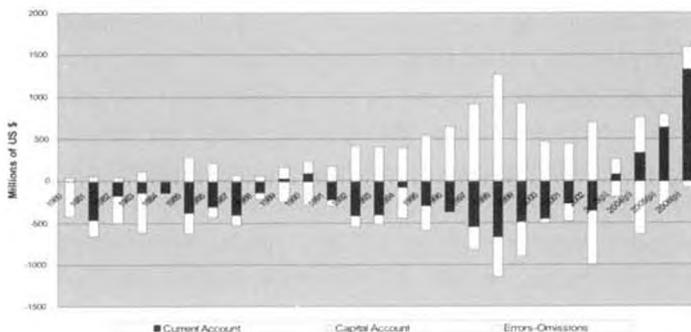
Graph 7: Total Exports- Exports ex Gas, and Imports (1990-2006 (p))



Source: Instituto Nacional de Estadística, INE

The capital account has become extremely positive in the period following the “Capitalization Law” of 1994, when the government started privatizing some of the larger state-owned companies. Then political instability between 2002 and 2005 has frightened most foreign investors. In 2006, the “New Law on Hydrocarbons” has forced the oil and gas companies to sign very restrictive contracts. This again has kept foreign investors out of Bolivia. The balance of payments has benefited from a very positive international situation, and from the carrying out of some important foreign backed projects during the studied period¹⁷.

Graph 8: Balance of Payments (1980-2006)



Source: Instituto Nacional de Estadística, INE

¹⁷ We must underline the fact that the “error and omission” has been quite large during this period, due to corruption, bad operation writings, and the importance of illegal Cocaine exports.

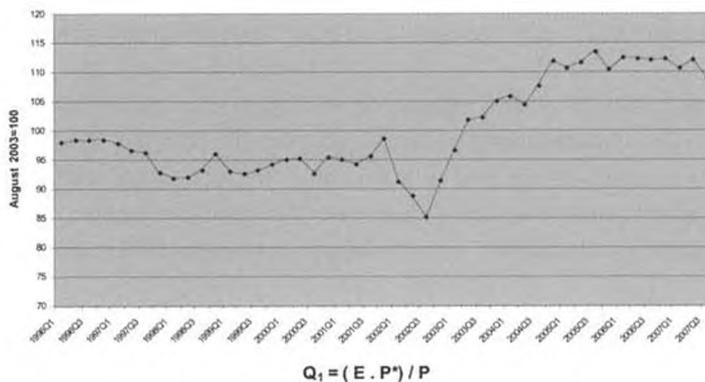
The very positive balance of payments has led to an increase in the currency stock at the Central Bank of Bolivia. The increase in 2006 has been the largest in the history of the country (the increase in reserves in 2006 is 16 times more important than in 2003), and is mainly due to an increase in the currency inflow (with a slightly increasing currency outflow). Having such a level of international reserves has two important disadvantages: the first one is that there is no interest rate paid (or a very small one) on those currencies, so that keeping them in the Central Bank has a high opportunity cost. The second important disadvantage is that it puts high pressure on inflation.

e. The Real Exchange Rate

Despite the very positive trade balance and the huge currency inflows since 2003, the real exchange rate depreciated between 2002 and 2006, and this because of different factors:

First, price and export volume increases in the gas sector have only started in 2003, and have been only a small part of government revenue until 2005 (when the IDH was created). Second, the capital outflows between 2003 and 2005 due to the political instability have had a negative effect on the real exchange rate. Third, the gas sector is very capital intensive, so the factor reallocation effect (or RME) is quite small, with a limited effect on the part of the real exchange rate appreciation due to wage increases (explained by the Resource Movement Effect).

**Graph 9: Quarterly Real Multilateral Exchange Rate index
(Increase = Depreciation). (1996Q1-2007Q4 (p))**



Source: Central Bank of Bolivia, BCB

Because the appreciation only started end 2006 and has been quite limited until now, the effect of it on the manufacturing sector and agriculture will be very small

There is however some high pressure on the real exchange rate. There are two other definitions used to represent the real exchange rate

$$Q_2 = P_T / P_{NT} \text{ and } Q_3 = 1 / TOT^{18}$$

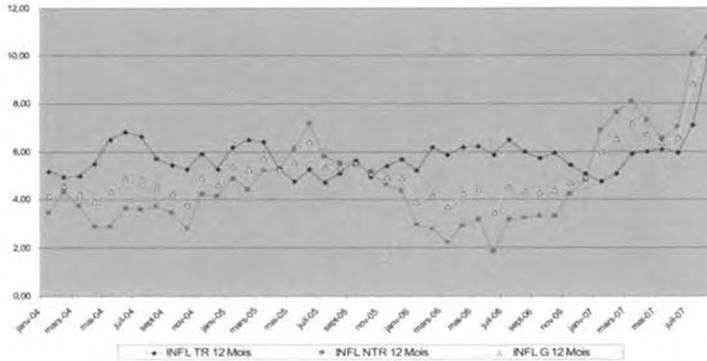
Q_2 represents the relation between inflation of the tradable and the non tradable goods. General inflation has been at a relatively low level between 1999 and 2002, and then it has slightly increased between 2002 and 2006, keeping a level between 2% and 4%. Since the third quarter of 2006 inflation has increased sharply, and this for various reasons:

- On the supply side: natural disasters (like El Niño) have diminished supply in agricultural goods, an increase in the price of wheat (considered as imported inflation) which has an important impact on the CPI, and general alimentary inflation
- On the demand side a huge increase in the government spending (because of the increase in the incomes due to taxes on gas production), and the increase of private consumption (because of the increase in wages and the increase in remittances coming from abroad).
- The balance of payment surplus and the following increase in the currency reserves, which have put pressure on the inflation level.
- The pressure due to the managed float system (that will be explained further)

Graph 10 shows us general inflation on a rolling twelve month basis, but also the tradable and non-tradable inflation rates. We may see that the ratio P_T / P_{NT} has changed its tendency at the end of 2006, when the non-tradable inflation rate has become more important than the tradable one. This testifies the effect of the boom on the non-tradable goods, and the decrease of Q_2 shows the pressures on Q_1

18 A decrease in Q_2 and Q_3 both represent a real appreciation. The definition of the terms of trades used here is the relation of the export prices on the import prices, meaning that an increase (decrease) of the prices of exports, with unchanged import prices, leads to an improvement (deterioration) of the terms of trade.

Graph 10: Inflation, Tradable and Non-Tradable Inflation, rolling 12 months (Jan 04-Jul 07)



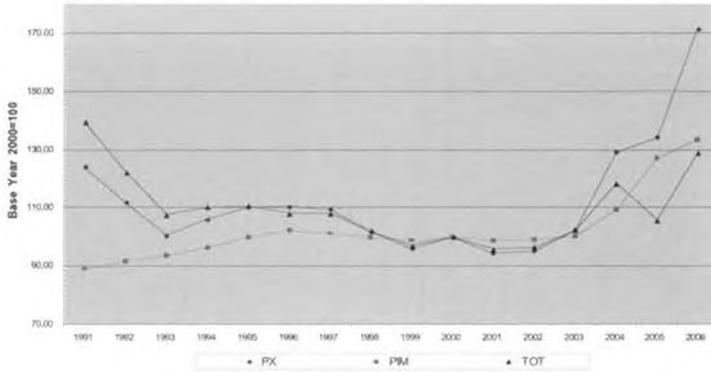
Source: Instituto Nacional de Estadística, INE

The increase in aggregate demand, resulting from an increase in national revenues (due to a positive international situation and the high incomes in the gas sector), has had an important impact on the national inflation level. This spending effect has changed the relationship between the prices of the tradable and the non-tradable sector, as explained in the Dutch Disease theory, but has also had an impact on the construction sector, as we will see in section 6.

When we look at the terms of trade (TOT) in the Q_3 definition, they have increased in the 2005-2006 period, because of the increase in the export prices: the increase in the gas and mineral prices has had a great incidence on the increase in the terms of trade. An increase in the terms of trade leads to a real appreciation, putting pressure on Q_1

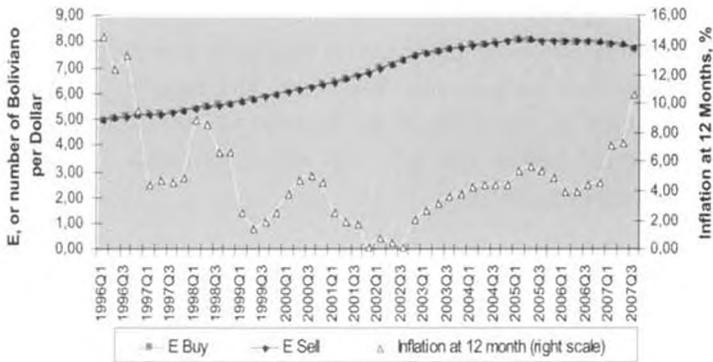
The Central Bank of Bolivia has tried to keep the real exchange rate at a stable rate, with an inflation constraint. The real exchange rate has this stable path due to an exchange rate policy, but it triggers pressure on the inflation, as we can see in the following graph

Graph 11: Terms of Trade (TOT), Export and Import Price Index (1991-2006)



Source: Central Bank of Bolivia, BCB

Graph 12: Nominal Exchange Rate and twelve month inflation (1886-2007)



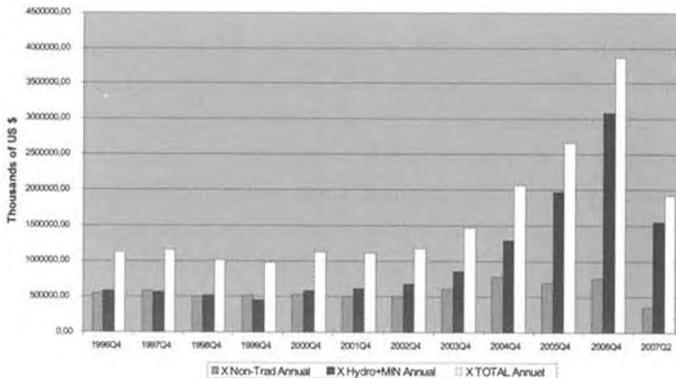
Source: Central Bank of Bolivia, BCB

The Central Bank has used nominal devaluation to counter a real appreciation, so to keep their competitiveness on international markets. But as the Q_1 definition shows us, if you have great pressures on the real exchange rate, that the foreign price level is fixed and that the nominal exchange rate is used to diminish the real appreciation pressures, the only variable susceptible to move is inflation.

5. The Non-booming Tradable Sector

The export sector can be divided in three main sub-sectors: minerals and hydrocarbons, which we will call traditional exports, and the non-traditional exports (mainly agricultural and manufactured products)¹⁹. The traditional export sub-sector represents about 80% of total exports (62% of the traditional exports are hydrocarbons), and in the 20% of non-traditional exports, about 40% of it is related to soya (in the form of seeds, flour, oil, cakes...)²⁰. The remaining 60% are divided into various different manufactured and agricultural products, with the most important ones being clothing, jewels and coffee. The next graphic represents the traditional and non-traditional exports per year²¹, and we can see how the non-traditional exports only represent a very small part of total exports.

Graph 13: Total, Traditional and Non-traditional Exports (1996-2007)



Source: Central Bank of Bolivia, BCB

The non-booming tradable sector in the Bolivian case is divided between the manufacturing and the agricultural sector. Those two sectors have benefited from various positive international features, which enabled them to have positive growth rates during the studied period²², as shown in the next graph.

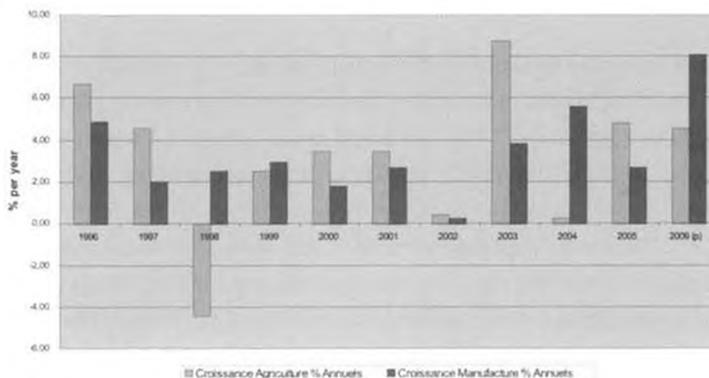
¹⁹ We have put the minerals and hydrocarbons together and named them the "traditional exports".

²⁰ This information is from 2007's first half.

²¹ For 2007, we only take the two first quarters.

²² The negative growth rate for agriculture in 1998 is due to the "El Niño", which hit Bolivia with a great violence in 1997-1998, destroying the major part of the cultures.

Graph 14: Agriculture and Manufacturing Annual Growth Rate (1996-2006)



Source: Instituto Nacional de Estadística, INE

The explanation for this steady increase can be summarized in three points. First, Bolivia was able to increase its exports to the Andean community thanks to the AFTA²³ agreements (decreasing exports to Mercosur countries, and increasing exports only moderately with the US despite the ATPDEA agreements²⁴). Second, Bolivia's low labour costs²⁵ have partly offset its high transport costs, which enabled the country to increase its competitiveness in the region. Finally, exports of both sectors have benefited from the depreciating real exchange rate during the 2003-2006 periods.

Those positive features are not expected to last, first because the new agreements signed with the US and with other Mercosur countries will increase competition in the region, second because the developing Asian countries have wages that are still far below the Bolivian one's (the country will lose part of its comparative advantage as commercial exchanges with those countries increase), and finally, the pressures on the real exchange rate (expressed earlier) will diminish the competitiveness of both sectors.

23 The Andean Free Trade Agreement (1993), between Bolivia, Colombia, Venezuela and Ecuador, permits all goods that are originated in the Andean community to circulate Duty-Free

24 Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (2002), it enables Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru to exchange various goods duty-free. The US Most Favoured Nations (MFN), part of the ATPDEA, enables Bolivia to export to the US at a preferential rate.

25 Bolivia had the lowest monthly minimum wages in South America in 2005 (according to the sector ministry website, www.oeru.tk): on the other hand, it had the highest transport costs of the region, freight ratios being at about 20% of import value (according to UNCTAD (2005) and Urcullo Cossio (2005))

As we have underlined in the theoretical part, the manufacturing and agricultural sector are very important in explaining GDP's annual growth rate. The Bolivian economy had a 4.63% growth in 2006: 0.66% is explained by agriculture (in its large sense), 1.38% is explained by the manufacturing sector, and only 0.33% is explained by the hydrocarbon sector²⁶. The loss in the manufacture or agriculture sector would therefore have an important negative impact on the annual growth rate.

6. The Construction Sector

We have seen that the increase in governments' incomes has a positive effect on its investment in infrastructure (see point 4.c). We must remember that part of the national income is redistributed to the different Bolivian departments, so we have to study the investment behavior of the four most highly investing departments: Cochabamba, La Paz, Santa Cruz and Tarija, as represented in Graph 15²⁷.

The interesting point is that Tarija was one of the smallest investors in 1995, but because of the wealth brought by gas extraction, it has been the biggest investor in 2006. Its investments have nearly tripled between 2003 and 2006, and have mainly been done in construction: investment in "transport" (mainly route construction) has been multiplied by 2.8 during this period. In fact, all the four departments represented here have used the increase in their income to invest in infrastructure, and more precisely in route construction.

The national wage level in construction has more than doubled in nominal terms, and has increased by about 50% in real terms between 1996 and 2006, being the second largest increase in national wages²⁸. The demand for concrete has increased about 35% in La Paz and Cochabamba, and by a staggering 150% in Tarija. Inflation in construction materials is expected to be particularly high in 2007 for all departments (especially in Tarija), but unfortunately these data are not available for all departments.

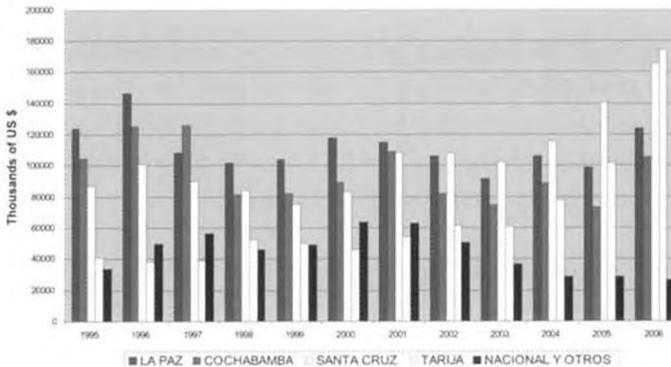
26 The GDP growth without the extractive sector is at about 4.58%, according to Bolivian Central Bank. See "Evaluación de la Economía Boliviana", Memoria 2006.

27 Including investments planned by the Municipals.

28 National wages have increased 72% in nominal terms, and 15% in real terms during the same period. Increases in food production are the highest, 141% and 61% in nominal and real terms respectively.

The *Investment Boom* can be seen on a national scale when we look at investments made by the State in infrastructure and construction in general, but it is also to be seen in the high growth rate in construction wages (in real and nominal term) This *Investment Boom* is expected to be very important in the departments as well, especially in Tarija (because of its gas production it receives a large part of the taxes paid), but unfortunately the data concerning this particular department are very limited

Graph 15: Investment in the four major Regional Departments of Bolivia (1995-2006)



Source: Ministerio de Hacienda - Ministerio de Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

7. What are the Risks of Bolivia Contracting the Dutch Disease?

The main conclusion of the study of the different economic indicators is that we can not talk about a full blown Dutch Disease in the Bolivian economy today. It is true that we have underlined the importance of the spending effect on the national inflation rate, on the wage rate in the construction sector and on the heavy investment in infrastructure. We also underlined the irrelevance of the Resource Movement Effect on a national level, because of the “enclave” type booming sector. But the theory about the Dutch Disease tells us that it is the real appreciation, caused mainly by the Spending Effect, which will harm the non-booming tradable sector by diminishing its competitiveness. Until now, because of the real depreciation explained above, neither the manufacturing nor the agricultural sector have suffered from the boom in the gas sector (we have actually seen a steady growth in both sectors). In this section we will summarize the pressures on the real exchange rate and the effect of the real appreciation on the non-booming

tradable sector, as well as the economic instability caused by the important inflows of foreign currencies

a. The real exchange rate appreciation

As we have explained earlier, there are some very important pressures on the real exchange rate. If we look at the Q_1 definition ($(E \cdot P^*)/P$) of the real exchange rate, we can divide the pressures as follows

First, the nominal exchange rate, E : there is a high pressure on the nominal exchange rate, because of the huge inflow of foreign currencies due to the increase in the value of exported resources (mainly gas and minerals). The absolute level of the nominal exchange rate is not in line with the inflow of currencies in 2006: we should have seen a very significant appreciation. But it didn't take place, because the depreciation of the nominal exchange rate was necessary to keep the real exchange rate unchanged. A nominal appreciation would lead to a real appreciation

Second, the national price level, P : the whole impact of the pressure on E is reflected on prices and on the inflation rate. The increasing inflow of currencies that are exchanged for the Bolivian currency (without leading to a nominal appreciation) exacerbates the existing pressure on the inflation rate (the demand and supply side effects, as explained above). A high inflation will lead to a real appreciation²⁹.

Finally, the pressure on the relation of tradable on non-tradable prices (as shown in the Q_2 definition) and the terms of trade improvement (as shown in the Q_3 definition) leads to other pressures on the general definition of the real exchange rate. If the spending effect continues to increase in the coming years, due to a higher level of national income, it will increase pressure on Q_2 and finally on the real exchange rate. The pressures on the terms of trade and on Q_3 , however, depend on global market conditions.

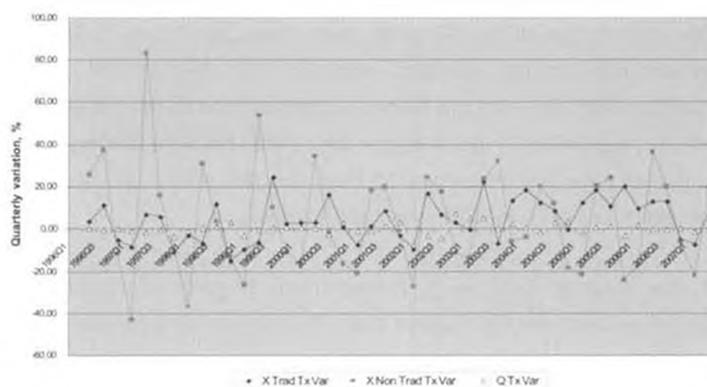
This real exchange rate appreciation would lead to a loss of competitiveness, and the non-traditional export sector would definitely be the most affected by it. The next

²⁹ It is argued that a sensible economic policy would be to let the nominal exchange rate appreciate more quickly to be able to reduce the effect on inflation, and smoothen the total effect on the real exchange rate.

graph shows the variation rate of the traditional and non-traditional exports, and the real exchange rate variation rate.

We see that the non-traditional export sector is much more reactive to a variation in the real exchange rate than the traditional export sector. Because the manufacturing and the agricultural sector explain about 45 % of national GDP growth, a loss in both sectors would have huge consequences on Bolivia's long-term growth rate

Graph 16: Quarterly variation rate of Traditional and Non-traditional Exports, and of the Real Exchange Rate (Q₁) (1996Q1-2007Q3)



Source: Central Bank of Bolivia, BCB

b. The vulnerability of the economy to external shocks

With the heavy export of gas and the significant income generated by it, Bolivia has increased its vulnerability towards an external shock. As mentioned in the preceding sections, gas exports represent about 40 % of total exports, and the income generated by hydrocarbons represent about 35 % of governments' total income (both figures correspond to the 2006 situation)

We have shown the composition of exports by dividing them in traditional and non-traditional exports, and have analyzed how both groups were **dependant** on very few goods (hydrocarbons for the traditional, and soya for the non-traditional exports). But

we can also look at the situation differently. In fact, 83%³⁰ of total exports are derived from seven products, six of them being natural resources (gold, zinc, platinum, tin, oil and gas), and only one being renewable (soya). Because it depends so heavily on very few goods, Bolivia is highly exposed to negative price shocks, and the following consequences on the domestic production level and on national income.

The other problem with depending on revenues from resources like gas is the high volatility of prices characterizing the oil (and derivatives) market. Because of the importance of the income received, the state will have incentives to start huge infrastructure projects, planning an unchanged level of income for the following period. But if there is a price shock in the next period, income will be lower than expected, but with the obligation of continuing the projects under construction, the state will have to borrow money outside the country using the future revenues as a guarantee for the loans.

In such a situation, the government will be unable to fix a credible budget line, it will have surplus years of the fiscal balance succeed deficit years, and will quite certainly increase the general debt level. If the spending stays as volatile as the income, than when prices are relatively high, the spending effect will exacerbate the pressures on the real exchange rate and the following effect on the non-booming tradable sector. When the prices fall, the country will have incentives to borrow, increasing its vulnerability to external shocks. The volatility in the spending also induces the volatility of the real exchange rate, which makes trade more uncertain.

If we look at the Bolivian situation, the fiscal balance surplus in 2006 was at about 4.6% of the national GDP. This surplus, the largest of the period we have studied, is mainly due to the increase in the income received by the taxes on the hydrocarbon sector. Nevertheless, the Central Bank of Bolivia is planning a surplus of only 2.3% of national GDP for 2007, because of increasing investments made by the departments and an increase in the personal services.

8. What are the Policies to be Implemented to avoid the Disease?

We have studied the various risks that Bolivia is facing in experiencing a full-blown Dutch Disease. This section will propose different policies that could be implemented to

30 Banco Central de Bolivia, *Evolución de la Economía Boliviana*, Memoria (2006)

be able to prevent the Disease. We do think that in such a situation, it is much easier to prevent it than to wait until the damage has been done to start reacting. We will focus on four different policies, the creation of a stabilization fund, using the extra revenue to reimburse foreign debt, distributing the extra revenue directly to the households, and finally, keeping a budgetary surplus while increasing national reserves (two policies to be implemented together).

c. The macroeconomic stabilization fund

As we have seen, when the Bolivian government received this huge inflow of foreign currencies, it has started to increase its spending tremendously. This has had an effect on the general inflation rate, on the Q_2 real exchange rate (P_T/P_{NT}), on the construction sector and has put general pressure on the real exchange rate. Bolivia has implemented a sort of pro-cyclical economic policy, with all the negative consequences such a policy can have. If the prices of gas, or the volume exported, come to decrease, many projects will be put to a stop and Bolivia will have to start borrowing to pay for the current spending.

The main objective of the stabilization fund is to ensure that the volatility of commodity prices doesn't have an impact on the government's revenues (and the following consequences on its spending)³¹. A stabilization fund usually works as follows: if the price of gas goes above a certain price, x (fixed by the fund itself), the fund receives the difference between the current market price and the fixed price from the budget. The fund then uses those currencies to invest in international financial markets, generally in low risk bonds and equities³². The fund also receives the interests paid on those investments. When the price of gas is below a certain level, say y , the fund transfers the difference between the fixed price and the current price to the budget, to pay for the possible deficit³³.

31 We will analyse a stabilisation fund only related to the gas income. It is also possible to create a fund that would receive currencies from the mineral market as well, to diminish volatility on both markets (hydrocarbons and minerals). This idea has been expressed in Morales et al. (1992) and Morales (1995).

32 The composition between equity and bonds varies; but bonds are usually rated AAA or Aaa by one of the three most important rating agencies, to contain the risk. The funds usually invest a majority of the windfall in bonds. The remaining part is invested in low risk equity (with a high liquidity, in large stable companies).

33 For a complete model, see Morales et al. (1992).

For such a fund to work efficiently, it has to be totally independent from the government. It has to have some very clear rules of functioning; the people in charge of the fund must be responsible, non-corrupted, and independent from any other governmental institution. The institutions in charge must have an efficient governance system, and must be reliable to all. Everything that happens in the fund must be of public knowledge; the fund has to inform the population of who is in charge, the exact quantity of currencies received and invested, and what is transferred to the government following which precise rule. The Ministry of Finance is typically the "owner" of the fund, and the Central Bank is usually the "manager" of the fund: the roles and the responsibilities of both parties have to be clearly defined.

If the fund is efficiently managed, and if its revenues are well used, it can have a very positive impact on the economy³⁴

First of all, a decrease in volatility of the governments' income will enable it to plan its budget more accurately, and this stability will enable departments to also plan their budget without having to anticipate any change in the received incomes.

Second, it will stop those pro-cyclical policies, increasing investments in the good periods, and the sudden stops in investments when the prices are low again. The smoothing of the income permits a certain smoothing of the growth rate: by keeping part of the revenues when the prices are high, it avoids the overheating in the good period, and by using those resources when the prices are low, it stimulates the economy when it is likely to experience a slow-down.

Finally, by keeping a part of the income in the good periods, it diminishes the pressure on inflation and diminishes the volatility of the real exchange rate; the excessive currencies received are directly invested on international markets, lowering the pressure on the nominal exchange rate. The fact of investing those currencies on foreign markets rather than on national markets, keeps the economy from overheating and from experiencing high inflation rates.

There are also some problems that can arise when a country starts a fund of this type. The first problem is rather technical, and concerns the price fixation and the volatility.

³⁴ See Ahrend (2006), Ibarra (2006), Skancke (2006), Morales (1995).

of natural gas prices. We have said that the fund fixes the x and y price to know when to save and when to give out. For instance, if x is set at a too low level in comparison with the international prices, the fund will always save without ever giving away. This excessive saving has a high opportunity cost and could lead to a popular discontent. If y is too high, we are in the strange situation where the fund is forced to borrow money to counter the fiscal deficits, what the fund was actually supposed to avoid³⁵

The other problem appears if gas prices follow a random walk, which makes planning much more difficult, and exposes the fund to high risks. One way to avoid this problem is for the fund to buy "put" options for a certain amount of the gas quantity they treat, with y as the execution price. If the price remains higher than y , then the fund only loses the amount invested in the "put" options, but doesn't need to pay anything out. If the price is lower than y , the fund uses the options to sell the gas at the y price, again avoiding the pay out. This strategy can also be used at the very beginning of the fund, to be able to save an amount important enough to work efficiently³⁶

The second problem concerns the governance and independence of this fund. If the fund is able to save huge amounts of currencies and invests well, the government could have some high incentives to start changing the pay out rules³⁷, or force the fund to use the money more often, especially when the international conditions are positive, annihilating the positive effects of the fund. When you have a country with a high poverty rate and a very low level of GDP *per capita* (in dollars as in PPP), it is very difficult to explain why the country keeps millions of dollars in an account and refuses to use it, "for the populations' good". The other risk is a high corruption level among the people responsible for the funds transactions.

The final problem that faces the fund is that the creation in itself does not avoid an irresponsible governments spending strategy: the fund stabilizes income, but has no impact on the spending³⁸. In fact, when the fund is accumulating currencies because of a high price, the government could decide to start borrowing, using the high savings level of the fund as a guarantee for the reimbursement of the contracted loan.

35 See Davis et al. (2001)

36 Idea proposed by Morales (1995)

37 See Faria (1997); Ahrend (2006)

38 See Davis et al. (2001); Skancke (2006); Ministry of Planning and Finance, Timor Leste (2004)

The closest example of a stabilization fund that has had very positive consequences on the economy is the Chilean “Fondo de Estabilización Económica y Social”³⁹. Chile has a large reserve of copper, and the price has increased a lot after 2000, which is why the government has decided to create this fund to receive the excessive currencies. The idea is similar to the one expressed earlier. The government plans a surplus of about 1% of GDP, if the prices are high, the surplus is higher than 1%, and the difference is invested by the fund in international markets. When prices are low, the fund pays out to reach the required budgetary surplus. Since its creation in 2006, the fund has accumulated about 6000 million US\$⁴⁰, it has been able to stabilize the budget, it has limited the pressure on inflation and has reduced the real and nominal exchange rate appreciation.

d. Reimburse foreign debt

Reimbursing foreign debt is another way to directly use the foreign currencies outside the country. Using the currencies directly avoids the pressure on the nominal exchange rate (and the following effects on the real exchange rate), and using them outside the country keeps the economy from overheating and lowers the pressure on the national inflation rate.

One advantage of this system is that it keeps the economy from overheating without the need for creating a fund. Because of the high risk of corruption, the high incentive to use the fund badly and the difficulty of having a strong public support to freeze high quantities of money in such a fund, when the GDP *per capita* is the lowest in South America, reimbursing foreign debt is a good alternative. It creates a sort of “inter-generational equity” system, where a country doesn’t leave the future generations pay for a debt they never contracted. It is also a way to be sure that the extra revenues are used in an intelligent and clear way (the level of public debt is public information, as is the level of income received by the state thanks to the hydrocarbon sector), making corruption more difficult.

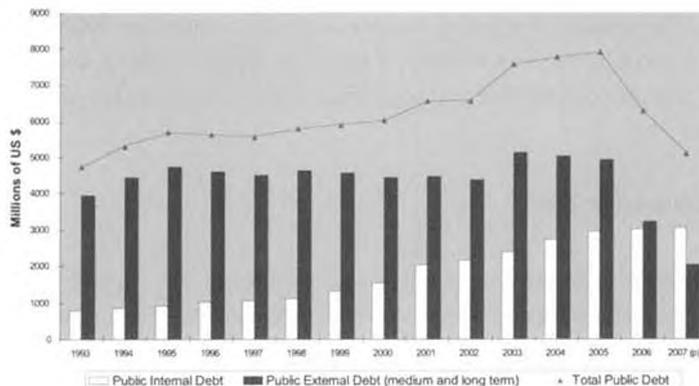
The other advantage of paying back foreign debt is that having a low level of external debt (the public and the private level of external debt) reduces external vulnerability; it

39 See Ahrend (2006), Larsen (2006)

40 Source – The Wall Street Journal, May 15 2007

will decrease the risk of a currency crisis and the negative effects of it on the economy⁴¹. The advantage of having the major part of public debt in national currency, is that the debt service will rise when the commodity prices are high (when the government is able to pay out), and will fall when the prices are low (and when the government is less willing or able to pay out)

Graph 17: Bolivian Public debt Evolution (1993-2007(p))



Source: Ministerio de Hacienda - Viceministerio del Tesoro y Crédito Público

Bolivia is part of the “High Indebted Poor Countries”, which has enabled it to receive various debts relieves which had to be used in various social programs. The following figure shows the level of public external and internal debt, and the total debt level.

The reason of this fall in the external debt isn't due to debt repayment, but follows debt relieves from the IMF and the WB, with the “Multilateral Debt Relief Initiative” (MDRI)⁴². Bolivia now has a public internal debt that is higher than the external one for the first time in its history, which is a very positive indicator. The early debt repayment would also allow the government to reduce its future liabilities, and thus enable it to either increase the spending or diminish taxation in the following periods⁴³.

41 See Ahrend (2006)

42 See Banco Central de Bolivia (2006) . CEDIA (2007)

43 See Ahrend (2006)

e. Direct distribution of the revenue to the households

The main assumption made in this section is that the private agents (the households) are at least as good as the State in facing external shocks, but could actually do much better. To illustrate this new argument, we will present two different works: the first is from Sala-i-Martin and Subramanian (2003), and the second is from Collier and Gunning (1999).

The work from Sala-i-Martin and Subramanian studies the negative consequences of the important windfalls (due to oil extraction) on the Nigerian economy, on its national GDP growth rate, and on the corruption level. They conclude that the windfall, mainly received by the government, has been completely wasted in unproductive projects, and has had a negative influence on the countries' growth rate and on the quality of institutions. The number of poor people and the inequalities among revenues has increased, the rent-seeking behavior has increased, and the windfall has exposed the country to the volatility of international prices and to external shocks.

The main reason explaining those very negative consequences of the windfall on the economy is to be found in the way the government perceives the windfall. Those extra revenues are seen as a huge quantity of very "easy money", a manna received without having to do anything, and this point of view doesn't give any incentive to the government to use it properly. This has led to huge wastes, to corruption and to rent-seeking among the government officials, with the following negative consequences on the quality of institutions and long term growth

The solution put forward by the authors is to distribute the windfall directly to the private agents (with some conditions, specified in the study), with the main idea that the result on the economy could easily be better. It would change the way the manna is perceived in the economy: it would result in changing the economy, making it more like a "non-resource" economy. The state could plan budget without taking into account the manna, and could increase the national taxes on the households to secure their income. The hypothesis backing their viewpoint is that a government is much less inclined to misuse the money received via a sound tax system than to waste the "easy money" received via direct taxes on the oil production.

There are evidently some difficulties in implementing such a system in a country how to decide who will receive part of the manna, the possibility of corruption and money embezzlement among the agents doing the distribution, and the impact of households receiving such a high amount of money on the economy. The authors have calculated that the national distribution would give about 425 US\$ per household (in PPP terms) in the first step, which is about 43% of total GDP, and way above the one dollar a day poverty line. The consequences of it could be an explosion of aggregate demand, and high pressure on the national inflation level and on the nominal and real exchange rate. But they use the conclusions of the work presented hereafter to explain why this last situation is quite unlikely to happen.

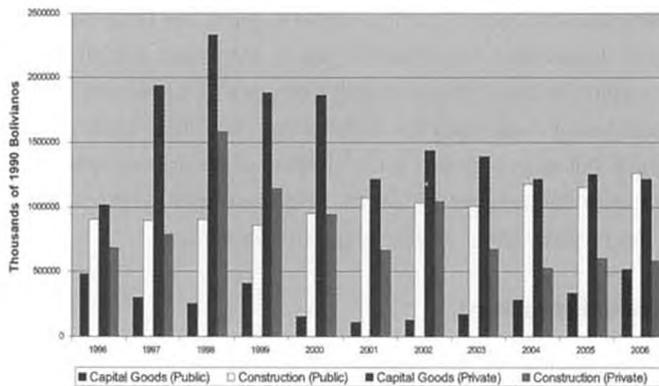
The study made by Collier and Gunning (1999) investigated different countries that experienced important windfalls due to natural resource extraction. They wanted to see if the response to a sudden windfall was different when the manna was mainly received by the public or by the private sector. They studied the saving behavior of both sectors after a sudden windfall, and we will only present the main conclusions: Concerning the public sector, they have observed that "there is a hazard that the government will completely fail to save the windfall", but for most of the countries they have studied, the government managed to have a satisfactory savings rate. Concerning the private sector, the study concludes that the "private agents respond in a cautious and far-sighted way to shocks", as long as information isn't distorted. Their general conclusions on the saving levels is that no matter who receives the windfall, the saving level is quite high in the majority of the cases.

Sala-i-Martin and Subramanian (2003) use this general conclusion to support their theory of distributing the windfall directly to the households. In fact, if the saving rate is high for both public and private sector, then the windfall should be distributed to the households directly because the return on investment is usually much higher in the private than in the public sector. Giving the windfall to the households forces the government to have sound fiscal policies, it isolates the country of most of the rent-seeking behavior, it doesn't affect the quality of the institutions, and finally, it has a positive effect on the growth rate because of the high returns on investment achieved by the private sector.

Those conclusions are well adapted to the Bolivian case, as we can see in the following graph, representing the gross fixed capital formation (divided into construction and capital goods) for the public and private sector

We see how most of the income of the government is used in construction, with typically a low rate of return, rather than in capital goods investment that have a much higher rate of return. The private sector, on the contrary, invests mainly in relatively high return capital goods rather than in relatively low return construction. Transferring a greater part of the windfall directly to the private sector would therefore have a very positive consequence on the long-term growth rate.

Graph 17: Gross Public and Private Fixed Capital Formation (1996-2006)



Source: Instituto Nacional de Estadística, INE

But that transfer could also help to diminish the negative consequences of the very positive trade balance on the inflation rate, and on the nominal and real exchange rate. The government has high incentives to invest the windfall in national projects, because it needs public support, and this is why they have a large marginal propensity of investing in national construction and capital goods. But the private agents make investments that are much more import intensive, because they do not have that "moral obligation" of investing nationally. If the government transfers a greater part of the windfall to the private agents, they will use those currencies directly to import capital goods, diminishing the risk of domestic inflation and the pressures on the real and nominal exchange rate.

f. The structural budgetary surplus and the increase in national reserves

Those are two policies that the government should impose itself to create a stable budgetary situation. As we have seen, the fiscal balance is in surplus only because of revenues from the hydrocarbon sector, which means that the government is highly dependent on the gas prices to keep the budget in balance, and highly exposed to an external negative shock. Bolivia should be able to have a fiscal balance in equilibrium, or with a structural 1-2% of national GDP surplus, without integrating the totality of the gas revenues. The fiscal balance should be analyzed as if Bolivia was a "non-resource" country, which means changing the fiscal policies to be able to have a surplus even without counting gas revenues⁴⁴.

Having a structural budgetary surplus would stabilize the fiscal balance, and enable the central government and the departments to plan their budget more accurately. But once the surplus is fixed, the excessive amounts of currencies should be kept in reserves, without being exchanged for national currency. This solution is similar to the creation of a fund, but does not require the creation of any type of institution. It is a sort of discipline imposed by the government to help stabilizing the fiscal balance, with the positive effect on the long term growth rate.

8. Further considerations

In this work we have explained the general theory of the Dutch Disease, and how the real appreciation could have a negative impact on the non-booming tradable sector, and how the loss in this sector could harm long-term growth. Many works have studied the link between the resource extraction and long-term growth, and the general conclusion of those works is that the Dutch Disease often explains only a small part of the decrease in the long-term growth rate. Gylafson (2001), for example, studies the effect of the windfall on different resource exporting countries, after noticing that those countries have lower growth rates than countries who don't experience such large windfalls (the natural resource curse theory). The aim of his work is to see what happens in the economy when the share of natural capital in national wealth increases. The conclusions are that this increase has a negative effect on the national level of education, on

⁴⁴ An example could be widening the tax base, for example, to diminish the risks of relying mainly on one type of income.

domestic investments, on foreign direct investments, and on the non-booming tradable exports (the Dutch Disease effect). It also increases the rent-seeking behavior and the general level of corruption⁴⁵.

The author then concludes that the windfall has a general negative effect on growth, and this is due to all the negative consequences of the natural capital on the other economic variables. The importance of the Dutch Disease could in some ways be less important than the natural resource curse on the general growth level.

We have studied the Resource Movement Effect and the Spending Effect on a national level, but this could minimize their importance. Because of the large part of the windfall received by the different departments, these effects are also to be studied in those departments to see if they are more visible than at a national level. In particular, it would have been interesting to see if, in Tarija, workers have moved from one sector to another, or if the effect on Q_2 (P_T/P_{NT}) is more important in this particular department. Unfortunately, those data are not available for the studied period.

One point we haven't talked about is the inequalities in revenues and the high level of poverty, and how the windfall can have an effect on both. Andersen (2007) used a Computable General Equilibrium (CGE) model to see what the effect would be of the windfall on some key macroeconomic variables. They divided the study in a high price and a low price scenario. The conclusion is that, from the governments' point of view, the windfall is a blessing: it increases the national GDP level, creates large surpluses in the trade and the fiscal balances, and enables the government to increase its investments and spending. But the study also shows how the windfall will harm the poorest segment of the population, represented by the rural small-holders and urban informal workers. The general conclusion is that if the government doesn't change the way they use this extra revenue, the windfall will not only increase inequality among the population (the increase in real wages is higher for the richer part of the population), but will also increase poverty (the poorest segment will experience absolute reduction of their real wage level)

Finally, the way money is distributed from the central government to the different departments could give a high incentive to the latter ones to spend this windfall as fast as

45 The negative effects of the windfall on rent-seeking, corruption, and the quality of national institutions is called the «natural resource curse». See Gylfason *et al.* (1997); Haussman and Rigodón (2002); McMahon (1997)

possible. This would lead to a very heavy spending effect in the departments, increasing pressure on the real exchange rate. Ahmad and Singh (2003) have studied the Nigerian distribution system after the windfall caused by oil exports, and have concluded that the system increases inequalities between the departments and exacerbates the effect of price volatility on the departments' budget and spending, when prices increase (fall), income increases (falls) and spending increases (falls). The main conclusion is that the departments that are not mainly dependant on the oil revenues have more stable budgets, and are protected against price volatility and its effects on departmental spending.

9. Conclusions

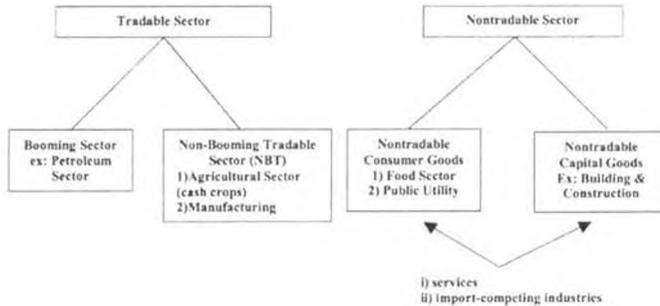
In this work we have studied the effect of a high increase in currency inflows (due to gas exports) on different macroeconomic indicators. We have analyzed the different balances and explain the influence of gas in each of them. When we studied the labour market, we have concluded that on a national level we didn't see the Resource Movement Effect, verifying the "enclave" hypothesis explained in the general theory. The governmental and departmental spending has increased dramatically since 2003, due to the importance of the windfall; we highlighted the pressure of such a spending effect on the inflation rate and on the real exchange rate.

We also explained why the real appreciation that was expected to follow such an inflow didn't occur, and how the real depreciation explained how well the non-booming tradable sector was doing. The analysis of the construction sector showed the importance of the *Investment Boom* in Bolivia. We concluded that Bolivia was not facing a full blown Dutch Disease mainly because the real exchange rate had been depreciating (rather than appreciating) in the last few years.

In the second part we underlined the different risks Bolivia was facing: the pressure on the real exchange rate, and the high reliance on very volatile inflows. We suggested four different preventive policies to help Bolivia stabilize its revenues, and lower the pressure on the real exchange rate, creation of a stabilization fund, the reimbursement of foreign debt, the direct distribution of the windfall to the households, and the creation of a structural fiscal surplus accompanied by an increase in the national currency reserves. For each policy we showed the advantages and disadvantages, and the way those policies would help mitigate current risks.

Bolivia is in a situation where it is likely to face the premises of the effects of the Dutch Disease in the coming years. Countries have usually reacted well after the non-booming tradable sector had started suffering from the real appreciation, at a moment where the damage became nearly irreversible. It is a challenge for the Bolivian government to understand the magnitude of the risks, to take the right political decisions, and to react before it is too late.

Appendix 1



Source: Migara and De Silva (1994)

Appendix 2

The IDH is the “Impuesto Directo a los Hidrocarburos” it taxes 32% of the production’s value on every gas and oil field in Bolivia. It was created by the law n°3058 on May 17 2005. The distribution of the IDH to each department is as follows:

	First Stage	Second Stage	Third Stage	Fourth Stage
IDH's Transfers / S.D. 20223 reformed by S.D. 281421	12.50% to producing departments according to its own production	Tarija Santa Cruz Chuquisaca Cochabamba	34.48%	Municipalities (by population)
		Pando 6.25% Beni 6.25% La Paz 6.25% Oruro 6.25% Potosí 6.25%	8.62%	Universities
	31.25% non-producing departments based on region equity		56.90%	Prefecturas
		Indigenous and Campesinos Fund 5%		
		Compensatory Fund for Municipalities and Universities 5%	La Paz 46.19% Santa Cruz 36.02% Cochabamba 17.79%	80% Municipalities (by population)
	56.25% Nation's Treasury	National Development Fund 5%		20% Universities
		Army Police	Annual Budget	

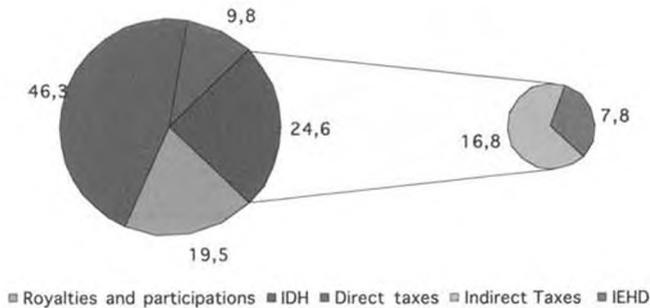
Source: Velasquez-Donaldson (2007)

The Regalias are all the participations and royalties paid by the different hydrocarbon producing companies. This tax takes 18% of the production of the oil and gas fields, and the revenue generated by it is distributed to the different departments, mainly to finance social projects.

Until May 1, 2006, the Regalias and the IDH were the two only taxes on production, which represented 50% of total production. The decree n° 28701 created a new transitory 32% tax, which would be received by the YPFB, increasing total taxes on production to 82%.

The "Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados" (IEHD) is a special tax that the government receives per metrical unity of consumed oil and other derivatives. This tax was created by supreme decree n° 24055 in December 2000

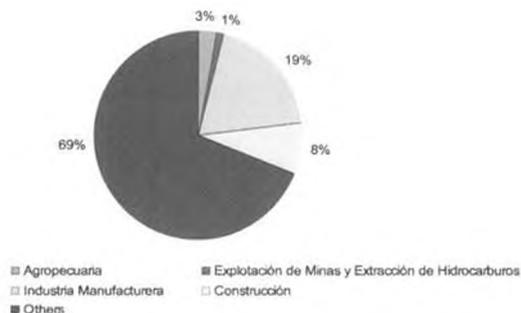
The next figure shows the hydrocarbon revenue structure for year 2006 in percentagem:



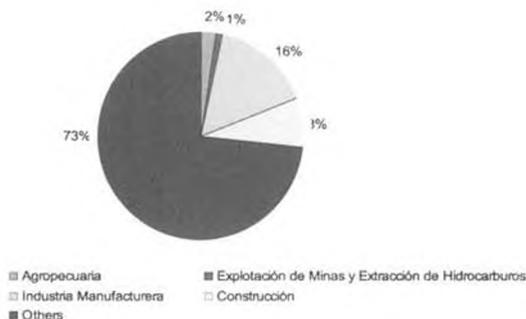
Source: Velasquez-Donaldson (2007)

Appendix 3

Work per sector in Capital Cities (1996)



Work per sector in Capital Cities (2006)



The only sectors that have increased sharply in the studied period are the “transport sector” and the “financial and company services” sector. All other sectors either stayed at the same level, or decreased. The unemployment in the cities (the urban unemployment rate) between 1996 and 2006 has more than doubled, from 5.8% to about 8%.

REFERENCES

- Ahmad, E. and Singh, R. January 2003. "Political economy of oil-revenue sharing in a developing country: Illustrations from Nigeria". Washington: IMF Working Paper WP/03/16.
- Ahrend, R. February 2006. "How to Sustain Growth in a Resource Based Economy? The Main Concepts and their Application to the Russian Case". Economics Department Working Papers. OECD, No. 478.
- Andersen, L.E. 2007. "How best to use the extraordinary natural gas revenues in Bolivia? Results from a Computable General Equilibrium Model". La Paz: Fundación Milenio, Documentos de Trabajo.
- Banco Central de Bolivia. 2007. "Bolivia. Memorias Anuales del Banco Central (2006)". La Paz: Banco Central de Bolivia.
- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). September 2007. "Boletín de Seguimiento a Políticas Públicas", Segunda Época, Año IV, N° 8.
- Collier, P. and J.W. Gunning. 1999. "Trade Shocks: Theory and Evidence". En P. Collier, J.W. Gunning y Asociados, *Trade Shocks in Developing Countries*, New York: Oxford University Press. pp. 1-63.
- Corden, W.M. and J.P. Neary. 1982. "Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy". *The Economic Journal*, Vol. 92, N° 368, pp 825-848.
- Corden, W.M. 1984. "Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation". *Oxford Economic Papers*, New Series, Vol. 36, N° 3, pp 359-380.
- Davis, J., R. Ossowski, J. Daniel and S. Barnett. December 2001. "Les Fonds Pétroliers: Des Problèmes Sous Couvert de Solutions?". *Finances & Développement*.
- Faria, Hugo J. May 3 1997. "Falacias y mitos". In : *El Universal*.
- GuiaSenior. May 15 2007. "Chile y la enfermedad holandesa". *The Wall Street Journal*. <http://blog.guiasenior.com/archives/2007/05/chile-y-la-enfermedad-holandesa.html>

- Gylfason, T. 2001 "Natural resources, education, and economic development". *European Economic Review*. Vol.45 pp.847-859.
- Gylfason, T., T. Herbertsson and G. Zoega. 1997. "A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic Growth". Discussion Paper N° 1668.
- Hausmann, R. and R. Rigobón. December, 2002. "An alternative interpretation of the resource curse: Theory and policy Implications". NBER Working Paper 9424.
- Ibarra, C. March 31 2006. "Fondo de estabilización macroeconómica evita disminución de la inversión social". Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
[http://www.minci.gov.ve/reportajes/2/5731/fondo de estabilizacion.html](http://www.minci.gov.ve/reportajes/2/5731/fondo%20de%20estabilizacion.html)
- IBCE, CANEB, INE and UDAPE. April 2006. *Empleo exportador en Bolivia*.
- International Monetary Fund. 2007. "Bolivia, Selected Issues". IMF Country Report No. 07/249. Washington, DC: IMF.
- Larsen, E. R. July 2006. "Escaping the Resource Curse and the Dutch Disease? When and Why Norway Caught Up with and Forged Ahead of Its Neighbours". *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 65, N° 3.
- McMahon, G. October 21, 1997. "The Natural Resource Curse: Myth or Reality?". *Economic Development Institute.*, World Bank, Washington, D.C.
- Migara, K. and O. De Silva. 1994. "The Political Economy of Windfalls: The Dutch Disease- Theory and Evidence". Center in Political Economy, Washington University, St. Louis, MO.
- Ministry of Planning and Finance of Timor-Leste. October, 2004. "Establishing a Petroleum Fund for Timor-Leste". Public Consultation Discussion Paper.
- Morales, J. A., J. Espejo and G. Chávez. 1992. "Shocks externos transitorios y políticas de estabilización". In E. Engel and P. Meller (compiladores), *Shocks externos y mecanismos de estabilización*. Santiago: CEIPLAN y BID. pp. 185-230.

- Morales, J. A. and J. Espejo. 1995. "Efectos macroeconómicos de los shocks de precios de exportación". In: A. Pasco-Font (ed). *La administración de los ingresos por exportación mineras en Bolivia, Chile y Perú*. Lima: GRADE.
- Morales, J. A. 1999. "Bolivia's Tin and Natural Gas Crises of 1985-1989" In Collier, P. And Gunning, J.W. (compiladores) *Trade Shocks in Developing Countries*. Oxford: *Oxford University Press*.
- Sala-i-Martin, X. and A. Subramanian, June, 2003. "Addressing the Natural resource curse: An illustration from Nigeria". NBER Working Paper, 9804.
- Skanke, M. October 2006. "Workshop on Petroleum Revenue Management". Norwegian Ministry of Finance.
- UNCTAD. November, 2005. "Developments in Latin America and Caribbean Trade and Maritime Transport". *Review of Maritime Transport*, UNCTAD/RMT/2005.
- Urcullo Cossio, G., K. Capra Seoane and A. Lazo Suárez. January, 2005. "Estructura del sector transportes en Bolivia". Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
- Velasquez-Donaldson, C. 2007. "Analysis of the Hydrocarbon Sector in Bolivia: How are the Gas and Oil Revenues Distributed?". Institute for Advanced Development Studies, Development Research Working Paper Series, No. 6/2007

El derecho de los pueblos indígenas a resistir al derecho-manejo del agua en el norte de Chile

*Isabel María Madaleno**

Resumen

Agua es fuente de vida y se valora aun más cuando falta. El extremo norte de Chile suele ser marcado por paisajes de extrema aridez, con ausencia casi absoluta de precipitaciones y temperaturas extremas. El artículo busca determinar en qué medida la acción del hombre ha contribuido para dañar aun más vastas áreas del extremo norte chileno a lo largo del tiempo, dando mayor énfasis al estudio de las normativas de manejo del agua recientes, fundamentales a la gestión ambiental de región tan vulnerable, a fin de contribuir en la búsqueda de soluciones que aprovechen a la discusión mundial sobre regulación de recursos hídricos.

Abstract

Water is the source of life and one values it most when it's in short supply. Scarce rainfall and high temperatures produce the domineering dry extreme northern Chilean landscapes. The paper seeks to assess human-induced desertification over the study area, through times, whereas examining recent water management legislation and jurisprudence in Chile. The paper proposes a comprehensive understanding of highly vulnerable study-cases sample researched, aimed at adding solutions that might benefit worldwide water management regulations.

* Doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca, España.

1. Localización geográfica y metodología

El extremo norte de Chile comprende una faja localizada en el borde occidental del continente sudamericano, que se extiende desde Visviri (4.070 metros), al interior de Arica, en la frontera con el Perú, y llega hasta el río Loa, conformando la unidad administrativa llamada Primera Región o Tarapacá. Suele ser en Chile el territorio de los indios aymara, legítimos herederos de la cultura de Tiwanaku (1 500 A C a 1 200 D.C.), considerada por algunos autores como la más importante del periodo precolombino anterior al dominio inca y originada también al borde del Lago Titicaca, en la Bolivia actual. Tiwanaku fue la capital de un territorio de 600 000 km² en regiones que hoy comprenden los departamentos de La Paz y Oruro, en Bolivia, el norte de Argentina, Chile y Perú hacia el Océano Pacífico, limitando con el desierto de Atacama al sur y las tierras tropicales del Perú en el norte. Se caracteriza esta cultura por ser uno de los vivos ejemplos de una sociedad respetuosa de la naturaleza, que en los altiplanos construyó miles de hectáreas de "suka kollus", tierras de cultivo fabricadas para retener el agua y crear un microclima, elevando la temperatura e impidiendo las heladas. Mientras para las regiones de serranías de los Andes, donde las tierras de cultivo eran escasas, los tiwanakotas desarrollaron un sistema de andenes o terrazas de labranza, conocidas como "takanas". Sus logros en la agricultura pueden calificarse como una verdadera revolución agrícola, pero el periodo urbano reveló igualmente capacidades de hábil manejo de la piedra, de buena planificación territorial, además de enigmáticas relaciones astronómicas y gran ingenio en la construcción de acueductos, tanto superficiales cuanto subterráneos, para la captación y evacuación de aguas (Escalante, 2001).

De acuerdo con el antropólogo John Murra, la cultura Tiwanaku estaba organizada en una suerte de archipiélago vertical, articulando territorios discontinuos (islas) donde cada uno de ellos tenía productos y productividades distintas, todavía complementarios entre sí (Murra, 1975). Las producciones de los distintos nichos ecológicos esparcidas por un extenso territorio, conectado por rutas terrestres precursoras de los "caminos del Inca", variaban desde la patata (papa), coca, al maíz, ají, calabazas, yuca, y el pescado y mariscos de la costa.

En los veranos del 2003 y del 2004 un equipo luso-chileno, bajo coordinación del Instituto Tropical de Portugal, ha recorrido toda la Primera Región chilena, y los territorios colindantes en Bolivia y Perú, totalizando 6 362 Km. de carreteras y caminos,

a fin de observar los paisajes que resultaron de procesos de aculturación debidos a la colonización española, primero, y a la dominación chilena, después. Hemos visitado 30 pueblos y entrevistado agricultores, ganaderos, maestros, caciques locales, incluso altos representantes de la administración política, como el gobernador de la Provincia de Parinacota (Chile). Hablamos con los representantes aymaras y quechuas junto al Ministerio de Asuntos Sociales de Bolivia, en La Paz. Las entrevistas fueron hechas también en las ciudades litorales, Tacna (Perú), Arica y Iquique (Chile), buscando desde comerciantes, matronas y responsables por los cuidados básicos de salud a profesores universitarios, funcionarios de los servicios agrícolas y ganaderos miembros de la CONADI (Comisión Nacional de Desarrollo Indígena), directores de obras de las municipalidades y responsables por las políticas de planificación urbana y regional en Chile. Realizamos un total de 37 entrevistas a distintos actores chilenos que, sumados a nuestras observaciones en terreno, a archivos en foto y en video, conformaron un registro etno-geográfico que enseguida pasamos a explicar.

2. Pisos agro-ecológicos del extremo norte de Chile

Se ha dividido el espacio estudiado en unidades que faciliten la labor de análisis. De forma sistemática, el cuadro que respecta a los paisajes dominantes en Tarapacá, hábitat de los aymaras "chilenos", se puede descomponer en cinco pisos agro-ecológicos:

1. La cordillera andina presenta una fisonomía particular en la parte central, que se caracteriza por tener un sector de topografía plana en altura, llamada altiplano. El altiplano se ubica sobre 4.000 metros y está cubierto por estepa de altura relacionada con un clima tropical xérico, con precipitaciones de verano, impropriadamente nombradas como "invierno boliviano", que no sobrepasan los 400 milímetros anuales. En el piso están recursos de agua que permiten el desarrollo de pastizales húmedos, llamados humedales –las vegas y los *bofedales*– apropiados para la crianza de ganado camélido, especialmente alpacas, que son más selectivas en su alimentación que las llamas y a las que les gusta refrescarse mientras comen. Puesto que la estación lluviosa va desde diciembre a marzo, los indios canalizan frecuentemente el agua desde lagos y lagunas hacia los pastizales. Las temperaturas extremas, de 1.3° de promedio anual, no permiten el cultivo de vegetales adaptados a la altura, como la quinua y las papas, sino en zonas excepcionalmente abrigadas. Además de un invierno de mucha nieve, las variaciones térmicas diarias

son grandes todo el año, con temperaturas que descienden hasta los 20 grados centígrados bajo cero. A medida que se asciende, el aire se hace mucho más seco y las radiaciones solares más intensas, por lo que los habitantes de altura deben ser capaces de resistir la desecación y la fuerte insolación. Disminuye también la cantidad de oxígeno, de forma que, aparte de los camélidos, sólo ovejas logran sobrevivir en el altiplano (Bernhardson, 1985; Castro, 1993; Raggi, 1993; Sánchez y Morales, 2004).

De los cuatro camélidos suramericanos –guanacos, vicuñas, llamas y alpacas– únicamente las dos últimas especies están domesticadas. Son fuente de fibra, carne y trabajo, mayormente la tan apreciada lana de alpaca. A pesar de que suele ser criada en países más desarrollados como Alemania, EEUU y Australia, no se ha triunfado todavía en la inseminación artificial, ya que la adaptación fisiológica de la hembra a la altitud conforma una reproducción de una sola cría, que en general nace siempre durante el día natural y en condiciones de poco stress. La baja fertilidad y alta mortalidad embrionaria de los animales hacen parte de los rituales aymaras, porque en la tradicional *Wilancha* de agosto, se sacrifica un animal, cuya sangre se ofrece a la *Pachamama* y a los dioses tutelares de la comunidad, en reciprocidad a las rogativas para el futuro.

Los indios acuden a los cerros sagrados en invierno para realizar la *Wilancha* cada año y pedir protección a los *Achachilas*, que forman el sustento estructural de su persistencia en el adverso mundo andino, sacralizando la naturaleza y postulando la efectividad de un estado de equilibrio de la relación cultural del hombre en cuanto tensionada por pautas de unificación con la dinámica del ecosistema natural. Todo es funcionalmente sancionado en la esfera mágica por mediación de tres intervenciones: los espíritus de las montañas nevadas que circundan sus poblados (*Achachilas*), la *Pachamama*, que representa la tierra madre; y la serpiente *Amaru*, vinculada a la posibilidad de subsistencia que aportan las aguas conducidas por los ríos y los canales de irrigación de las tierras agrícolas, todo lo cual se expresa conciliado en el tiempo por un ciclo que se desarrolla al ritmo de las estaciones.

En este piso más alto, los aymaras viven en estancias, vigilando durante el verano sus ganados, los cuales pastan las formaciones de *Oxychloe andina*, *Distichia muscoides*, *Festuca rigescens*, para no olvidar la endémica llareta (*Azorella compacta*), especie de uso medicinal y combustible de mucho valor en áreas donde no existen árboles (Villagran

et al. 1999). En invierno unos bajan hacia los pisos inferiores y otros siguen en los pueblos altos, como Parinacota (4 392 m), calificado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dotado de una de las más bellas iglesias de Chile; en Chujlluta, en el borde norte con Bolivia, municipio de General Lagos, investigado con detalle por el equipo, donde escasas 22 familias indias residen hoy día, compartiendo los pastizales con allegados del otro lado de la frontera; o en Cariquima, Isluga y Enquelga, provincia de Iquique, en el sur de Tarapacá.

2. La Precordillera se eleva 3.000 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí se encuentran valles intermontanos en los que es posible cultivar papas, orégano, ajo, cebolla y maíz, casi siempre en terrazas construidas en las vertientes rocosas. Antaño se producían sobretodo las papas (*Solanum tuberosum*), quinua (*Chenopodium quinoa*) y oca (*Oxalis tuberosa*), pero las dos últimas especies casi desaparecieron tras la llegada de los europeos y los cambios alimentarios subsiguientes. El hecho más característico de este segundo piso se constituye por las milenarias terrazas y sus acequias, técnicas de cultivo heredadas de la cultura de Tiwanaku ancestral, practicándose el riego bajo cuatro formas: inundación de terrazas; surcos diseñados en los andenes, derrames, técnica usada en terrenos planos; "Chipayas" o lento escurrimiento de pequeños caudales en finos surcos por la vertiente, de planta a planta. (Castro, 1993). Los aymara creen que la *Pachamama* no debe ser mutilada y, por lo tanto, construyen (a duras penas) con rocas menores y suelo arable los andenes de cultivos cerro arriba, así como los respectivos canales de regadío, evitando excavar la montaña para no dañarla. Porque en este piso hay una producción mixta, se cultivan pastizales de alfalfa que alimentan al ganado bovino, además de las ovejas y camélidos que descienden desde el altiplano en invierno (Cuadro 1).

La industria textil en los Andes estaba asociada a una floreciente pecuaria, y suele ser actividad que "comienza aproximadamente hace 8 milenios, incluso antes que la alfarería, que la agricultura y la domesticación de camélidos. (...) Las mujeres eran las que tejían en los tradicionales telares de cintura y de suelo", aún vigentes hoy día para tejer todo tipo de prendas, "y los hombres eran los encargados de fabricar cordelería, sogas y hondas" (Ulloa, 2001: 5). Actualmente la artesanía de la lana está en regresión en todo el norte de Chile, frente al despoblamiento de los pisos más altos, en estrecha conexión con el éxodo rural, a pesar de no haberse perdido el

hábito de usar la *chuspa*, la bolsa colorida tan típica de las mujeres andinas en la que transportan hierbas, leña y también los niños pequeños.

Los indios elaboraron un calendario de carácter agronómico sobre la base del cual se desarrollaban todas las actividades. Dicho calendario tiene su inicio el 21 de junio, con la celebración del *Machaq Mara* (Año Nuevo aymara), que marca el término de un ciclo y el inicio de otro, relacionado al momento en que el sol se encuentra más lejos de la Tierra, como es el caso del solsticio de invierno. El pueblo más importante de la Precordillera en territorio chileno es Putre (3.500 metros), en realidad una ciudad y capital de la provincia de Parinacota, pero con características notoriamente rurales. En la misma zona, la más extrema en territorio chileno, pero ya en territorio boliviano y peruano, están otros pueblos notables, como Socoroma y Belén (3.240 m). Allí se observan algunos bosques de queñoa (*Polylepis besseri*), especie arbustiva xerófila con aplicación a la construcción de casas, muy abundante en el peligroso camino de Zapahuira a Belén, fundado por los españoles. Hace parte de las formaciones vegetales nombradas estepa arbustiva pre-altiplánica, una diversidad de matorrales conocidos localmente como

Cuadro 1
Ganado creado en el extremo norte de Chile

Municipios y provincias	Bovinos	Ovinos	Caprinos	Llamas	Alpacas
Putre	1 140	9 053	772	30 613	23 624
General Lagos	14	7 401	3	18 904	11 760
PARINACOTA	1 154	16 454	775	49 517	35 384
Arica	1 964	5 767	718	114	1 405
Camarones	822	6 667	881	1 277	327
ARICA	2 786	12 434	1 599	1 391	1 732
Iquique	1	231	43	35	5
Huara	295	2 228	475	1 198	38
Camiña	346	2 624	125	913	354
Colchane	4	3 334	28	14 767	2 421
Pica	1	1 071	10	2 916	340
Pozo Almonte	31	7 629	7 777	787	67
IQUIQUE	678	17 117	8 458	20 616	3 225
Total Región de TARAPACÁ	4 618	46 005	10 832	71 524	40 341

Fuente: INE (1997)

tolares. Por el tema del agua, lo más importante es el pueblo de Chapiquiña, donde se captan las aguas del río Lauca, situado en el altiplano chileno, donde es originario, a pesar de que desagua en Bolivia, en el lago Coipasa. En el embalse de Chapiquiña se produce energía hidroeléctrica y a la vez se trasvasa el agua necesaria tanto al riego del valle bajo de Azapa como al abastecimiento de la ciudad de Arica, en el litoral del Pacífico.

3. Un tercer piso agro-ecológico está conformado por los valles altos, que podemos observar desde los 2.000 a los 3.000 metros de altura. Su clima es calificado como tropical desértico, siendo las precipitaciones inferiores a la evapotranspiración potencial. Comprenden el curso alto de ríos y quebradas transversales. Es que la mayoría de los cursos de agua que irrigan la región nacen en los Andes y bajan hacia el Océano Pacífico, alimentados por el deshielo de las nieves y glaciares andinos, como comentamos. Ellos son los legítimos responsables por la vida vegetal y animal de porciones casi lineales del territorio del norte chileno que, de otra forma, serían desiertos totales por encontrarse a la latitud de las altas presiones subtropicales. El aspecto fisonómico más importante de los valles altos es su exuberante verdura, que contrasta con la sequía de las vertientes. Allí hay canales de riego pero no se construyen terrazas. En la orilla de los arroyos se cultivan higueras, viña, *Prosopis chilensis*, maíz y cítricos. Visitamos Codpa e Timar, quebrada de Vitor, donde el microclima permite cultivos frutícolas subtropicales a altitudes de 2.000 metros. Además los pueblos fueron edificados en vertientes hacia el norte, lo que les obsequia una mayor insolación, al estar en el Hemisferio Sur.

En la provincia de Iquique impresionó Chusmiza, cuyas fuentes termales son usadas desde 1927, y donde los aymaras pelean por sus derechos consuetudinarios de uso del agua, depredada por una empresa de embotellamiento de aguas minerales que casi ha extinguido los manantiales. Más conocidas son las termas de Mamiña (2.750 m), pueblo edificado sobre un peñón rodeado por una quebrada de agua donde antaño se cultivaba, mientras hoy la escasa población subsiste con el turismo. Por el contrario, Camiña (2.400 m), más al Norte, en la quebrada de Tana, tiene origen prehispánico y obtuvo poca atención de los colonizadores hispanos, razón por la cual mantiene fidelidad a sus orígenes aymaras, siendo un oasis hermoso y productivo. Con la fruticultura se crean caprinos y ovinos, por norma ganado menudo

- 4 La Pampa del Tamarugal es hoy día un vasto piso desierto, ubicado entre la Cordillera de los Andes y los relieves costeros, en Tarapacá casi inexistentes y substituidos por vertientes abruptas desde la pampa hacia el mar. La clasificación climática es de tropical hiperdesértico o desértico interior, ya que desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros la precipitación anual no sobrepasa los 10 mm. Antaño prolífica, la pampa suele ser hoy meseta polvorienta con pocos bosques de *Prosopis tamarugo*, árbol endémico de Tarapacá. Los árboles remanentes ocupan terrenos salinos, de poca agua, siendo la especie capaz de captar la humedad de las capas subterráneas y de la camanchaca. Se trata de una niebla típica del litoral pacífico, que debe a la brisa marítima del atardecer su aire húmedo y frío (por venir de la corriente fría de Humboldt) que invade la tierra, comprime y condensa (Melcher, 2004; Sánchez, 2005). El tamarugo alcanza hasta 10 metros de altura y posee un tronco de un metro de diámetro. Sus ramas duras y espinas han sobrevivido a las cabras introducidas por los españoles pero no a la minería. Durante el ciclo del salitre, el tamarugo fue depredado para uso como combustible, de tal forma que quedó extinguido hacia 1980, cuando la FAO impulsó su estudio y resiembra en la pampa que lleva su nombre (Habit, 1985).

No obstante, también en este piso no persiste solamente el desierto, ya que donde hay afloramiento de aguas subterráneas existen hermosos oasis que puntúan el paisaje monótono de la pampa seca. Es el caso de Pica (1 325 m), donde se emplea aún hoy una técnica agrícola aymara notable, los *canchones*, consistente en la utilización de capas de agua superficiales que suben por evaporación, arrastrando sales y formando una cresta salina. La cresta es sacada y sobre el suelo húmedo se siembran sandías y melones, sin riego, y después alfalfa. El proceso tiene que repetirse cada cinco años, quedando las sales en el borde del *canchón*. Los colonos españoles han introducido otra fórmula de captación y transporte de agua, tan necesario a la producción de cítricos (pomelos, tangüelos, naranjos, mandarinas), mangos y viña: los *socavones*. A ellos se debe la construcción de cerca de 14 Km de largos y angostos túneles filtrantes que captan las aguas de las napas subterráneas y las conducen a los estanques, llamados *cochas*, a fin de utilizarlos en los regadíos. Se pueden observar todavía sus respiraderos caminando por el desierto.

La lucha por el agua ha sido ardua y las primeras leyes aportadas desde España para regular los usos usaban el sistema de la *mita* o turnos de agua, normativa resultante

de las Ordenanzas de Toledo (1557). Con ello se simplificó el sistema indígena, cuyas acequias y estanques poseían un carácter comunal, con faenas de limpieza, manutención y distribución del agua reguladas en las asambleas del ayllu. Con el devenir del siglo XVII se rompe el diálogo ancestral entre el hombre y la tierra, pasando el reparto del agua de regadío a ser otorgado a propietarios y no a las parcelas de tierra (Figueroa, 2001)

5. Las quebradas del norte de Tarapacá desaguan todas en el océano. Ello permite que se interrumpa el desierto hacia la costa, en la llamada Meseta de Tarapacá, lo que no suele suceder en el Sur, en la Pampa del Tamarugal, porque la disminución de precipitaciones, a medida que uno se acerca al desierto de Atacama, hace que los arroyos se terminen en oasis o salares, lejos del mar. El único río digno de ese nombre en el norte es el Lluta, situado entre Arica y la frontera peruana, con caudal medio de $2,3\text{m}^3/\text{s}$ (Sánchez y Morales, 2004). En sus márgenes registramos extensos cultivos de maíz, cebolla y alfalfa, además de ajo, betarraga, habas y flores en suelos aluviales, donde hay niveles de aguas subterráneas libres o fluctuantes, muy superficiales. El agua de riego es salina, con elevado contenido de boro y azufre, lo que está en estrecha relación con la riqueza minera de su hoya hidrográfica y requiere corrección química y elevado aporte de fertilizantes.

Las quebradas bajas septentrionales más importantes son Azapa, Vitor, Camarones y Tana. En ellas, sobre todo en la de Azapa se cultivan hortalizas (tomate) y frutas (mangos y aceitunas), usando acequias que provienen del Estado chileno, en las áreas periurbanas. Los olivos censados en el valle de Azapa corresponden a 27.3% del área registrada en todo el país, siendo los más apreciados en todo Chile (INE, 1997). Suele usarse con frecuencia el riego por goteo en las parcelas, para minimizar las pérdidas del precioso líquido y, tal como sucede con los valles altos, también en los valles bajos se practica agricultura tan sólo en el fondo de los valles y no en las vertientes. Toda la producción está destinada al abastecimiento de los mercados y a exportación.

El segundo gran río transversal del territorio en análisis limita la Primera con la Segunda Regiones chilenas, o sea, Tarapacá con Antofagasta. Trata del río Loa, que poseía antaño un caudal mediano de $2\text{m}^3/\text{segundo}$. Sus aguas siempre fueron intensamente aprovechadas para agricultura, minería y consumo de las ciudades, en especial Calama, en la 2ª región, cuya comarca contaba 136.739 habitantes en el censo del 2002. Actualmente su valle bajo no registra producción agrícola ¡El río esta

oficialmente agotado'

3. Historia de Tarapacá

El orden colonial significó la instauración de un sistema de clases y de castas en el que los indígenas ocuparon siempre un lugar de subordinación. Lo que hoy constituye la región de Tarapacá o Primera Región chilena fue otorgada por la Emperatriz Isabel, en Toledo, el 26 de agosto de 1529, a Diego de Almagro, licencia prorrogada y ampliada al Sur, en 1534, por el Emperador Carlos V. Almagro, viajero y conquistador, sobrepasó las fronteras de la "Nueva Toledo" concesionada, tanto al Sur, hasta el valle del Mapocho, donde está hoy Santiago, como al Norte, hasta Cuzco, donde murió luchando contra los incas. La concesión que se le entregaba a cada gobernador, con el territorio equivalente a España, debería ser "conquistada, pacificada y poblada" en nombre de la Corona española. Tras la muerte de Diego de Almagro, el territorio tarapaqueño pasa a ser integrado con el virreinato del Perú, con capital en Lima, ciudad fundada por un otro concesionario y conquistador de renombre, Francisco Pizarro (Sánchez, 2005)

A partir del siglo XIX, las posesiones sudamericanas logran su independencia de España. Los nuevos Estados se constituyeron dentro de los límites territoriales reconocidos en la América colonial. Por ello Tarapacá hace parte del Perú hasta la Guerra del Pacífico, mientras del sur del desierto de Atacama hasta el Estrecho de Magallanes se extiende y establece la República de Chile. El discurso fundacional de la "chilenidad" incorpora a los pueblos indios, una ventaja engañosa al no reconocer su especificidad, pues el nuevo orden republicano elimina cacicazgos, con lo cual los pueblos originarios perdieron sus representantes (Bengoa, 2005 confirmar año). En esa medida, la independencia de la colonia suramericana no fue un momento de mejora para los pueblos indígenas, en general, y su desarrollo sigue condicionado por acciones y políticas delineadas por un Estado al que son ajenos.

La cronología indígena cambia definitivamente a fines del siglo XIX, más concretamente en las provincias del llamado Norte Grande, donde residen aymaras, quechuas y atacameños, por un sangriento conflicto impulsado por propósitos hegemónicos de Chile, fundados en la riqueza minera tarapaqueña. La Guerra del Pacífico se extiende desde 1879 hasta 1883, año de la firma del Tratado de Ancón con el Perú. Queda, con todo, por acordarse la línea fronteriza (la Concordia) que tan solo

se trata de delimitar el 3 de Junio de 1929, sumando Tacna a Perú y Arica a Chile. En cuanto a Bolivia, se oficializa el tratado de tregua de 1884, que da a Chile la posesión indefinida de la provincia de Antofagasta, puerta tan deseada al mar, sin que se hayan formalizado jamás relaciones de buena vecindad entre ambos países (Millar, 2000).

Respecto a la Región de Tarapacá, territorio aymara ancestral, fue muy efectiva la acción expansiva del Estado chileno, especialmente desde el inicio del siglo XX. En efecto, la explotación del salitre por empresas extranjeras, mayormente inglesas, conformó un primer ciclo de internacionalización del territorio (1891-1907), seguido de un periodo de "asimilación forzada", más conocido como "proceso de chilenización" (1907-1930), con presencia política y militar represiva del Estado. El objetivo era transformar los pueblos indígenas del extremo norte en ciudadanos chilenos, con total desprecio por su identidad cultural y hacia la homogeneización de una pretendida identidad nacional. Como argumento fuerte en la primera región estaba la necesidad de integración de pueblos con costumbres muy peruanas, como los residentes de Arica y Putre, sobre todo con el imperativo de pacificar los límites fronterizos con Perú y Bolivia, debido a desavenencias frecuentes.

La "chilenización" fue una acción concertada del gobierno de la República e implicó el establecimiento de sólidas estructuras administrativas (municipios, provincias) y militares (cuarteles de frontera), que someten la región hasta nuestros días, así como incentivos a la inmigración desde Chile Central. Al final del siglo XIX Arica poseía 3.493 habitantes, creció a 8.829 en 1920 y a 12.588 en 1930 (Bernhardson, 1985). El control de circulación de mercancías y de gentes afectó la tradicional economía aymara, basada en la unidad étnica que incluía los parientes de Perú y de Bolivia; denegó simultáneamente el sistema de organización vertical, sustentado en distintos pisos agro-ecológicos, implantado una base territorial muy ancha. Cada nicho ecológico –el altiplano, la precordillera, los valles- estaba ocupado por pastores, actividades mixtas agropecuarias o pura agricultura de riego, todo de acuerdo con características climáticas y edáficas de distintos niveles de altura, sustentado por un sistema de intercambios de bienes, de desplazamiento de animales y de personas, una complementariedad social y económica, en reciprocidad, que involucraba relaciones muy fuertes entre todas las comunidades aymara. Ellas serán reprimidas y vigiladas.

La política de ocupación territorial y de represión cultural correspondía a una visión

territorial de Chile distinta de lo acaecido en la época colonial a Apertura al comercio con el mundo por vía marítima, con menoscabo de la meseta interior, privilegiada en la tradición española; b Estructura comunicacional ordenada sobre la costa pacífica, enfocada en el territorio de la América, desde el Cabo de Hornos hasta California, c Estructura urbana polarizada en el ámbito costero, donde estaban o se levantarán lugares de impulso al comercio, minería e innovación tecnológica Ciudades como Valparaíso, Arica o Iquique evolucionarán a fines del siglo XIX e inicios del XX, en detrimento de Putre y Santiago; d Valorización del territorio del desierto norteño, regiones de Tarapacá y Antofagasta, en función de su gran riqueza minera (Sánchez, 2005)

A partir de los años 30 del siglo XX, Chile aplica políticas de integración menos rígidas, sustentadas en la educación y castellanización de los campesinos aymaras, tampoco logradas plenamente, que los aymaras bautizan como periodo del "Estado docente" La "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato" la denomina "integración frustrada", por hallar que los aymaras han mantenido su identidad y su idioma, que estaba prohibido de hablarse en la escuela pública (Gonzalez, 2002, Bengoa, 2004) No obstante, la lengua aymara ha transitado desde el status de dominante a subordinada, siendo muy pocos los indios que saben escribirla Aun hoy solicitan los ancianos aymaras se les enseñe su idioma a los niños, hecho justo para rescatar las costumbres y la memoria de los pueblos originarios, tan olvidados e ignorados cuanto reprimidos en el pasado Para ello envían jóvenes a Iquique y Santiago, soportando algunos de sus costes, con la promesa de que vuelvan a los pueblos a enseñar a las futuras generaciones

Hay que señalar que el indio del altiplano no ha mantenido una actitud pasiva frente a los intentos de integración del Estado chileno. Adaptarse, además, es parte de su cultura, buscando los hechos positivos y combatiendo, en lo posible, los negativos, pero siempre "cambiando para no cambiar" Al pesquisar los pueblos de Tarapacá, el equipo ha verificado, con alguna sorpresa, que hay formas de preguntar que conducen a respuestas más o menos convenientes El indio busca decir lo que queremos escuchar a menos que se entere que lo que queremos saber es para construir su historia y esa conformidad a veces cuenta un poco más. Todo tiene los términos de un intercambio Todo tiene un precio y no precisamente en efectivo Si se quiere una información, hay que saber quién la quiere y para qué La imposición del castellano como lengua la aceptó el aymara, más bien porque ese dominio le ha permitido reclamar sus legítimos derechos de ciudadanía y postular la posesión de tierras que el Estado chileno ha tomado para

si como propiedad fiscal desde el inicio del siglo XX, tras la imposibilidad de que las comunidades formalizaran su registro, por desconocimiento legal y analfabetismo. A los recursos patrimoniales y derechos legales se agregó el tema del agua, muy conflictivo a partir de la década de los ochenta, durante la dictadura militar.

En torno a los años 1950 y 60 el Estado chileno desarrolla políticas un tanto erráticas frente a la cuestión indígena. Es importante subrayar que la urbanización intensa se da en la post-guerra, con mayor oferta de empleo e incluso subsidio a la habitación en las ciudades costeras de Arica y Iquique, además de zonas de colonización en los valles de Azapa y de Lluta, generando por primera vez un surco migratorio consecuente. El éxodo hacia los valles bajos resulta de la Reforma Agraria de Frei (1964-1970) y después de Allende (1970-1973), que busca rentabilizar la pequeña propiedad agrícola periurbana con desprecio por las prácticas de subsistencia, típicas de las comunidades del altiplano, de la precordillera y valles altos. Allende crea una "Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas" para las comunidades de indios mapuche, del sur de Chile, con olvido de los demás. La noción de progreso rechaza como atraso, simplicidad y marginalidad el cuadro de las zonas rurales tarapaqueñas, lo que contribuye a discriminarlas.

Con el gobierno militar (1973-1990) siguen cambios institucionales profundos que restablecen la firme voluntad de "integrar" con medidas fuertes a las comunidades indígenas al régimen y cultura nacional (Bengoa, 2004). Las "escuelas de concentración fronteriza" de Tarapacá, en especial las de la Provincia de Parinacota, fueron expresión clara de la ideología y de las directivas del poder central en este periodo. Ellas pretendían terminar el oficio de "chilenizar" las poblaciones de frontera, las más puras y tradicionalistas, proceso que sigue hasta nuestros días, y muy difícil por cuanto los aymaras chilenos migran hacia las ciudades y son substituidos por parientes bolivianos. Una encuesta sociolingüística de Gunderman del año 1985 demostraba que sólo aproximadamente el 44.5% de los aymara hablaban entonces su idioma ancestral. De ellos, el 96.9% residían en el altiplano, el 56.4% en la precordillera, el 50% en el valle del Loa y un 30% en los centros urbanos litorales de Tarapacá. El censo de 1982 registró apenas 33 546 individuos declaradamente aymaras en la Primera Región (Gundermann, 1997).

El objetivo claro del gobierno pinochetista fue castellanizar las regiones de borde, completando en lo posible la labor iniciada a principios del siglo XX. Son impartidas creencias, valores y normas propios de la cultura educacional de la sociedad chilena.

proponiendo una des-aymarización Sumado a ello está la cuestión minera De acuerdo con Van Kessel, después de 1532 nunca hubo necesidad de una discusión sobre la legitimidad de la economía minera con rechazo de la tradicional economía agropecuaria, que se ve agudizado durante la ocupación chilena de Tarapacá y más aun durante la dictadura, frente a la unidimensionalidad del oficialismo (Van Kessel, 1985) Para completar esta situación respecto a los pueblos indígenas, tanto el Decreto Ley 2 568 de 1979, que fomenta la propiedad privada, como el Decreto con Fuerza de Ley 1 122, del año 1981, más conocido como Código de Aguas, afectan definitivamente a las comunidades aymaras, promoviendo su desintegración Si la primera normativa es fruto de la ideología neoliberal imperante, no conforme con la colectivización del suelo agrícola ancestral, la segunda tuvo origen en las presiones del mercado hacia la apropiación de uno de los recursos productivos indígenas más vitales en áreas desérticas: el agua

Los monopolios y oligopolios de empresas mineras, tras la concesión de acceso a cabeceras de ríos, de manejo de aguas subterráneas, de venta libre de un bien tan escaso, han afectado irreversiblemente a los pueblos indígenas. Una consecuencia directa es el progresivo desecamiento de las vegas y *bofedales* de Tarapacá, lo que perjudica doblemente a los indios al presionar los recursos vegetales disponibles para alimentar el ganado y quitar el agua, fuente de vida

Solamente en los años 90, con la redemocratización del país, las políticas oficiales del Estado chileno reconocerán la realidad indígena, con lentos cambios de legislación en favor de derechos costumbristas En la víspera de asunción del gobierno democrático se pone fin a las escuelas de concentración fronteriza, no por rechazo de la política que las conformó sino debido al despoblamiento de estancias y comunidades del altiplano (González, 2002). En 1993 fue instituida la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que tiene delegaciones en Iquique y Arica Los aymaras consideran la organización como una buena fórmula para emplear a los jóvenes indios y mestizos educados en las ciudades y simultáneamente colocarlos al servicio de la cultura indígena. También usan sus oficios, casi siempre gratuitos, sobre todo los jurídicos, en las peleas por el agua y por la tierra De acuerdo con el censo agropecuario, un total de 67 comunidades aymaras ganaron el derecho de registro de sus propiedades comunitarias, lo que representa 1,1 % de los agricultores de Tarapacá En la actualidad hay un total de 5.511 agricultores aymaras en la región (ODEPA 2002)

En 2001, el gobierno socialista crea la ya referida "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato", con representantes de todos los grupos étnicos sobrevivientes, la cual ha entregado su informe en el 2004. La historia se recupera en los albores de un nuevo milenio, y a la publicación del trabajo se le da un título justo: "Memoria olvidada".

4. Explotación minera en Tarapacá

La explotación minera ha ganado expresión con la conquista y ocupación españolas de un territorio bajo control del Inca. Un documento de 1807 rezaba que, contrastando con la espantosa aridez del área, el mineral argentífero de San Agustín de Huantaxaya (situado a los 20° 16' de latitud austral), a dos leguas cortas del puerto de Iquique, en una serranía elevada, fue a lo largo del siglo XVIII una de las más ricas "*papas de plata que sin exemplar de otros minerales del Reyno produce éste*" (Hidalgo, 1985, 219). Explotadas desde 1717, las minas entran en el colmo de decadencia el año 1804, ya que el mineral sacado ahora en mayor profundidad no sostenía los gastos ocasionados por escasez y carestía de alimentos y de agua, que se traía de ocho a diez leguas. La documentación de las riquezas minerales del actual Tarapacá permite ilustrar la importancia económica del territorio durante el dominio colonial y demostrar porqué su conquista y ocupación fue atractiva para la república chilena. Explica aun porqué el control geopolítico fue particularmente apretado en la Primera Región de Chile. Además deja clara la necesidad del agua, tanto para la actividad extractiva como para sostener a las poblaciones involucradas en ella.

La actividad minera de Tarapacá fue un polo económico importante para los aymaras, sobre todo para los hombres que allí buscaron empleo, y muy particularmente durante el ciclo del salitre (1860-1925). Fue vital como actividad productiva para la economía de la región, por estar ubicada en la base de los Andes, área desértica que necesitaba consumir insumos buscados en otras localidades y localizaciones (fuentes de energía, agua, bienes alimentares, etc.). Como consecuencia de la intensa labor extractiva, desde fines del siglo XIX en adelante se registra una mayor degradación de los ecosistemas más frágiles empezando con la cubierta vegetal, tras un uso abusivo de combustibles locales como la llareta (*Azorella compacta*) y el tamarugo (*Prosopis tamarugo*), y terminando con el agua. El ejemplo del árbol endémico, depredado desde la Pampa del Tamarugal, suele ser paradigmático, pues tuvo resultados catastróficos desde un punto de vista ecológico. Los registros históricos enseñan que en la quebrada

de Tana hasta el río Loa, vastas porciones de pampa registraban antaño un cubierto casi continuo de árboles, lo que permitía fijar el agua subterránea que las plantas xerófitas poseían capacidad de buscar a gran profundidad. Desde inicios del siglo XX, la especie desapareció, resultando en lo que llamamos desierto inducido (Habit, 1985). Como si no fuera suficiente, las empresas salitreras, al ubicarse en el piedemonte de la cordillera, han usado descontroladamente agua de pozos existentes por toda la Pampa del Tamarugal, consumiendo los recursos subterráneos a los que lograban acceder, situación agravada después (1912) por la extracción de agua del valle de Quisma para abastecer la ciudad de Iquique, puerto exportador del salitre.

De hecho, la explotación minera chilena empieza con el salitre (1860-1925), luego seguida por el azufre de Arica (1900-1950) y el oro (1960-1990). La actividad extractiva sigue siendo importante en la actualidad, con minas de boro y de cobre, y está dispersa por toda la región de Tarapacá. Al trabajar en la minería el aymara entra en contacto con un sistema de mercado y formas de vida diferentes de la ancestral. La moneda substituye el intercambio de bienes y servicios tradicional y el trabajo asalariado reemplaza la *mita*. Ella hacía parte del sistema colectivo tradicional en que las tareas eran asignadas en turnos a las familias aymaras, unidas en comunidades llamadas *ayllus*. En el sistema de complementariedad y de colectivismo antiguo era impensable que alguien viviera a expensas de otro o de la comunidad. Cada persona tenía atribuidas sus tareas a diario y por estación del año. Incluso el liderazgo del grupo (un *ayllu* debía poseer un máximo de 100 familias) se lo daba por elección en la asamblea comunitaria a cada hombre adulto, en compañía de una esposa, hasta que todos lo hubieran probado y ejercido (Albó, 2003). Todo empezó a desintegrarse con la minería, no sólo por el empleo de mano de obra indígena sino porque la economía de la región va a priorizar esa actividad, adaptando la legislación y buscando homogeneizar las formas y modos de vida a ese fin más rentable (Gentes, 2001).

No obstante, como reconocíamos antes, la preferencia por la actividad minera en la región es histórica, pues data de la época colonial, en la que ya se conformaba esa propensión frente a la riqueza argentífera de la región. A los españoles siguen otros explotadores, los ingleses e irlandeses, entre los más destacados. Entre los empresarios que dejaron su firma en Tarapacá está North, dueño de las mayores salitreras conocidas a fines del siglo XIX, responsable de compañías subsidiarias como la *Nitrate Railways*, el *Bank of Tarapacá and London Ltd.*, el *Nitrate Provisions Supply Company Ltd.* y el

Tarapacá Waterworks Company. Esta última empresa va aducir el agua del oasis de Pica por *pipeline* a sus salitreras y al puerto exportador de Iquique (Van Kessel, 1985). Como hecho positivo, registramos haber sido el propietario inglés quien montó la primera planta desalinizadora de Iquique, que funcionó por muchos años.

Cuadro 2
Variación de la población residente en Tarapacá y norte de Antofagasta (1982/2002)

Pisos agro-ecológicos	Municipios	1982	1992	1982-1992 %	2002	1992-2002 %
Altiplano	Colchane General	1.499	1.555	3.7	1.460	-6.1
	Lagos	1.087	1.012	-6.9	1.295	28.0
Precordillera	Putre	3.356	2.803	-16.5	2.179	-22.3
Valles altos	Camiña	1.488	1.422	4.4	1.268	-10.8
	Camarones	731	848	16.01	1.203	41.9
Valles Bajos y Oasis	Huara	2.171	1.972	-9.2	2.593	31.5
	Pica	1.796	2.512	39.9	6.185	146.2
	Pozo Almonte	5.012	6.322	26.1	10.801	70.8
Ciudades	Iquique	110.991	151.677	36.7	215.233	41.9
	Arica	147.013	169.456	15.3	184.134	8.7
I Región Tarapacá	Total	275.144	339.579	23.4	426.351	25.6
Altiplano	Ollague	654	443	-32.3	316	-28.7
Precordillera y Valles altos	Calama	100.401	121.807	21.3	136.739	12.3
Valles bajos y oasis	María Elena	16.022	13.660	-14.7	7.475	-45.3
Ciudades	Tocopilla	22.202	24.985	12.4	23.700	-5.1
II Región Antofagasta	Total	341.702	410.724	20.2	492.846	20.0

Fuente: INE (2002)

Asimismo, señalamos que la incorporación a los ciclos mineros condujo a un menoscabo de la economía agropecuaria tradicional. El ajuste de la sociedad y cultura aymaras tiene lugar en cultivos como la alfalfa, desde la precordillera hacia los valles, a fin de alimentar al ganado, menor y bovino, destinado a proveer a las oficinas salitreras. A partir de 1940 se introduce el orégano en la precordillera del norte, sobre todo en Putre y Belén, donde predomina sobre la papa y el maíz, por ser producción de exportación. Durante la Segunda Guerra funcionaban 19 establecimientos mineros en el entonces Departamento de Arica, empleando más de 600 personas. Llapta y carbón se intercambiaban por azúcar, harina, arroz, bienes de consumo de otras partes de Chile y otros muy apreciados. A diferencia de hoy, en que la artesanía tiene poca expresión, en 1945 el Censo Nacional Económico registraba 1.253 grupos laborales textiles en el Departamento del norte de Tarapacá (Arica), de los cuales un 33% se ubicaban en la Comuna de Belén, un 25.6% en Putre, 18.9% en General Lagos y un 18.3% en la comuna de Codpa (valles altos). Este retrato que los aymaras presentan a la Comisión, está en desacuerdo con la premisa de que agricultura sería la actividad de subsistencia en aquel entonces. Con todo, confirma la capacidad de adaptación de las comunidades a los desafíos de la economía local y regional, así como la existencia de fuerzas productivas, o sea gente joven, en la precordillera y valles altos en aquellos días (Bengoa, 2004).

El panorama cambia con el Código de Aguas de 1981, afectando a las comunidades aymaras del altiplano. La apropiación de aguas ancestrales de los aymaras por parte de compañías mineras priva a los indios de un recurso vital para el desarrollo de sus actividades agrícolas, con impactos ecológicos nefastos en el desecamiento de humedales. Las migraciones a las ciudades costeras, valles bajos y oasis afectan definitivamente a la estructura en pisos, el archipiélago productivo aymara, las relaciones de intercambio, la solidaridad campesina y los vínculos con la tierra y con la cultura ancestral (Cuadro 2)

5. Manejo del agua en Chile

El II Foro del Agua, realizado en La Haya, tuvo lugar en marzo del 2000 y ha sido continuado por un programa sobre derechos indígenas, el *WALIR (Water Law and Indigenous Rights)*, tras haber sido expuesta la omisión de sus sistemas de valores, conocimientos y prácticas en el proceso de construcción de una visión global del agua. En esa conformidad, el IV Foro del Agua, realizado en México en 2006, buscó mejorar el

diálogo entre todas las partes a fin de permitir a los gobiernos involucrados una toma de decisiones más informada del problema y presentar propuestas de solución. De acuerdo con el texto preparatorio, la asignación del agua entre diferentes usos, y las políticas y prácticas que se utilizan para gestionar, suministrar y financiar este recurso, crean incentivos y desincentivos para actividades económicas específicas en determinadas áreas geográficas. Dichos incentivos influyen sobre la estructura de la economía, y refuerzan e inducen patrones espaciales de crecimiento específicos, los cuales, a su vez, tienen un impacto global sobre los caminos tomados por el desarrollo nacional, el crecimiento económico en el ámbito local, la equidad distributiva y la transformación del medio ambiente (WWF, 2005)

En Chile, al igual que en la mayoría de los países andinos, la legislación nacional ha ignorado los derechos y usos consuetudinarios indígenas en las normativas de regulación y gestión de recursos hídricos. En caso de los aymaras, tanto la tierra como el agua poseían tradicionalmente un valor de uso, siendo propiedad comunitaria asignada a la vez (*mita*) a las parcelas de familias pertenecientes al *ayllu*, de forma que todos pudieran tener fruición de bienes fundamentales a la supervivencia individual y grupal. (Albó, 2003) Por lo tanto, la propiedad colectiva y el parentesco formaban parte de la estrategia cotidiana de subsistencia de las comunidades indígenas, que concernían a la tierra y al agua. Sin embargo, ello implicaba un principio de territorialidad, o sea, la asignación de un territorio ancestral más o menos ancho del que dependía la existencia grupal, en nichos agroecológicos complementarios, basados en prácticas de reciprocidad y de intercambio. Obviamente que el archipiélago aymara fue colocado en riesgo desde la colonización española. Con todo, los indios sólo serán verdaderamente despojados de sus anchos territorios a partir de la formación de las nuevas repúblicas suramericanas (Gentes, 2001; Bengoa, 2004) A partir de 1911, el Estado chileno vuelve obligatorio el registro de la propiedad del suelo. El analfabetismo y la ignorancia respecto a *derechos de facto*, contra los *de uso* imperantes, conducen a una apropiación indebida y muy fácil de vastas porciones del territorio tarapaqueño por la llamada propiedad fiscal. El derecho positivo chileno, con raíz europea, se reveló incompatible con las comunidades sucesoriales indígenas, lo que se ha traducido en conflictos intra y entre ayllus (Cortez, 1993)

Cuando el proceso de redemocratización del país se instituye (en la década de 1990), el derecho consuetudinario, los usos y posesiones de aguas son reguladas entre comunidades indígenas. Entre las fechas referenciadas hay un largo periodo

desconocido en que la historia de Chile fue fértil en eventos, también sobre el tema del agua. Conviene, por lo tanto, conocer las leyes del agua más relevantes, a fin de entender mejor el statu quo vigente:

1. En la constitución de 1833, la primera aprobada para la joven República chilena, ya se establecían los derechos de uso del agua. La relevancia del agua es dual se debe a su escasez en el extremo norte y carencia estival hasta la latitud de Santiago, la capital y al hecho de que los españoles hayan introducido, por primera vez, la desvinculación estructural entre el agua y la tierra, al permitir procesos de compraventa del agua en Tarapacá, como respuesta a peticiones de hacendados de los oasis, como fue el caso de Pica, en los siglos XVII y XVIII (Figueroa, 2001), mientras lo natural es suponer que la compra de cualquier predio agrícola incluya en su precio de venta la adjudicación de ciertos recursos hídricos que permitan sostener la producción. De cualquier forma, la asignación de derechos a grandes propiedades (latifundios) y propietarios agrícolas (latifundistas) fue relativamente pacífica. Los problemas de gestión de recursos hídricos surgen a partir de mediados del siglo XX, cuando se acelera el incremento demográfico del país y empieza la reforma agraria.
2. El Código de 1951, publicado tras un acentuado aumento de la población chilena, estaba en conformidad con el *boom* de la post-guerra registrado en otros países del mundo. Fue acompañado de una fuerte migración urbana que se reveló como estimulador de un proceso de administración descentralizada del agua (Gentes, 2000). En el Código de Aguas de 1951 "se realizó una distinción entre los derechos de aprovechamiento privado y estatal. Los derechos de aprovechamiento estatal se entregaban en concesión al sector privado permitiéndose, además, la libre transacción de los derechos de aprovechamiento entre usuarios de una misma actividad económica" (Lewin, 2003: 6-7). El marco legal vinculativo es que requerían permiso las transacciones que involucraban un cambio de actividad económica (Donoso, 1995).
3. El Código de 1967, por el contrario, centraliza la reasignación de derechos de aprovechamiento de aguas, siendo que el recurso se podía asignar a distintos usuarios en su calidad de titulares de derechos de aprovechamiento, con carácter administrativo, un derecho intransferible y sujeto a caducidad. La limitación de derechos de agua confería al Estado la posibilidad de reasignar o no el bien, de acuerdo con mecanismos de planificación centralizada que determinaban una "tasa

de uso racional y beneficiosa", sin tener la obligación legal de indemnizar a los antiguos usuarios (Lewin, 2003). Este sistema funcionó con deficiencia, ya que se le daba al gobierno de Chile un control exagerado, requiriendo mucha fiscalización para cuya implementación en todo Chile el Estado se reveló no estar preparado. Este Código de Aguas fuertemente centralizador estaba asociado a la Reforma Agraria, iniciada por Frei (1964-1970) y continuada por Allende (1970-1973). La Reforma ha subdividido los latifundios buscando modernizar el sector. "Luego del golpe militar del 11 de Septiembre de 1973, la política de reforma agraria –encabezada por la Corporación de Reforma Agraria (CORA)– fue progresivamente retrotraída" (Gentes, 2000: 2). El resto de la década de los 70 será así de mucha confusión en la asignación de derechos y en arbitraje de conflictos por el agua, lo que generó presión de los sectores neoliberales de la economía, apoyados por la inteligencia inglesa y americana, en el marco del "tatcherismo" y el "reaganismo" de los años ochenta. Curiosamente el nuevo Código de Aguas resultante, el de 1981, será anterior a la Ley de liberalización del agua inglesa, aprobada en el 1989, por lo que al parecer Chile fue una suerte de laboratorio de la privatización del agua, antes que se aplicara a otros países, incluso más desarrollados.

4. El Código de Aguas de 1981 otorga derechos de agua a los usuarios en forma gratuita, salvo cuando más de una solicitud exista para determinado tramo de aguas superficiales o subterráneas. El espíritu del decreto gubernamental fue crear derechos de propiedad sobre los usos del agua idénticos a los del suelo, en la perspectiva de que al mantenerlo en manos del Estado, o sea, como un bien público, se lo sub-utilizaba, impidiendo su uso racional y tan necesario al desarrollo de actividades económicas rentables, como la minería. Al dejar el bien al libre arbitrio de privados y al juego de las fuerzas del mercado se buscaba un uso más adecuado de un bien que, se argumentaba, no sabía administrar *la res publica* (cosa pública). Son los argumentos que se aplican a todo en el liberalismo y específicamente en el neoliberalismo económico. Sin embargo, al tratarse de un bien no renovable y fundamental a la vida humana, vegetal y animal, se ha olvidado que el Estado debe establecer límites de actuación del sector privado. Y no se le hizo porque sería coartar la iniciativa privada.

Parece, pues, haber sido Chile el país donde, en el ámbito jurídico, se ha abierto nuevas páginas sobre la historia de la legislación de aguas, al introducir el derecho de aprovechamiento privado de este bien no renovable, por medio de este nuevo Código.

Decreto con Fuerza de Ley n.º 1.122, publicado en el Diario Oficial de 29 de octubre de 1981 (INDAP, 1997). Como consecuencia, Chile funciona aún en nuestros días como un laboratorio vivo del derecho ambiental. Por los nefastos resultados que en situaciones y regiones dadas tuvo la aplicación de la legislación gubernamental sobre usos del agua, el país suramericano requiere más estudio y cautelosa reflexión. Es que este código ancló tres principios innovadores en la legislación chilena: la libertad en la forma del aprovechamiento del agua; la gratuidad de la concesión de derechos (salvo excepciones); la limitación del rol del Estado e instituciones públicas en la regulación de los usos (Gentes 2000, 2001)

En el Código de Aguas de 1981 no se identifica ningún uso prioritario para otorgar nuevos derechos, o sea, el agua potable, por ejemplo, no tiene prioridad sobre el agua de riego. Los nuevos derechos de agua son otorgados para uso consuntivo, caso del uso industrial, del doméstico o del riego, y no consuntivo, del que son ejemplos la generación eléctrica o la acuicultura. El Estado puede aún conceder ejercicio permanente o eventual del bien a comercializar en el mercado. A diferencia de la ley anterior, el nuevo decreto (subrayamos que no ha sido aprobado en el Congreso y sí por el Gobierno de la República) estipula el comercio libre de derechos de usos, incluso para actividades distintas de las que han generado la otorgación inicial. Los derechos son otorgados de forma continua, discontinua o alternada entre varias personas (Artículo 12). En un tramo particular, los derechos de uso no consuntivo no restringen los de uso consuntivo, a menos que los propietarios hayan acordado lo contrario. Los derechos de agua permanentes se han expresado siempre en términos de caudal (litros por segundo) persistiendo la posibilidad de solicitar más agua, en caso de caudales elevados, por medio de la otorgación de derechos contingentes (Lorentsen y Barcacena, 2005).

Curiosamente, el nuevo Código de Aguas olvidó la regulación de caudales mínimos, lo que en las regiones áridas generó agotamiento de ríos y embalses. "En 1992 se presentó una enmienda al Código de Aguas para velar por la protección de los acuíferos que alimentan los humedales de las Primera y Segunda Regiones" (Lorentsen y Barcacena, 2005: 85). Sólo en 1994 se ha publicado la Ley General sobre Bases del Medio Ambiente, que complementa algunas disposiciones del Código de Aguas, incluyendo la manutención de caudales mínimos en los ríos, a fin de aminorar un problema grave para el norte de Chile. Esas alteraciones no han solucionado los problemas de uso consuntivo de las aguas superficiales en zonas de desierto o casi

desérticas, ya que los derechos adquiridos con anterioridad a estas enmienda y ley no pudieron ser denegadas a quienes se hubieran otorgado, lo que en pocos años ha resultado dramático y insoluble en el caso del río Loa, como discutiremos más adelante (Thomas *et al.*, 1996).

A lo largo de las décadas de los ochenta y noventa se otorgaron muchos sitios a instalaciones de empresas públicas del sector energético, de suministro de agua a las ciudades y al sector minero estatal. Después de su privatización, lo que sucede a un ritmo acelerado por todo Chile ahora, ellas serán propietarias de más derechos de usuario de los que probablemente necesitarán. Y el único objetivo del sector privado es obviamente el lucro. Eso se supone que en la ideología neoliberal se distinguen los negocios públicos de los privados. El drama es que la otorgación de derechos de aguas superficiales casi siempre envuelve cabeceras de ríos. Los propietarios de derechos de agua corriente abajo no tienen protección jurídica ante los cambios en el uso de aguas corriente arriba. En caso de sequía no tienen ninguna garantía de que su sección del río reciba agua. Eso deriva no sólo del Código de Aguas de 1981, que es legislación nacional, sino de la propia Constitución chilena, que consagra con carácter inalienable la propiedad privada. De esta manera, no hay mecanismos legales que permitan revertir el *statu quo*.

La dificultad de los indígenas en comprender la situación a que se ha llegado hoy día respecto al tema del agua es mayor aun. El agua para los aymaras tiene validez no sólo económica sino cultural, integrada en su cotidiano como un objeto sagrado. En tal sentido, la política del Estado chileno aparece claramente como un robo del agua, siendo que las políticas de privatización olvidan los derechos consuetudinarios de los indígenas e incluso la propiedad de la tierra, ya que al separar la propiedad del suelo y del agua se reniega de la visión ecosistémica. Para los indígenas el nuevo código es la clave de la des-aymarización, el derrumbe final de su *modus vivendi* después de un largo rol de políticas de desintegración concebidas para hacer desaparecer una cultura que se ha convertido en disfuncional, y que está condicionada por aquellos encuadres de legitimidad y racionalidad del mismo modelo neoliberal (Bauer, 2004).

Es que los derechos anteriores al Decreto N° 1.122 fueron estipulados en la normativa asumiéndolas "como vigentes", pero solo en parte, mientras otros serían "a regularizar". La perfidia es que, debido a que el derecho consuetudinario no entregaba

precisiones sobre la cantidad de agua a aprovechar, era difícil de acaparar legalmente y de regularizar, convirtiéndose en inagotable fuente de conflictos tanto entre los dueños como en las transferencias entre privados y las industrias, especialmente las empresas mineras. Como si no fuera suficiente, la inscripción de derecho consuetudinario es, en la letra de la ley vigente, junto a la emisión de una patente para derechos de aguas no aprovechados, una justificación básica de la concesión de aguas a terceros (Gentes, 2000). En esa medida, es como si no existieran derechos anteriores al nuevo Código, porque las empresas con mayor poder económico y amparo judicial encuentran un manantial inmenso de posibilidades de tomar el agua de cualquiera, en cualquier lugar.

Las enmiendas de 1992, propuestas al Código de Aguas por la Dirección General de Aguas (organismo que otorga las concesiones), han introducido la obligación de mantener la ecología de las zonas protegidas en las márgenes de los ríos. Es que estaba probado ya, once años después, que los mecanismos del mercado no eran capaces de frenar especulaciones, conduciendo, sobre todo en zonas de gran riqueza minera, como es el caso de Tarapacá, a monopolios y oligopolios que frenaban la propalada "lógica del mercado". Las comunidades de agua indígenas eran allí de las más perjudicadas, con abandono de tierras al no tener acceso al agua, mucho menos seguridad respecto al futuro de sus posesiones, ya que a lo mejor les dejaban una capa de suelo desierto para cuidar. Ello llevó a la ley de los derechos indígenas del 1993, sin que se la hubiera preparado para resolver los conflictos con los monopolistas, ya que timidamente se centró la normativa en solventar conflictos entre comunidades indígenas o la asignación de agua en el interior de cada comunidad. Y no faltan los que subrayan los conflictos entre indios como fuente de problemas para la Región de Tarapacá, con olvido de la causa verdadera.

La Ley Indígena N° 19.253 establece el deber social y estatal de proteger la tierra indígena, velar por su adecuada explotación, equilibrio ecológico y proponer su ampliación (Artículo 1). Establece un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, entre cuyos objetivos figura la financiación de la constitución, regularización o compra de derechos de agua, así como de financiar obras destinadas a obtener aguas (Artículo 20). Al referir las aguas indígenas sin que se las defina jurídicamente, se comete el primer error. El segundo resulta del hecho de que las disposiciones legales sean válidas siempre que no violenten el Código de Aguas vigente, lo que muchas veces anula lo pretendido con la ley indígena. Los reconocimientos vinculados con el agua, respecto a las "etnias

nortinas", como aymaras y atacameños, aparece referida en los artículos 63 y 64 La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) se creó en simultáneo, con la función de defensa jurídica, de conciliación y de arbitraje de los conflictos. Malogrado el intento real de ayudar a solucionar graves problemas de uso y aprovechamiento de aguas en el norte de Chile, la verdad es que se llegó un tanto tarde a la gestión equitativa del agua y quizás también tarde para asegurar el futuro sostenible de los ecosistemas tarapaqueños. Finalmente, todo es ajeno a la territorialidad, a la propiedad colectiva y comunitaria que sostenía la cosmovisión de los pueblos andinos (Gentes, 2001; Bengoa, 2004; Madaleno, 2004).

Apasionados debates siguen en Chile entre representantes de sectores ecologistas, abogados y eminentes juristas, de una parte, y defensores acérrimos del libre mercado y de los sectores agro-exportador y minero, del otro lado. La Ley General Sobre Bases del Medio Ambiente, con el N° 19.300, publicada en el Diario Oficial de 9 de marzo de 1994, introduce las nociones de biodiversidad, conservación del patrimonio ambiental, daño ambiental, contaminación, estudio de impacto ambiental, calidad ambiental, preservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y hasta reparación. Para el manejo de los recursos hídricos la alteración relevante es la introducción de caudales mínimos a respetar en las líneas de agua, como comentamos. Y es aquí, exactamente, que la justicia raras veces coincide con la praxis. Nadie entrega sus derechos adquiridos (INDAP, 1997; Bauer, 2004).

5.1 Los ríos del Norte: fuentes tomadas

En los años sesenta se trajo al valle de Azapa una pequeña parte del agua del río Lauca, con un canal de largo aliento y para un doble servicio: a) Fertilizar el valle bajo de la periferia ariqueña; b) Generar energía barata en la Central de Chapiquiña. Por cuestiones de geología del terreno y de coste, el canal se comenzó en las cabeceras del río internacional, lo que suscitó largos y no resueltos conflictos con Bolivia, donde desagua el Lauca, malogrado un acuerdo firmado en 1962. Las sequías cíclicas que por norma duraban 8 años, seguidas de 7 años lluviosos, están acortándose (Rivera, 1985). Así es que las gramíneas que forman los pastizales de altura ralean y el ganado de camélidos pasa hambre y sed y muchas veces se muere. La depredación de bofedales no vulnera solamente los animales domesticados sino también y sobre todo la vida salvaje, los guanacos (*Lama guanicoe*) y vicuñas (*Vicugna vicugna*), cada día más raros.

así como los flamencos (*Phoenicopterus chilensis*) y los patos de puna (*Anas puna*), mientras los Suri (*Pterocnemia pennata*) y pumas (*Felis concolor*) están en peligro de extinción (Raggi, 1993; INE, 2000)

Además de la mayor escasez de precipitaciones, por supuesto relacionada con cambios climáticos globales, tanto los recursos hídricos superficiales como los subterráneos están sufriendo depauperación. La razón principal de ese proceso de achicamiento de embalses y reservas acuíferas está en el uso continuado de las aguas fluviales captadas en la Provincia de Parinacota, aquí descritas, las cuales se destinan a las parcelas agrícolas del valle bajo de Azapa y a la ciudad de Arica, como comentamos. Es que el aumento demográfico justifica el incremento del consumo, tanto del agua como de la energía hidroeléctrica captada en Chapiquiña, y por de ende se requiere una presión mayor sobre el cauce del Lauca. No sorprende que los aymaras chilenos de la comuna de General Lagos, la más afectada con la creciente amenaza al río y por el desecamiento de los humedales, migren hacia las ciudades y valles bajos, donde los subsidios estatales a la adquisición de vivienda los atraen en detrimento del insostenible medio rural. Sin embargo, la pobreza extrema y la búsqueda de mejores condiciones económicas hacen que sus parientes bolivianos inmigren a Chile y tomen sus puestos en el altiplano, proceso casi siempre acompañado de conflictos familiares e intra-étnicos. Este movimiento migratorio local justifica que la variación intercensal de General Lagos, registrada en la Tabla 2, haya sido positiva contra la tendencia general (1992-2002)

Asimismo, debido al registro de tierras altiplánicas desde 1911 como propiedad fiscal, el Estado chileno ha transformado gran parte del altiplano tarapaqueño en reservas y parques naturales, con lo que pretende aminorar los efectos nefastos de la minería sobre el ambiente, al estar en zona de enorme biodiversidad y riqueza endémica. De Norte a Sur están el Parque Nacional Lauca, creado en 1970, con 137.883 ha. de superficie; la Reserva Natural Las Vicuñas, con 209.131 hectáreas; el Monumento Natural El Salar de Surire y el Parque Nacional Volcán Isluga, cerca de Colchane, con 174.744 ha, donde nacen las aguas termales que afloran en Chusmiza, provincia de Iquique, investigada por el equipo. Todos estos espacios protegidos, si bien, contienen algunos de los pueblos más emblemáticos del altiplano norte chileno, ocupan buena parte de la región y persisten también como formas de control gubernamental sobre los Andes del Norte y las fronteras con Bolivia y Perú. La administración la hace la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a la que se agregan numerosos cuarteles de frontera que

desequilibran la composición por sexos del piso alto, y uno observa impresionado que, en los intervalos de los campos experimentales de quinua, surgen infraestructuras inesperadas, como campos de poso de aviones de gran porte.

Volviendo al tema del agua, Tarapacá tiene apenas tres ríos dignos de ese nombre:

1. El Lauca ($2,3 \text{ m}^3/\text{seg}$), tomado para riego de Azapa y suministro de Arica y para cuyos efectos son los manantiales captados en las cabeceras, en la Laguna de Cotacotani y bofedales de Chucuyo y Parinacota. Desde 1985 se acrecentaron las aguas del lago Chungará al proceso de trasvase del río altiplánico hacia la costa. Muy antiguos eran los proyectos de canalizar el río (1856, 1870 y 1920), pero sólo en 1949 la empresa pública ENDESA comenzó la construcción, para terminarla en 1961, en medio de la controversia con Bolivia (Bernhardson, 1985). Es que la quebrada de Azapa, que suele beneficiar, no es de cauce permanente, pues nace donde las precipitaciones de verano son modestas, cerca del cerro Orcotunco, corriendo hacia el norte por 40 Km con la designación de quebrada de Ticnamar y después hacia el Pacífico. Al terminar en la periferia más cercana de Arica, la quebrada de Azapa fue la preferida para desarrollar colonias agrícolas durante la Reforma Agraria de Frei. Actualmente Bolivia argumenta que hubo saqueo de aguas internacionales y reivindica caudales mínimos al Lauca.
2. En cuanto al río Lluta, al contrario del Lauca, es valle transversal, que desagua en el mar y presenta un arroyo constante con aportes de los deshielos, lluvias de verano y vertientes. Nace en la falda oriental del volcán de Tacora, tiene 147 Km de largo y la superficie de su cuenca está estimada en 3.437 km^2 (INE, 2000). Porque se encuentra en el extremo norte de Chile, está bajo influencia de un bioclima tropical donde las temperaturas y humedad varían fuertemente con la altitud, la que se incrementa en sentido oeste-este. Las aguas del río Lluta están contaminadas y contienen elevado contenido en boro y arsénico, a causa de la explotación minera, siendo usadas para riego de hortalizas y maíz que se provee al puerto más septentrional de Chile.
3. Finalmente, el río Loa es el mayor en términos de cuenca de todo Chile (33.082 km^2); antes del Código de Aguas de 1981 poseía un registro de $2 \text{ m}^3/\text{segundo}$, casi igual al Lauca (Tabla 3), mientras en las últimas estadísticas del ambiente aparece con un promedio de $0,35 \text{ m}^3/\text{seg}$. (INE, 2000) Sus fuentes fueron expoliadas por la minería del cobre, como pasamos a explicar.

Cuadro 3
Evolución de caudales en el norte grande chileno

Cursos de agua seleccionados	Caudal mediano (m ³ /s) 1976	Caudal mediano (m ³ /s) 2000
Río Lluta	2,3	1,56
Río Lauca	10*	2,00
Quebrada de Azapa	1,0	0,84
Río Loa	2,8	0,35
Río Salado	-	0,60

*Caudal máximo según Rivera (1985)
Fuentes: Larraín (1987) e INE (2000)

5.2 Desección del río Loa

En 1985 la Dirección General de Aguas concedió a CODELCO-Chile el derecho de extraer las aguas de la fuente que alimentaba la vega de Turi, en la hoya hidrográfica del río Salado, afluente del Loa. La vega de Turi, localizada a 3.000 metros de altura, tenía entonces una extensión de cerca de 1 500 hectáreas de riego, y alrededor de cuarenta construcciones de estancias sostenían unas 2.000 cabezas de ganado, sobre todo llamas y ovejas. Un espacio de poco más de 10 hectáreas obtenía buenos rendimientos de trigo, maíz, papas, alfalfa y hortalizas como habas y zanahorias. Todo se ha dado por perdido tras la concesión a la compañía minera de cobre estatal, que sobrepuso a las áreas de subsistencia indígenas los intereses de captación de aguas en vastas porciones del Salado. Ello permitiría aumentar la capacidad de extracción y tratamiento del mineral, muy abundante en la provincia del Loa, cuyos yacimientos no estaban siendo totalmente aprovechados por la empresa justamente por falta de agua (Aldunate, 1985). Este monopolio, tras generar la migración de los agricultores a la ciudad de Calama, localizada en el curso medio del río Loa, ha incrementado los usos consuntivos urbanos y acelerado la ruptura de las ya magras reservas de la cuenca hidrográfica.

A lo largo de las décadas de los 80 y 90, CODELCO ha solicitado la otorgación de aguas fluviales y profundas de las cuencas del Loa y del Salado, por toda Cordillera Andina, puesto que la mina de cobre de Chuquibambilla, la mayor a tajo abierto en el

mundo (2.830 m de altitud y 900 metros de profundidad), suele ser responsable de cerca del 30 % de la producción chilena, necesitando abundantes recursos hídricos para la extracción y procesamiento del metal (Aldunate, 1985; Madaleno, 2007)

En mayo de 1995 la empresa pública de explotación del cobre entregó a la sociedad anónima Electroandina la exclusividad en el aprovisionamiento de energía eléctrica. Inició, el mismo año, la explotación de la mina de Radomiro Tomic, localizada a 10 Km de Chuquicamata (3.000 m), la cual produce cátodos con 99,99 % de pureza, superiores a los de Chuquicamata. El año siguiente, Codelco se asocia a la americana Phelps Dodge Corporation e inicia la explotación de la mina El Abra, 100 Km más al norte de la ciudad de Calama. Esta fue la tercera gran mina de cobre de la cuenca hidrográfica del Loa. Se localiza en las cercanías del embalse sobre las aguas del río, a jusante del encuentro con sus afluyentes Silala/San Pedro, lo que generó la laguna Conchi, con capacidad máxima de 22 millones de m³ (INE, 2000). Sólo en El Abra trabajan 485 mineros. El informe de Electroandina del 2005 nos informa que actualmente Codelco Chile posee el 66.75 % del capital de la sociedad anónima responsable por el abastecimiento de energía a las tres minas de cobre y la francesa Suez los remanentes 33.25 % (Electroandina, 2005).

Al captar las aguas en las nacientes y pozos hasta 300 metros de profundidad, en el altiplano, la precordillera y en valles altos, la actividad minera está monopolizando el agua y vaciando el precioso líquido justo en las áreas donde empiezan los arroyos. Dado que el territorio estudiado está localizado en una zona de altas presiones subtropicales, donde casi no llueve, se está condenando la vida salvaje allá del flujo generado por las nieves y hielos de altura. En cuanto a los asentamientos humanos, las explotaciones cupríferas de El Abra/Chuquicamata/Radomiro Tomic están contribuyendo con sus usos consuntivos del agua a vaciar las áreas a montante de las minas, como en caso de Ollague (NE), que ha perdido el 28.7 % de la población entre 1992 y 2002, así como en María Elena (W) con -45.3 % de tasa de cambio en la misma década (Cuadro 2)

Frente a la drástica disminución del caudal, el 24 de enero del año 2000 la Resolución N° 197 declaró agotados el río Loa y sus afluentes, y ha suspendido nuevas solicitudes de agua (MOP, 2003). Los aymaras y atacameños han cultivado la cuenca del Loa durante miles de años; en 15 años, fecha de la primera concesión a la minería del cobre en los altos, se disipó el agua fluvial.

5.3 Agotamiento de aguas minerales en Chusmiza

Se cree que el pueblo de Chusmiza sea prehispánico al aparecer mencionado en las "Encomiendas de indios y pueblos hacia 1540", como perteneciendo a Lucas Martínez Begaso, así como toda la hoya de la quebrada de Tarapacá (Larrain, 1987). En 2004 el equipo luso-chileno visitó este valle alto, donde entrevistamos al cacique local. Una planta de envase de aguas minerales fue hasta hace poco la principal fuente de renta y de empleo para muchos residentes, pero estaba entonces cerrada. Las razones del cierre no fueron de fácil pesquisa: a) Para los indios, fue resultado de una pelea judicial que tardó siete años en producir una sentencia, y que les daba razón respecto a la suspensión de concesión de agua al negocio, basada en derechos consuetudinarios; b) Para los industriales de la empresa, sin embargo, la razón por la cual se estancó la producción habría sido la falta de agua, el agotamiento de la fuente, reforzado por una sucesión de años secos.

Dotada de aguas termales usadas para curar problemas de huesos y de reumatismo, las fuentes de Chusmiza se originan en las faldas del Volcán Isluga, y afloran en el pueblo, donde son explotadas y conocidas desde 1927. A la empresa embotelladora reciente le fue otorgada la explotación de aguas para envase y venta al mercado nacional, según la normativa vigente. Sin embargo, al final de la década de los 90 del siglo XX, los indios aymaras reivindicaron el usufructo de las tierras del valle y de sus aguas, junto a la CONADI, e interpusieron un recurso para obtener derechos consuntivos sobre las fuentes. A pesar de los bellos campos de maíz y hortalizas, con riego, fotografiados por el equipo, este pueblo del valle del Tarapacá ha prácticamente perdido la fuerza de sus riquezas hidrológicas, hoy día largamente reducidos, debido a la explotación depredatoria que han sufrido tras la concesión monopolista de la fuente a una empresa privada de comercio de agua mineral embotellada.

6. Conclusiones

Desde una perspectiva conceptual, lo que hemos analizado compromete la confluencia de tres vectores de desarrollo histórico, uno referente al paso entre la identidad y la asimilación de una cultura milenaria, otro ligado al rumbo de reafirmación e irradiación de la lógica del neoliberalismo, con sus secuelas de despersonalización y fragmentación. El tercer vector expuesto se halla en la doble dimensión de integración

y exclusión social que implica el progreso, entendido como desarrollo técnico y tecnológico de raíz occidental, con homogeneización cultural, como si la globalización de la economía debiera implicar forzosamente la globalización de las formas de vida

Todos los ecosistemas estudiados, tanto el altoandino como el desértico interior, están sufriendo impactos ambientales negativos frente a la explotación minera, muy exigente en recursos hídricos. El desecamiento progresivo de las vegas y bofedales del piso alto está en estrecha relación con la pérdida de diversidad de especies naturales y de pastizales para los camélidos, generando el abandono de las tierras ancestrales en función del descenso de los indios a los pisos más bajos y a las ciudades costeras, donde el clima es más ameno y la vida suele ser menos dura, pero donde se adaptan y adoptan a otras fórmulas de subsistencia o viven marginados. Las ciudades costeras, ubicadas en el desierto van a continuar y acentuar la extracción del agua, produciendo un círculo vicioso: escasez de agua–migración urbana–mayor demanda de agua en la urbe–mayor presión sobre los recursos altoandinos. Sigue la disminución de los volúmenes de agua requeridos por los sistemas de riego andino en los valles precordilleranos, donde la agricultura pierde diversidad y fuerza, para redundar en que, a medida que más recursos hídricos son captados y usurpados desde las cabeceras de los ríos y quebradas, menos agua escurre a los valles, con empobrecimiento evidente del campesinado aymara.

Si en el caso de captación de aguas del río Lauca los proyectos de generación eléctrica y de riego de Azapa se mantuvieron inalterables bajo los gobiernos conservadores (Alessandri), liberales (Frei), de izquierda (Allende), dictatoriales (Pinochet) y socialistas (Lagos), hay que señalar que en el caso de las fuentes de Chusmiza y de la desecación del río Loa, fue la normativa aprobada durante la dictadura militar, el Código de Aguas de 1981, que apresó un recurso vital, y al ser otorgado a minorías económicas precipitó el agotamiento de los embalses y arroyos. Con ello se quiere demostrar que el proceso de despoilamiento de Tarapacá y norte de Antofagasta y de desintegración de la etnia aymara en cuanto grupo con cultura y identidad propia, no fue natural, sino un proceso inducido.

REFERENCIAS

- Albó, X. 2003. *Pueblos indios en la política*. La Paz: Plural.
- Aldunate, C. 1985. "Desecación de las vegas de Turi". *Chungará*, 14, Arica: 135-139.
- Bauer, C. J. 2004. *Siren Song. Chilean Water Law as a Model for International Reform*. Resources for the Future, Washington D.C.
- Bengoa, J. et al. 2004. *La memoria olvidada. Historia de los pueblos indígenas de Chile*. Santiago: Publicaciones del Bicentenario.
- Bernhardson, W. 1985. "El desarrollo de recursos hidrológicos del Altiplano ariqueño y su impacto sobre la economía ganadera de la zona". *Chungará*, 14. 169-181.
- Castro, M. 1993. "El campesinato altoandino del norte de Chile". *Ciencia y conciencia en los Andes*. Santiago, Universidad de Chile, pp. 243-253.
- Cortez, H.G. 1993. "Disponibilidad, acceso y sistemas de tenencia de la tierra entre los aymaras del altiplano de la I Región de Tarapacá". *Ciencia y conciencia en los Andes*. Santiago, Universidad de Chile, pp. 277-281.
- Donoso, G. 1995. "Análisis del mercado de aprovechamiento de las aguas". *Panorama económico de la agricultura*, 100. pp.14-17.
- Electroandina 2005. "Memoria anual 2005". Electroandina, Santiago.
- Escalante, J. 2001. *Tiwanaku*. La Paz: Presencia.
- Figueroa, C. 2001. "Galerías filtrantes en el oasis de Pica: tecnología y conflicto social, siglos XVII-XVIII". Santiago: Universidad de Chile (tesis de grado).
- Gentes, I. 2000. "Culturas étnicas en conflicto – el Código de Agua y las comunidades indígenas de agua en el Norte Grande (Chile)". *Revista Américas*, 16 (4), pp.7-50.

- Gentes, I. 2001. *Derecho de agua y derecho indígena. Hacia un reconocimiento estructural de la gestión indígena del agua en las legislaciones nacionales de los países andinos*. Santiago: CEPAL. (<http://www.eclac.cl/dnrni/proyectos/walir/doc/walir10.pdf>)
- González, S. 2002. *Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino (1880-1990)*. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
- Gunderman, H. K. 1997. "Acerca de cómo los aymaras aprendieron el castellano (terminando por olvidar el aymara)". *Estudios Atacameños*, Antofagasta, 12, 97-113.
- Habit, M. 1985. *Estado actual del conocimiento sobre Prosopis tamarugo*. Arica: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
- Hidalgo, J. 1985. "Proyectos coloniales inéditos de riego del desierto: Azapa (Cabildo de Arica, 1619); Pampa de Iluga (O'Brien, 1765) y Tarapacá (Mendizábal, 1807)". *Chungará*, 14, 183-222.
- INDAP, 1997. *Código de Aguas y normas complementarias*. Santiago: Servicio de Riego Campesino del Instituto de Desarrollo Campesino. Disponible en el sitio (http://enlaceagricola.indap.cl/Intra_riego/orga_reg/cont_cod.html)
- INE, 1997. *Censo Nacional Agropecuario*. Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago.
- INE, 2000. *Estadísticas del Medio Ambiente*. Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago.
- INE, 2002. *Censo de Población y Vivienda*. Santiago: Instituto Nacional de Estadística.
- Larrain, H. 1987. *Etnogeografía*. Santiago: Instituto Geográfico Militar.
- Lewin, P. 2003. *Análisis de la eficiencia del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas en Chile*. Santiago: FAO. Disponible en (www.rlc.fao.org/prior/reconat/pdf/lewin.pdf)
- Lorentsen, L.G. y A. Barcacena. 2005. *Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile*. OCDE/CEPAL, Santiago.

- Madaleno, I. M. 2004. *Aymara Indians in Chile: Water Use in Ancestral Cultures at Odds with Water Rights in Modern Times*. Berlin: Deustcher Tropentag & Humboldt University, pp. 1-8. (<http://www.tropentag.de/2004/abstracts/full/33.pdf>)
- Madaleno, I. M. 2007. "The Geopolitics of Thirst in Chile – New water code in opposition to old Indian ways". In Juuti, P. S., Katko, T. S. & Vuorinen, H. S. (eds.) *Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation*. London: International Water Association Publishing, 447-461.
- Madaleno, I. M. & Gurovich, A. 2004. «Urban Versus Rural» no longer matches reality: an early public agro-residential development in peri-urban Santiago, Chile. In *Cities*, 21 (6), pp. 513-526.
- Melcher, G. 2004. *El norte de Chile: su gente, desiertos y volcanes*. Santiago: Universitaria.
- Millar, W. 2000. *Historia de Chile*. Santiago: Zig-Zag.
- MOP, 2003. Determinación de los derechos de aprovechamiento de agua subterránea factibles de constituir en los sectores de Calama y Llalqui, cuenca del río Loa, II región. En *Informe técnico*. Antofagasta: Departamento Administración Recursos Hídricos. 153.
- Murra, J. 1975. *Formaciones económicas y políticas del mundo andino*. Lima: I.E.P.
- ODEPA 2002. *Agricultura aymara y atacameña*. Ministerio de Agricultura, Santiago.
- Raggi, L.A. 1993. "La fauna altiplánica en el Altiplano". *Ciencia y conciencia en los Andes*. Santiago, Universidad de Chile, pp. 199-202.
- Rivera, S. 1985. "Una visión del lago Chungará". *Chungará*, 14, 131-134.
- Sánchez, J. 2005. *Gran Atlas de Chile: histórico, geográfico y cultural*. Santiago: Turiscom.
- Sánchez, A. y R. Morales. 2004. *Las regiones de Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

- Thomas, D. S. G. and N. J. Middleton. 1996. *Desertification: Exploding the Myth*. New York: Wiley.
- Ulloa, L. 2001. *El arte de tejer en Los Andes*. Santiago: Ediciones Universidad de Tarapacá.
- Van Kessel, J. 1985. "La lucha por el agua de Tarapacá: la visión andina". *Chungará*, 14, 141-155.
- Villagran, C., V. Castro, G. Sánchez, F. Hinojosa, C. Latorre. 1999. "La tradición altiplánica: estudio etnobotánico en los Andes de Iquique, Primera Región, Chile". *Chungará* 31(1), 81-186.
- World Water Forum. 2005. 4th World Water Forum /México (www.worldwaterforum.org)

El modelo económico chileno y su relación con Bolivia*

Máximo Quitral Rojas**

Resumen

La presente investigación forma parte de una indagación de años y pretende conectar las economías chilena y boliviana en un escenario favorable para el encierro geográfico del país vecino. Durante los regímenes militares chileno y boliviano, y el proceso de transición a la democracia acontecido en Bolivia, perduró en el tiempo una relación bilateral económica apartada de los conflictos políticos presente en la Historia de los Estados en cuestión. Esta dinámica relación fue fomentada desde los consejeros económicos de la junta militar criolla, los llamados *Chicago Boys*, quienes desarrollaron la externalización del modelo chileno para contener el alto grado de aislamiento internacional del régimen militar

Abstract

The present investigation forms part of an analysis of many years and intends to connect the Chilean and Bolivian economies in a favourable scenery for the geographical encore of the neighbour country. During the Chilean and Bolivian military governments, and the transition process to democracy occurred in Bolivia, a bilateral economic relationship isolated from political conflicts present in the history of the states in

- * Este trabajo se realizó para optar al grado de licenciado en Historia y Geografía, bajo el título de "Las relaciones político-económicas entre Chile y Bolivia: 1973-1989". Parte de estas ideas fueron expuestas en las II Jornadas Latinoamericanas de Relaciones Internacionales, Universidad Técnica Federico Santa María, junio de 2007.
- ** Máximo Quitral Rojas es Licenciado en Historia, Diplomado en Comunicación y Relaciones Internacionales por la Universidad Arturo Prat (Unap), Diplomado en Metodologías e Intervención Social por la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y Profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile

question, remained in time. This dynamic relation was promoted from the economical advisors of the military, the so called Chicago boys, who developed the externalisation of the Chilean model to contain the international isolation of the military government

1. La apertura económica de Chile

La historia diplomática entre Chile y Bolivia está marcada por el conflicto, lo que ha generado la aparición de innumerables artículos que abordan dicha situación. Pero al margen de que los Estados en estudio carezcan de relaciones diplomáticas formales o permanezcan en el tiempo dificultades históricas no resueltas, lo cierto es que se logró conservar una vinculación económica valiosa y propugnada principalmente por actores privados. Elementos como “ la vecindad geográfica, las distintas dotaciones de recursos naturales, las vinculaciones físicas o la relevancia que asumen los puertos chilenos” (Seoane, 1997) contribuyeron a afianzar esta característica.

A partir de lo anterior, los nexos económicos alcanzados por los privados durante el tiempo estudiado dieron muestras de solidez, ya que fueron capaces de mantenerse al margen de las enemistades chileno-bolivianas presentes desde 1962. La fluidez de dicha relación favoreció a ambos gobiernos y pudo mantenerse dinámicamente, incluso después de la gran ruptura político-diplomática acontecida en 1978 por parte de Bolivia.

Dada aquella particularidad de las relaciones internacionales económicas de Chile y Bolivia es que se ha comenzado esta investigación que pretende analizar este vínculo, específicamente entre los años setenta y fines de los años ochenta. Sin embargo, los estudios históricos referidos a las relaciones bilaterales aludidas desde un enfoque económico para el periodo 1973-1990 son bastante escasos. Más que hablar de las relaciones económicas entre los países aludidos, los trabajos apuntan a los conflictos geopolíticos que han mantenido los gobiernos o simplemente a describir sus modelos político-económicos, pero las investigaciones no han profundizado en los nexos económicos formales resultantes de una relación -en apariencia- absolutamente opuesta y que, bajo la dinámica anterior, tiene trascendencia por el rol de consonancia asumido para los regímenes. La unión alcanzada por las políticas económicas en el ámbito de las relaciones internacionales entre Chile y Bolivia, serían, posteriormente, ahondadas a partir de 1985.

Si bien los textos recopilados para esta investigación no se han remitido a profundizar la relación económica chileno-boliviana, hay artículos que muestran la esencia de las políticas económicas de corte neoliberal, destacando en ese sentido Edwards (1984), Larroulet (1994), Fontaine (1993) y Ffrench-Davis (2001), entre otros. La particularidad de estos escritos es que alcanzan sólo una dimensión localista de caracterización del modelo. Sin embargo, gracias a sus comentarios de la puesta en práctica de aquellas políticas económicas, es posible comprender la magnitud experimentada por la apertura económica de Chile y la praxis sustentada por el régimen de Pinochet. Probablemente, por desconocimiento del tema, se puede pensar que Chile y Bolivia, producto de sus quiebres políticos exhibidos en el período en estudio, no concretaron vinculaciones económicas formales, aunque los antecedentes recopilados en los anteriores estudios realizados por este investigador sugieren lo contrario.

Chile y Bolivia en el período estudiado mantuvieron los encuentros empresariales en una actitud de franca normalidad y desconocimiento de antiguos problemas políticos, históricos y militares, que por años han tendido a amplificar una mirada separatista de la agenda bilateral. La realidad económica señalada muestra una conexión dinámica no afectada por roces de índole político.

Los escritos interesados en mostrar esta panorámica son escasos, puesto que el discurso se ha centrado en maximizar cuestiones históricas por sobre la realidad económica chileno-boliviana. A pesar de la limitante historiográfica, Alfredo Seoane consigue aportar a la discusión del tema señalando que:

... las relaciones económicas se constituyen en el elemento más importante de vinculación entre los dos países; ellas no se agotan en el creciente intercambio de bienes, pues en los últimos años se observa una afluencia significativa de capitales chilenos hacia Bolivia (Seoane, 1997)

Definitivamente existió una asociación económica en el período escogido en esta investigación -cuyo grado de dependencia económica es mayor para Bolivia-, la cual fue consolidada a través de un Acuerdo de Alcance Económico Parcial (AAP). Dicho acuerdo, establecido en 1983, sostuvo que:

“... Bolivia y Chile, en su calidad de países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), suscribieron el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP No 27) Los Acuerdos de Alcance Parcial, a diferencia de los de Complementación Económica, se limitan al intercambio de preferencias comerciales (Seoane, 1997)

Los mecanismos de vinculación económica que se destacaron dieron cabida a nuevos convenios. A uno de ellos se lo conoció como Nóminas de Apertura de Mercados (NAM), y significó que:

Chile concedió a Bolivia una desgravación arancelaria de 100% para 10 productos. Esto vino a ratificar preferencias arancelarias anteriores, como la del AAP No 27 donde se otorgaron 53 preferencias a Chile y 104 a productos bolivianos (Seoane, 1997)

Ya en los inicios de la década del ochenta los lazos económicos entre Chile y Bolivia se fueron profundizando, aunque el modelo económico boliviano fue absolutamente asimétrico con el chileno, ya que el primero generó el denominado Estado del '52, mientras que en los setenta el régimen militar chileno ya había implementado una economía de mercado, pero de fuerte participación estatal. Este modelo económico se vincularía con el chileno de manera internacional desde 1973 y se prolongaría hasta 1990, fecha de término de la presente investigación. La razón de esta dinámica, a juicio de Miguel Villarroel Nikitenko, se debió al papel de capitalismo de Estado asumido por la administración central en los cincuenta, cuya característica principal fue que:

el Estado se atribuía el principal papel en la generación y distribución del excedente económico, ejerciendo de esta forma un control directo de las principales actividades económicas, que por la época se hallaban ligadas a la extracción y venta de recursos naturales (Nikitenko, 2002)

El Estado benefactor que sugiere el sociólogo boliviano comenzó a gestar la instalación de un sistema capitalista con fuerte presencia en La Paz. El modelo económico estatista y desarrollista instalado en 1952 en Bolivia se impuso efectivamente en el país vecino, pero se debilitó con la ascensión al poder por parte del general Hugo Banzer Suárez (1971-1978). De todas formas hay que destacar el apogeo económico alcanzado por

Bolivia, fenómeno atribuido, como sostiene Carlos Mesa, principalmente a “... los precios favorables de nuestras principales materias primas de exportación 1974-1975” (Mesa *et al.*, 2003).

Dicha situación se extendió por un largo periodo de tiempo y benefició directamente a la administración del general Bánzer. Sin embargo, la explicación de la duración del mencionado modelo se encuentra en la inestable gobernabilidad boliviana, que impidió romper con el pasado estatista, ya que entre golpes de Estado, juntas militares y convulsión interna, los presidentes se vieron de hecho y de derecho imposibilitados de aplicar modificaciones al modelo económico. Ahora bien, el proceso de *boom* económico que vivió Bolivia fue totalmente extraordinario, puesto que potenció la zona de Santa Cruz y proporcionó a esta ciudad “...un significativo aumento en la producción, y por primera vez en la historia de Bolivia la nación llegó a ser un exportador de productos agrícolas” (Klein, 1982).

Lo apreciable de este proceso fue, por una parte, el ostensible aumento de las exportaciones regionales de Bolivia y, como segundo elemento, durante la administración banzerista este país logró acuerdos comerciales de importancia con su similar brasileño por sobre Argentina, ya que el modelo político-económico del Brasil era el ejemplo a imitar. Sin embargo, se produjo una seria contracción económica en la historia económica boliviana, que vino a empañar la opulencia del momento. Klein (1982) se refiere en este sentido a que:

— el conjunto de las exportaciones era muy variado con los países del LAFTA y Asia iba adquiriendo mayor importancia. Estos cambios fundamentales ocurrieron sólo a principios de los '70, ya que a mediados de los años '60 EE.UU. y Europa occidental entre ellos daban cuenta de entre el 90 y 95 % del valor de todas las exportaciones y entre el 70 y 75 % de todas las importaciones. A mediados y finales de los '70 estas cifras van bajando hasta el 55 y 60 % de las exportaciones y el 45 y 50 %” de las importaciones respectivamente” (Klein, 1982)

Visiblemente el *boom* económico entró en un proceso de contracción, debido a la particular situación internacional de esos años (aislamiento internacional y crisis económica mundial), lo que llevó a la economía boliviana a reforzar una asociación económica con Chile. El resultado de esta singular situación económica posibilitó el

definitivo entendimiento de las políticas económicas de Chile y Bolivia en 1985, debido a que este modelo se impuso prácticamente en todo el orbe y " Bolivia no sólo no fue la excepción, sino que fue una de las primeras naciones del continente en aplicar un plan de ajuste económico que orientaría al país a la economía abierta o de mercado" (Mesa et al., 2003)

Volviendo a lo netamente local, el nuevo modelo económico logró imponerse definitivamente y borrar todo pasado de estatización. El futuro económico propuesto para entonces, que fue cimentado bajo los postulados teóricos de los *Chicago Boys*, apuntó a organizar la nueva estrategia de conducción económica sobre la base de la apertura económica. Este sector tecnocrático de la economía chilena terminó con el papel activo del Estado socialista chileno, que a juicio de los economistas representaba trabas e impedimentos para el normal funcionamiento del mercado. Estos obstáculos "() habían terminado por asfixiar la libre iniciativa de los particulares " (Vergara, 1984), cuestión no menor a la hora de justificar las virtudes de contar con una economía de mercado. La "irresponsabilidad del marxismo en el caos económico" sustentado por el gobierno anterior, provocó una realidad económica nefasta y cuya única vía de solución para el periodo, estaba determinada por un cambio radical en la forma de la gestión económica. La nueva administración "... debía centrar sus esfuerzos en la aplicación de una política económica de "emergencia" que pusiera término al caos heredado y restableciera los principales equilibrios macroeconómicos" (Vergara, 1984)

Los militares asumieron como tarea primaria la liberalización de los precios, la devaluación de la tasa de cambio y la regulación de los salarios. Cada una de estas medidas tuvo como reacción inmediata frenar el descontrol fiscal y las continuas alzas en el nivel de los precios. En el comienzo de la ejecución de la nueva política económica chilena, la oficialidad de la Armada comenzó a colaborar en la preparación de estas nuevas medidas económicas, específicamente el ex marino Roberto Kelly, quien estableció estrechos vínculos con Agustín Edwards. Sin embargo, esta amistad dio paso a serias disputas por el manejo económico entre gremialistas y militares. En este sentido, la relación cívico-militar se fue deteriorando, debido a los intereses programáticos de uno y otro sector, cuestión que fue resuelta por Pinochet con la complicidad de Jaime Guzmán. Para la historiadora Sofía Correa, el tema se presentó de la siguiente manera:

— cuando los militares dan el golpe de Estado y derrocan a Allende, la Armada, a cargo de la conducción económica, aporta su equipo de especialistas con un programa ya elaborado, los que a su vez se trasladan a ocupar cargos como asesores de los militares en temas económicos. Como es sabido, no fue sino hasta dos años más tarde que los economistas neoliberales se impusieron al interior del régimen, derrotando a los militares nacionalistas que aspiraban a crear un orden económico más corporativista donde el Estado tuviera un rol relevante, y a los economistas keynesianos que asesoraban a los militares en asuntos de política económica (Correa, 2005).

La intención de los encargados de dirigir la economía chilena era implementar una economía con un marcado sentido liberal, con mecanismos de privatización de las empresas públicas, total apertura al mundo exterior y penetración de capitalistas foráneos. La ortodoxia de los egresados de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes habían realizado estudios en EE.UU y a su regreso asumido el control del Departamento de Economía de la misma Universidad, se manifestó en la influencia ejercida desde el interior de esa casa de estudios hacia circuitos políticos, empresariales y comunicacionales. El diario “El Mercurio” y la revista “Qué Pasa” fueron instrumentos de ideologización y mediación entre el mundo académico y el ámbito empresarial, al punto de contribuir en el nacimiento del texto ancla del neoliberalismo local: “El ladrillo”:

El 11 de septiembre las fotocopadoras de la Editorial Lord Cochrane, cuyo presidente es Hernán Cubillos, representante máximo de Agustín Edwards y muy relacionado con varios economistas del Plan, trabajan sin parar imprimiendo ejemplares del extenso documento, familiarmente llamado “El Ladrillo”. Antes de mediodía del miércoles 12, los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas que ejercen responsabilidades de Gobierno tendrán el Plan encima de sus escritorios (Correa, 2005)

La profunda transformación de la economía chilena gracias a la puesta en funcionamiento del nuevo modelo económico fortaleció la conexión internacional con economías regionales e internacionales, particularmente Estados Unidos y, además, vino a contrarrestar el aislamiento político que experimentó el régimen de Pinochet, debido a la imagen negativa que tenía éste.

El "regionalismo abierto" del pinochetismo rompió drásticamente con la "intervención del Estado en las áreas de producción, distribución y finanzas, los controles de precios, salarios y tasas de interés (.), las exenciones tributarias: los tipos de cambios múltiples y los aranceles de importación" (Muñoz, 1986) Estas medidas robustecieron la nueva política económica tendiente a restarle injerencia al Estado en la conducción de la economía y permitir la ubicación de actores no estatales en este nuevo escenario. Los empresarios y los militares comenzaron a intervenir en la economía rápidamente, gracias a las recomendaciones dadas por los expertos económicos de la época y el apoyo de nuevas ideas provenientes desde los Estados Unidos. En este contexto, "Los militares y los grupos económicos privados emergieron como los actores claves del nuevo orden. Estos últimos tuvieron desde un principio particular injerencia en la concepción y supervisión técnica del nuevo proyecto socioeconómico, en tanto que los primeros se hicieron cargo de implementar el plan . ." (Muñoz, 1986)

Fue así como se articularon las redes de asociatividad económica para lograr el máximo de confianza en los circuitos empresariales foráneos y mostrar una imagen económica externa exitosa, que desplazara al cuestionado modelo político doméstico del régimen autoritario, tan discutido por esos años. Asimismo, existen antecedentes de la participación de un conjunto empresarial que elaboró y preparó la ejecución del sistema económico castrense y que tuvo su aparición posterior al golpe militar. De acuerdo a un informe de la CIA

... esos grupos estuvieron involucrados en la preparación de un plan económico global inicial que sirvió de base a las más importantes decisiones económicas de la junta. Según una fuente, una de las principales instituciones involucradas en la preparación de dichos planes, con financiamiento de la CIA, habría sido el Instituto de Estudios Generales, cuyo presidente en 1973 era Pablo Barahona, quien más tarde ocuparía altos cargos en el equipo económico del gobierno castrense (Dinges y Landau, 1986)

La consolidación del modelo económico fue la tarea primordial de los partidarios de la propuesta de corte aperturista. Además, se debe sumar la aplicación rigurosa de la ideología económica norteamericana. El éxito en esta materia permitió a los cercanos a la apertura económica consolidar el modelo e impedir la aparición de propuestas económico-sociales "alternativas" a lo que se venía gestando en los círculos intelectuales

y empresariales de la época. La legitimización del programa económico se produciría de manera natural, apoyada en cifras azules y contrarias a lo ocurrido con el gobierno anterior, y gracias a cierta asistencia económica lograda por los personeros de gobierno desde el extranjero.

La apertura económica se adoptó como misión esencial del nuevo régimen dictatorial y la libertad económica se convirtió en un factor discursivo muy utilizado por los gestores del plan, convirtiendo la "...expansión de los mercados y el consiguiente repliegue del Estado en una condición necesaria (...) la consolidación del modelo económico. adquiere el carácter de obligatorio... un imperativo ético" (Vergara, 1984).

Alcanzada la hegemonía del aparato económico por parte de los impulsores del nuevo modelo económico local, la gestión posterior tuvo como objetivo externalizar el nuevo sistema económico y establecer socios comerciales para equilibrar la desgastada imagen del pinochetismo. La búsqueda de asociados regionales fue determinante cuando el aislamiento se estaba convirtiendo en una situación delicada. Así, todas las medidas aplicadas para alcanzar ese objetivo, tales como el gasto público disminuido y el retorno de las empresas expropiadas al sector privado, fueron bien recibidas por los inversionistas extranjeros. En sintonía con lo propuesto en materia económica, "El deseo del gobierno chileno de atraer capital foráneo se vio refrendado por la dictación, en 1974, del Decreto-Ley 600, Nuevo Estatuto de Inversión Extranjera, que estableció términos favorables para la llegada de nuevos capitales al país" (Muñoz, 1986)

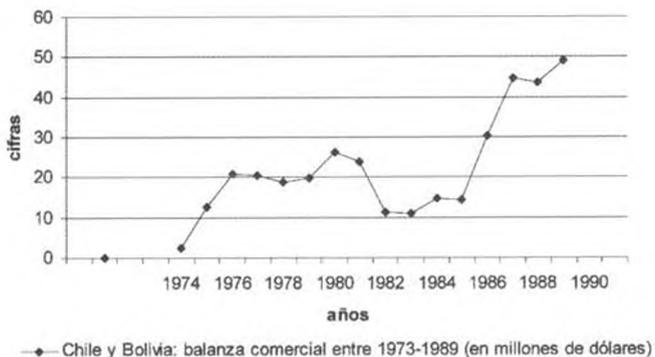
Ese impulso a las nuevas medidas económicas fortaleció las reuniones empresariales en la región y permitió al régimen de Pinochet consolidar el modelo económico gracias a los buenos resultados obtenidos. Sin embargo, en el plano político no tuvo buenas experiencias y jugó un rol crucial el acercamiento económico subregional, pues la carencia de vínculos diplomáticos con otras naciones acrecentó la soledad política y dejó en completa orfandad política a los militares. Por ende, la opción de ejercer relaciones diplomáticas fue sustituida por una "paradiplomacia" empresarial.

Los grupos de apertura económica consideraron pertinente dirigir la política internacional hacia ciertos actores políticos ligados al mundo empresarial, quienes ejercerían una fuerte cuota de influencia política en sus respectivas naciones y así balancear el aislamiento político que experimentó la dictadura militar.

2. Bolivia en el escenario económico chileno

En el anterior marco de conexión económica se debe incluir a Bolivia como socio estratégico para revelar al exterior que no se estaba tan desamparado políticamente. Y mejor aun si ese "amigo político" era un vecino con el cual existían temas pendientes por resolver. La orientación económica boliviana en apariencia no tenía cercanía con el sistema chileno, pero la participación del Estado vecino en el andamiaje de la economía mundo permitió la conexión de empresas de corte aperturista entre Chile y Bolivia. Bajo esta lógica económica, durante la dictadura banzerista "se aprobó una ley de inversiones mucho más liberal; se salió en busca de voluminosa ayuda exterior- que se obtuvo- para el personal y el material militar" (Klein, 1993). La orientación de apertura y de cercanía con similares propuestas en la región vino a ser refrendada con la llegada al poder de Banzer, aunque para el autor antes citado lo anterior ya se plasmaba bajo la dirección administrativa de Barrientos desde su primer periodo en el poder (1964-1965).

Gráfico 1



Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos del Banco Central de Chile (Microfichas) años Indicados.

La curva económica expuesta presenta una clara tendencia al alza, situación que fue absolutamente favorable para Chile, siendo un punto de inflexión lo ocurrido en los años ochenta, época que se destacó por mermar las arcas fiscales de América Latina en su conjunto. Chile no fue la excepción y los datos recopilados para esta investigación

económica permiten reflexionar sobre el papel asumido por los empresarios en este escenario económico. La orientación fue relacionarse con el empresariado boliviano y posicionar productos de diversa índole que reafirmaran lo exitoso del modelo implementado en Chile. La postura de la externalización de la economía chilena significó para el régimen de Augusto Pinochet encontrar una instancia de tranquilidad para estos nuevos actores, quienes, en vista de las facilidades dadas para insertarse en la economía del mundo, aprovecharon dicho momento para estrechar vínculos con sus pares bolivianos.

Por su parte, Hugo Bánzer continuó con el modelo de nacionalismo desarrollista, pero atenuándose con el correr del tiempo y sufriendo su erosión definitiva en los años ochenta, producto de la crisis del precio del estaño. Sin embargo, la región sirvió de punto de enlace económico para un sistema de gobierno deslegitimado por amplios sectores políticos locales, que observó el desplome del *boom* económico germinado en los setenta. Si por aquellos años "...el crecimiento promedio había sido del 4.7% anual y la inflación de sólo el 15.9%, en los ochenta el decrecimiento promedio fue de -2.3% y la inflación de 196.9% anuales. En 1983 la inflación rompió la barrera de las tres cifras, llegando en 1984 a un increíble 2.177% anual. La inflación del primer semestre de 1985 equivalió a un 8.170% anual" (Klein, 1993)

Cuadro 1
Inflación en Bolivia: 1982-1989

Año	Inflación
1982	123%
1983	276%
1984	1.282%
1985	8.767%
1986	65.99%
1987	10.67%
1988	21.52%
1989	16.00%

Fuente: INE y Banco Central de Bolivia, en Mesa (2003: 740)

Cuadro 2
Exportaciones y crecimiento del PIB boliviano: 1980-1985

Exportaciones (mill. U\$)			Crecimiento del PIB
1980	1.037	(100%)	1980 + 0,6
1981	984	(94,88%)	1981 + 0,92
1982	898	(86,59)	1982 - 4,36
1983	817	(78,78%)	1983 - 4,46
1984	782	(75,40%)	1984 - 0,60
1985	672	(64,80%)	1985 - 0,97

Caída Global del 35%

Fuente: INE y Banco Central de Bolivia, en Mesa (2003: 741).

Los datos cuantitativos que anteriormente se entregan revelan la alicaída economía boliviana en la década de los '80s. De todas formas, estos índices se encuentran directamente ligados al momento de la historia latinoamericana, en que las arcas fiscales de la región sufrieron retrocesos económicos. Bolivia y Chile vivieron este proceso simultáneamente, pero de igual forma, los nexos económicos continuaron, aunque en menor medida.

La solución inmediata a la golpeada economía boliviana se produjo con la llegada al poder -por cuarta vez- de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y su nueva política económica de corte aperturista. A esa altura el complicado panorama económico impulsó a modificar el pasado nacionalista por una economía de mercado, lo que contribuyó enormemente a estrechar lazos económicos con empresarios regionales. En ese panorama, Chile se ajustaba a las pretensiones exportadoras bolivianas. El período de gobierno de sentido neoliberal se conoció como democracia de mercado

donde la política exterior primero se organizó en procura de asegurar la viabilidad financiera de Bolivia para luego participar activamente de los procesos de integración regional y subregional. La Nueva Política Económica, inaugurada durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, reduce la participación del Estado en los procesos productivos, instala a los agentes del mercado en la asignación de recursos y abre la economía a los flujos externos" (Sánchez, 2004).

Esta fórmula de diplomacia empresarial boliviana tuvo como objetivo acercarse hacia las nuevas economías regionales con un sentido de competitividad en los escenarios

internacionales. Dentro de esta misma lógica, "La liberalización comercial ha procurado elevar la competitividad del sector transable, promoviendo la apertura y la integración de Bolivia al comercio mundial" (Sánchez, 2004) (falta número de página)

Justamente el impacto de las reformas estructurales apuntó a fortalecer e incentivar las exportaciones de Bolivia y competir con el flujo de importaciones que llegaban al país procedentes del Norte. La externalización de la economía, especialmente en los setenta, fue considerada como un imperativo de la política económica de Bánzer. Y paralelamente a esto, Chile asumió como una característica central y de estrategia política abrir la economía desde la instalación en el poder de la Junta Militar.

Desde que asume la Junta Militar y fundamentalmente desde mediados de la década pasada, la economía chilena comienza a sufrir una serie de transformaciones impulsadas por la propia dictadura (...) que tienen como destino abrir totalmente la economía al resto del mundo. Ello ha implicado empujar una producción destinada fundamentalmente a la exportación, privilegiando (...) empresas que están en condiciones de exportar..." (Estay, 1988).

¿Cómo se hizo tangible esta innovación económica del régimen de Pinochet? A continuación se proporcionan algunos datos estadísticos para apoyar lo antes señalado.

Al considerar las cifras presentadas en el cuadro anterior se observa la persistencia de una importante relación económica en el tiempo y –aparentemente- distante de la difícil historia política presente para los países en estudio. Evidentemente los datos son menores si se realiza una comparación económica con Estados Unidos, con Argentina o Brasil; sin embargo, la reflexión que emerge de este cuadro tiene relación con la importancia alcanzada por Bolivia en la economía nacional. Esta relación apoyó a que Chile y Bolivia experimentaran una prolongación de sus relaciones económicas, garantizadas desde el aparato estatal y reforzadas por los grupos económicos locales. Al analizar de manera detallada el cuadro presentado para el primer año del régimen militar chileno, las importaciones son mayores al ser cotejadas con las exportaciones. Una explicación presumible supondría que existió una menor experiencia de negociación económica desde el Estado chileno y, por otro lado, la tecnocracia local hasta ese momento no se había instalado férreamente en los ambientes económicos del régimen.

No obstante, la realidad económica sufriría una variación superlativa entrada la década de los años ochenta, cuando en Chile el "regionalismo abierto" fue incitado a desplegarse y posicionarse definitivamente como fórmula de inserción internacional

Cuadro 3
Balanza comercial entre Chile y Bolivia en comparación al resto de América, 1974
(en millones de dólares)

País	Importación	Exportación	Balanza
Argentina	323,9	169,3	(154,6)
Bolivia	28,0	2,4	(25,6)
Brasil	84,9	144,0	228,9
Colombia	19,9	37,7	17,8
Cuba	4,7	0,1	(4,6)
Ecuador	78,1	3,6	(74,6)
México	29,9	22,7	(7,3)
USA	415,7	286,1	(129,6)
Panamá	2,9	1,0	(1,9)
Paraguay	2,37	0,8	(1,5)
Perú	25,9	15,7	(10,2)
Uruguay	8,2	4,6	(3,6)
Venezuela	24,0	8,5	(15,5)
Canadá	39,9	64,7	24,8
Total A. Latina	1.088,5	761,2	(327,8)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos del Banco Central de Chile (microfichas), año indicado.

El presente cuadro es opuesto a lo advertido para 1974, ya que las importaciones desde Bolivia a Chile son menores durante un decenio de relaciones económicas, presentando una balanza comercial positiva para Chile. Esto le dispensa una responsabilidad inferior a Bolivia dentro del patrón económico nacional, aunque la exposición de los datos permite colegir que dicho país encarnó dimensiones económicas interesantes para el periodo. Además, el peor momento en la historia económica de este país ocurrió en los años reseñados anteriormente y perjudicó profundamente sus conexiones económicas mundiales. Hay que agregar además que las medidas sanitarias nacionales se caracterizan por su elevada rigurosidad, y eso probablemente empeoró lo anterior. A pesar de esta desigual importancia de los diversos productos bolivianos,

Cuadro 4
Balanza comercial entre Chile y Bolivia en
comparación al resto de América, 1984
(en millones de dólares)

País	Importación	Exportación	Balanza
Argentina	160,9	116,7	(44,2)
Bolivia	6,6	14,7	8,1
Brasil	296,4	227,5	(68,9)
Colombia	21,5	43,0	21,5
Cuba	46,0	27,8	(18,2)
Ecuador			
México	21,8	8,9	(12,9)
Panamá	1,0	5,3	4,3
Paraguay	36,5	4,5	(32,0)
Perú	49,2	44,9	(4,3)
Uruguay	9,3	8,7	(0,6)
Venezuela	251,8	40,2	(211,6)
USA	48,8	951,2	902,4
Canadá	7,3	31,1	23,8
República Dominicana	0,0	4,8	4,8
Total A. Latina	957,1	1.529	571,9

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de los datos del Banco Central de Chile (Microfichas), año indicado.

es fundamental señalar que la dimensión económica que se ha destacado en los países estudiados significó una integración, pero no en aspectos políticos. El tipo de integración que se detecta es económica:

Es por ello que ambos países han mantenido, en los últimos cuarenta años, una vinculación peculiar, inédita en el contexto sudamericano, definida como una relación de "no relación diplomática". Pese a ello, esta peculiar relación contiene una significativa agenda de cooperación en integración bilateral (Sánchez, 2004).

Las diferencias diplomáticas entre Chile y Bolivia, presentes en toda la relación bilateral desde el siglo XIX en adelante y acrecentadas en las dictaduras militares de Pinochet y Bánzer, no fueron excusa para conformar una relación económica "normal", mantenida al margen de la "suma cero" en sus relaciones políticas internacionales:

“Ya en el periodo en estudio, el comercio bilateral demostró un gran potencial de integración entre actores no estatales que, detrás de intereses privados, mostraron cómo era posible articular a ambos países sin el fantasma de los conflictos históricos y sin la amenaza de verse a sí mismos como enemigos. Aquí surge la imagen del otro como un socio y en este contexto la complementación económica abre una esperanza de que ella también empuje a la complementación política. Como sabemos, esto no llegó a ocurrir en el periodo que aborda esta tesis” (Quitral, 2005)

El siguiente planteamiento también genera consenso en las investigaciones bolivianas. Por ejemplo, José Rocabado Sánchez asegura que los contactos económicos han sido muy fuertes para ambas naciones, hasta el punto de establecer una interesante vinculación al margen de la política. Lo singular de sus palabras es que señala que “... los nexos entre ambos vecinos han alcanzado un elevado nivel de “normalidad” y lo que quedaría pendiente sería el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre sus gobiernos” (Rocabado, 1995)

Desde la aplicación de políticas económicas entre ambos países en los setenta, como periodo inicial para esta investigación, se observa la intención de externalizar las economías y participar activamente de la economía del mundo. Para el caso chileno, eso tuvo como función contrarrestar la debilidad internacional que en términos políticos enfrentó el régimen pinochetista, además de adquirir socios comerciales regionales, entre los cuales Bolivia representó un país estratégico, tanto en lo político como lo económico. Dicho país se ajustaba a las aspiraciones del nuevo modelo económico local, que proyectó una orientación de “regionalismo abierto”, particularmente por los nuevos conocimientos económicos introducidos por los economistas nacionales.

Los regímenes militares de Chile y Bolivia sostuvieron fluidas relaciones económicas. La discusión de la mediterraneidad boliviana, los cuestionamientos exógenos a las medidas internas aplicadas por los jefes de Estado y el elevado aislamiento internacional de Pinochet y Bánzer no entorpecieron las reuniones económicas del empresariado y personeros estatales. Lo anterior se tradujo en encuentros de la comisión mixta sobre transportes y rebajas arancelarias, reuniones de la comisión técnica de Chile y Bolivia para resolver temas de transportes o simplemente para implementar un equipo mixto encargado de promover y estrechar lazos económicos entre ambos países.

Los actores no estatales se mantuvieron al margen del conflicto y se aislaron de la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales. Lo anterior significó que las actividades comerciales estuvieran por sobre los planteamientos ideológicos y las relaciones económicas generadas durante este periodo fueran concretas. Chile y Bolivia mantuvieron tales acercamientos, y el alto aislamiento internacional de Chile y Bolivia fue fundamental para afianzar la actividad económica intraregional. La relación económica fue dada más que buscada.

Strange (1994) sostiene que en este periodo fueron las empresas las que lideraron los acercamientos entre los actores no estatales, ya que ellas son los actores que influyen tanto en el curso de las relaciones transnacionales como en las relaciones internacionales. Así, los Estados dieron paso a la consolidación de las relaciones económicas por sobre las políticas, destacando la participación de los empresarios como exteriorizadores del modelo económico chileno. En ese momento el factor económico fue relevante en la toma de decisiones. Precisamente los cambios estructurales que sufrió la economía internacional desde mediados de los setenta y principios de los ochenta determinaron tres proposiciones que, a juicio de Strange, son de vital importancia para entender las nuevas vinculaciones económicas de los Estados:

“La primera de ellas señala que muchos procesos aparentemente desconectados en la política y negocio internacional tienen raíces comunes y son resultado de cambios estructurales ocurridos en la economía mundial. Segundo, como consecuencia de estos cambios se ha producido un cambio fundamental en la naturaleza de la diplomacia. Hoy los gobiernos deben negociar no sólo con otros gobiernos sino también con empresas. Finalmente, existe una creciente importancia de las empresas como actores que influyen tanto en el curso de las relaciones transnacionales como en el estudio de las relaciones internacionales (Strange, 1994).

Es por esta nueva dinámica en las relaciones internacionales que los Estados de América Latina entraron en un proceso de competencia extremadamente fuerte con el objetivo de incrementar su participación en las nuevas reglas del juego impuestas por el mercado económico internacional. Bajo este efecto centrifugo las empresas privadas ocuparon un papel trascendental a la hora de modelar los lineamientos económicos y compitieron paralelamente con el Estado central. Como el tema económico se posiciona de las agendas de los Estados en este nuevo escenario, con

un marcado acento integracionista. “... es cada vez más difícil para los gobiernos aislar una determinada política, de tal forma que su implementación no interfiera en otra” (Strange, 1994).

Durante la década de los ochenta se consolidó la fórmula de la apertura económica en ambos países, impulsándose de esa manera la participación del empresariado como un nuevo actor político para afianzar las relaciones surgidas entre el sector privado y los Estados en cuestión. El modelo económico chileno se abstrajo del quiebre diplomático entre Chile y Bolivia y posibilitó el acercamiento empresarial. A partir de lo anterior, el citado modelo asumió las características de “libre determinación de los precios, pleno derecho de la propiedad privada, apertura al comercio exterior, para que todos, productores y consumidores, aprovecharan las ventajas comparativas y un Estado subsidiario y responsable” (Wisecarver, 1983).

Según Ffrench-Davis (2001), el objetivo era que

...se eliminaron prácticamente la totalidad de las restricciones distintas a las arancelarias y los aranceles se redujeron rápidamente desde los altos niveles imperantes en 1973... hasta un arancel uniforme de 10% para todo tipo de bienes, vigentes desde 1979. Asimismo, en virtud del proceso de liberalización del intercambio, se suprimieron mecanismos, tales como las bandas de precios, dirigidos a atenuar la transmisión de la inestabilidad externa hacia la economía internacional. Con el objetivo de abrirse indiscriminadamente frente al exterior, Chile se retiró en 1976 del Pacto Andino” (Ffrench-Davis, 2001)

La eliminación de las restricciones arancelarias que habrían estado en aplicación antes de la dictadura militar dio paso a una profunda postura de integración económica con el mercado mundial. En ese plano, Wisecarver sugiere lo siguiente:

Paso a paso se liberaron las tasas de interés, se sustituyeron controles cuantitativos por reglas uniformes de encajes y márgenes y, aunque más lentamente, se permitió una creciente integración del mercado chileno con el mundial” (Wisecarver, 1983)

Por su parte, Edwards (1984) advierte que “... durante este período la autoridad económica chilena introdujo un programa novedoso de estabilización basado en el

hecho de que los vínculos de la economía con el resto del mundo habrían aumentado notablemente, debido a la liberalización del comercio" (Edwards, 1984).

Efectivamente existió una preocupación extrema por parte del selecto grupo de economistas chilenos por impulsar una economía abierta y con una real participación en el mercado mundial. En este sentido, Fontaine (1993) señala que:

Hacia 1973 la economía chilena estaba virtualmente cerrada al comercio exterior. La tarea de la reforma comercial era liberalizar las importaciones, reducir y unificar los aranceles con el fin de establecer las bases para un crecimiento económico liderado por las exportaciones (Fontaine, 1993).

La inserción económica chilena a través de las exportaciones fue uno de los pilares fundamentales para intentar consolidar el modelo chileno instaurado por Pinochet. Coincidiendo con lo anterior, Larroulet (1994) señaló que "...la economía chilena inició a mediados de los setenta una nueva estrategia de desarrollo basada en el mercado libre y en la apertura al mercado y en la apertura al exterior". Junto a ello menciona que "... desde los inicios del programa se ratificó el concepto de una economía de mercado libre y abierta al comercio internacional" (Larroulet, 1994).

En términos generales el modelo económico de Chile se dirigió- en el ámbito internacional- a establecer relaciones económicas con otros Estados (Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, EE UU , etc.) y de esa manera insertar al régimen de Pinochet en el contexto internacional. Por su parte, el nuevo modelo económico boliviano se enfocó en la reducción del rol protagónico del Estado, el fin de la economía estatizada y el vuelco hacia un Estado regulador y no administrador. Ya hacia mediados de los ochenta, una fuerte crisis económica interna afectó al país producto del alto endeudamiento alcanzado por administraciones anteriores, lo que implicó una elevada deuda externa para Bolivia, cuyas raíces se encuentran en:

- 1 Las mencionadas bases artificiales de un capitalismo de estado.
- 2 Shocks externos -brusca subida de las tasas internacionales de interés y el derrumbe de los precios de estaño.
- 3 Inelasticidad de la oferta de los préstamos internacionales.
- 4 Un manejo inadecuado de las políticas macroeconómicas" (Chávez, 1991)

Este escenario motivó que, bajo el mandato de Víctor Paz Estensoro, se completara la instalación del modelo neoliberal, ratificado por el decreto 21060, de fecha 29 de agosto de 1985, que delineó la nueva estrategia económica. En ella participaron el entonces ministro de Planeamiento Gonzalo Sánchez de Lozada, Fernando Romero, Juan Cariaga, Eduardo Quintanilla y Jeffrey Sachs. El objetivo central de ese decreto fue: "lograr una estabilización monetaria y la derrota de la hiperinflación que, según el ministro de Planeamiento Gonzalo Sánchez Lozada, no era la principal tarea sino la única a emprender" (Mesa *et al.* 2003). Ésta sostenía: "1. Reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios. 2. Cambio real y flexible de la moneda. 3. Libre contratación, racionalización de la burocracia. 4. Liberalización total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda" (Chávez, 1991).

Estas medidas tendieron a controlar la alta participación del Estado en la conducción de la economía y particularmente en la creación de empleos públicos, remuneraciones e inversión. Como dato estadístico, "En la primera mitad de la década de los ochenta las empresas públicas ofrecían más del 25% de los empleos de la economía. La NPE redujo esta proporción al 16% del total y es plausible suponer que la privatización reduzca más aun la oferta de trabajo del sector público" (Chávez, 1991).

Cuadro 5
Empleo en el sector público. Empresas públicas y mixtas en Bolivia 1980-1990

Año	Total (1)	Empresas Públicas (2)	% (2/1)	Empresas Mixtas (3)	% (3/1)
1980	193.118	51.994	26.92	3.199	1.66
1981	199.962	53.417	26.71	3.226	1.61
1982	204.016	52.600	25.78	3.288	1.61
1983	224.435	56.283	25.08	3.435	1.53
1984	235.922	57.991	23.76	3.167	1.21
1985	245.579	58.347	23.76	3.167	1.29
1986	229.983	51.671	23.38	3.156	1.43
1987	212.442	38.171	17.97	3.156	1.49
1988	204.735	32.210	15.73	3.636	1.78
1989	209.082	31.114	14.88	3.617	1.73
1990	210.130	34.443	16.39	3.792	1.80

Fuente: Unidad de Análisis de Política Económica - UDAPEX (Chávez, 1991)

El Cuadro 5 revela las diferencias en el empleo en el sector público boliviano entre 1980 y 1990, mostrando el alejamiento gradual del Estado como ente participativo de la economía. Desde 1985 el descenso del empleo en organismos públicos es notorio, a pesar del leve repunte reflejado en 1990. Esto viene a ratificar cómo operó la Nueva Política Económica boliviana a fin de abrir el camino a la privatización y lograr la estabilización económica del país.

3. Colofón

Tomando en consideración nuestra tesis sobre la relación económica entre Chile y Bolivia, se puede afirmar que los vínculos económicos impulsados por los economistas chilenos del régimen de Pinochet, lograron sus objetivos. El alcance de este acercamiento bilateral económico desplegado por los países en estudio propició la instauración de una conexión en esa dirección con el país limítrofe y proporcionó de esta manera una "relativa" prolongación política al régimen militar chileno. Lo anterior fue reforzado por la aplicación de manera ortodoxa del modelo económico de corte aperturista proveniente de la Escuela de Chicago, que se convirtió en un fenómeno económico positivo y proporcionó adecuados resultados externos para Pinochet. Por ello, a partir de la segunda mitad de los años 80s, el sistema económico chileno fue considerado como un ejemplo para la región.

Si bien la relación con el régimen de Bánzer y los posteriores gobiernos bolivianos se reforzó en respuesta a una situación de aislamiento internacional de Chile y sustentada por el mundo occidental, esta externalización chilena se amplió como resultado de una seguridad en que el modelo aplicado resarcía de alguna forma el aislamiento político y fortalecía el establecimiento de relaciones internacionales subregionales. Esta concordancia económica gestada esencialmente por el empresariado local y vecinal se mantuvo en el tiempo y se distanció de los históricos conflictos políticos entre Chile y Bolivia.

Por tanto, la presente investigación devela la existencia de una relación económica chileno-boliviana importante y políticamente estratégica para posicionar a Chile en el escenario internacional, que rompió con la clásica mirada separatista acuñada a lo largo de la historia geopolítica de los países analizados. El factor económico estuvo y estará presente en las relaciones internacionales de ambos países, contribuyendo a la aproximación bilateral, a reforzar los nexos económicos existentes y, con ello, a contribuir para acabar con los prejuicios y chauvinismos de uno u otro lado de la frontera.

REFERENCIAS

- Correa Sutil, Sofia. 2005. *Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Editorial sudamericana.
- Chávez, Gonzalo. 1991. "Macroeconomía de la privatización en Bolivia". Instituto de investigaciones socioeconómicas, Universidad Católica Boliviana.
- Dinges, John y Saúl Landau. 1986. "Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno". Chile: Prospec.
- Estay, Manuel. 1988. *Las relaciones económicas internacionales de Chile y el contexto mundial*. México: Cuadernos de casa de Chile.
- Edwards, Sebastián. 1984. "Estabilización con liberalización: diez años del experimento chileno con políticas de mercado libre, 1973-1983". En: *Revista de Estudios Públicos*.
- Fontaine, Juan Andrés. 1993. "Transición económica y política en Chile: 1970-1990". *Centro de Estudios Públicos-CEP*, Chile.
- Ffrench-Davis, Ricardo. 2001. *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*. Chile: Dolmen ediciones.
- Klein, Herbert. 1982. *Bolivia: the evolution of a multi-ethnic society*. New York: Oxford-Press.
- Klein, Herbert. 1993. *Historia de Bolivia*. La Paz: Editorial Juventud.
- Larroulet, Cristián. 1994. "Efectos de un programa de privatizaciones: el caso de Chile (1985-1089)". *Centro de Estudios Públicos-CEP*, Chile.
- Muñoz, Heraldo. 1986. *Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno*. Chile: Prospel.
- Mesa, Carlos, José de Mesa y Teresa Gisbert. 2003. *Historia de Bolivia*. La Paz: Editorial Gisbert.

- Nikitenko Villarroel, Miguel. 2002. "La acción colectiva en Bolivia: cambio y transformación de los conflictos sociales, 1970-1998". En: *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano*. Argentina: CLACSO.
- Quitral Rojas, Máximo. 2005. *Las relaciones político-económicas entre Chile y Bolivia: 1973-1989*. Santiago,
- Rojas, Francisco. 1997. "Chile, cambio político e inserción internacional, 1964-1997". *Estudios Internacionales*. Chile.
- Rocabado Sánchez, José. 1995. *Opinión pública y consenso frente a Chile*. Bolivia.
- Strange, Susan. 1994. "Reconsiderando el cambio estructural en la economía política internacional: Estados, empresas y diplomacia". En: Richard Stubb and Geoffrey R.D. Underhill (editor), *Political Economy and the Changing Global Order*. London: The Mc Millan Pren.
- Sánchez Fuentes, Rigoberto. 2004. "La oferta portuaria de la región de Tarapacá al servicio del comercio exterior de Bolivia". En: *Bolivia y Chile, propuestas de la integración para el siglo XXI*. *Revista de Estudios Internacionales* (Unap), Iquique.
- Seoane, Alfredo. 1997. *Bolivia y Chile: complementación económica y asimetrías*. Bolivia: Udapex.
- Vergara, Pilar. 1984. *Auge y caída del neoliberalismo en Chile: un estudio sobre la evolución ideológica del régimen militar*. FLACSO.
- Wisecarver, Daniel. 1983. *Dogmatismo y pragmatismo: una década de política económica en Chile*. Centro de Estudios Públicos, Chile.

